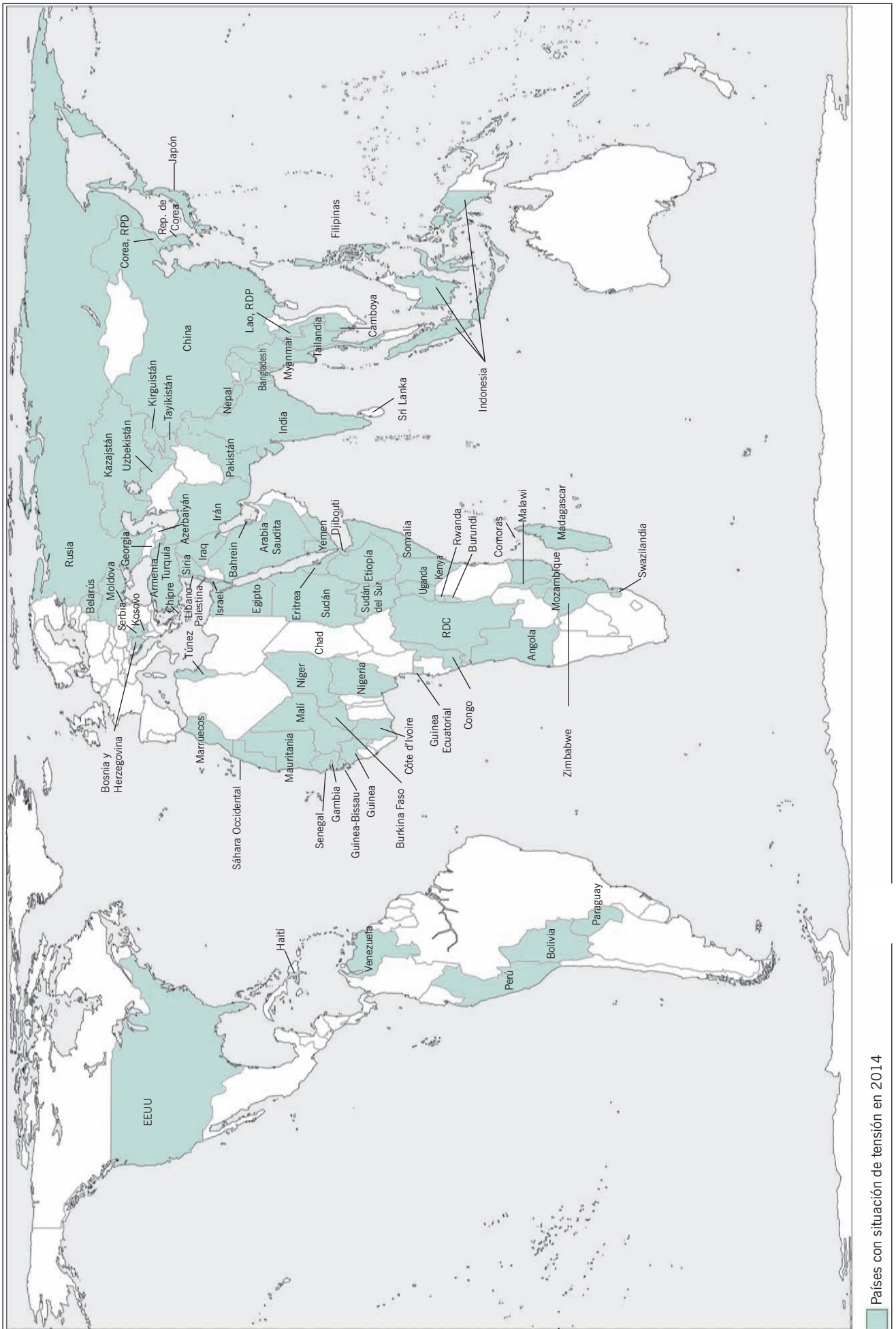


Mapa 2.1. Tensiones



2. Tensiones

- Durante 2014 se registraron 95 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (38) y Asia (24), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (14), Oriente Medio (14) y América (cinco).
- A pesar de la firma del acuerdo de paz en Mozambique, las irregularidades detectadas en las elecciones de octubre provocaron una escalada de la tensión.
- Burkina Faso fue escenario de protestas ciudadanas contra la extensión del mandato del presidente, seguidas de la toma de poder por el Ejército y el inicio de un proceso de transición bajo liderazgo civil.
- Se produjo una escalada del número e intensidad de las acciones de violencia en Kenya por parte de grupos simpatizantes de la insurgencia somalí al-Shabaab.
- La relación entre India y Pakistán fue de fuerte tensión y continuas violaciones al alto el fuego por parte de los dos Ejércitos que ocasionaron decenas de muertes.
- Se agravó la tensión política en Sri Lanka con numerosos episodios de violencia y un deteriorado clima político que derivó en la convocatoria de elecciones presidenciales.
- Se incrementaron las violaciones del alto el fuego por parte de Armenia, Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán, lo que produjo un aumento de víctimas mortales y motivó llamadas de alerta.
- El clima de convulsión se cobró la vida de decenas de personas en Egipto, en paralelo a una creciente consolidación de la influencia de los sectores militares en la vida política del país.
- El proceso de transición en Yemen se vio severamente afectado por un clima de polarización y violencia creciente que puso al país al borde de una guerra civil.
- Las repercusiones de la guerra en la vecina Siria continuaron afectando gravemente a Líbano, donde diversos hechos de violencia causaron la muerte de más de 200 personas en 2014.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2014. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2014. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan las situaciones de tensión durante 2014.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en el año 2014

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
África			
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	1
	Autogobierno, Recursos		=
Burkina Faso	Interna	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil	1
	Gobierno		↑
Burundi	Gobierno	Gobierno, oposición política y social, grupo armado FNL	3
	Interna Internacionalizada		↑
Chad	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Comoras	Interna	Gobierno de la Unión de las Comoras ostentado por Grand Comora, Fuerzas Armadas, oposición política y social (partidos políticos y autoridades de las islas de Anjouan, de Moheli, de Grand Comora), misión de la UA	1
	Autogobierno, Gobierno		=
Congo	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Côte d'Ivoire	Interna Internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↓
Djibouti	Interna	Gobierno, oposición armada (FRUD), oposición política y social (UAD)	1
	Gobierno		=
Eritrea	Interna Internacionalizada	Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		↓
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social	1
	Gobierno		=
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	1
	Autogobierno, Identidad		=
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		↑
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		↓
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		↓
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la región dentro de ese Estado a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto. Esta última opción se utiliza en los casos en que existe más de una tensión en un mismo Estado o en un mismo territorio dentro de un Estado, con el fin de diferenciarlos.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2014 con la del año 2013 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2014 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Kenya	Interna Internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), SLDF, secta Mungiki, MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya	3
	Identidad, Gobierno, Recursos, Autogobierno		↑
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	2
	Gobierno, recursos		↓
Malawi	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Malí	Interna	Gobierno, ex Junta Militar, sectores leales al ex presidente Amadou Toumani Touré	1
	Gobierno		=
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁵	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mauritania	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, AQMI, MUYAO	1
	Gobierno, Sistema		=
Mozambique	Interna	Gobierno, antiguo grupo armado RENAMO	2
	Gobierno		=
Níger	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política (Coordinadora de Fuerzas para la Democracia y la República) y social, MUYAO, Firmantes de Sangre	1
	Gobierno		=
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, MEND, MOSOP, NDPVF y NDV, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
	Identidad, Recursos		↓
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social y antiguos grupos armados de oposición	2
	Gobierno		=
RDC – Rwanda ⁶	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, ADF-NALU, M23, LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna Internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		↑
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		=
Somalia (Somalilandia Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	1
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	2
	Recursos, Identidad		=

5. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.
6. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe Alerta! Aunque comparten características similares, en el Alerta 2015 se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Swazilandia	Interna	Gobierno, partidos políticos, sindicatos, ONG defensoras de los derechos humanos y movimientos pro-democracia	1
	Sistema		=
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, Ansar al-Sharia	2
	Gobierno		=
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares	2
	Gobierno		↑
Paraguay	Interna	Gobierno, EPP	1
	Gobierno		=
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	2
	Gobierno, Recursos		↓
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), Oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales	2
	Gobierno		↓
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China – Japón	Internacional	China, Japón	2
	Territorio, Recursos		↓
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	2
	Gobierno		=
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	3
	Sistema		↑
Filipinas (Mindanao-MNLF)	Interna	Gobierno, facciones del grupo armado MNLF	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Filipinas (Mindanao-MILF)	Interna	Gobierno, MILF, BIFF	3
	Autogobierno, Identidad		=
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (Khole-Kitovi), NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		=
India (Tripura)	Interna	Gobierno, oposición armada (NLFT, ATTF)	1
	Autogobierno		=

7. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Indonesia (Aceh)	Interna	Gobierno indonesio, Gobierno regional de Aceh, oposición política	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Kazajstán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y regionales	1
	Sistema, Gobierno		=
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		=
Myanmar	Interna	Gobierno, oposición política y social (partido opositor NLD), grupo 969	2
	Sistema		=
Nepal	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos –UCPN(M), CPN(UML)–, antiguo grupo armado de oposición maoísta PLA	1
	Sistema		↓
Nepal (Terai)	Interna	Gobierno, organizaciones madhesis políticas (MPRF) y armadas (JTMM, MMT, ATLF, entre otras)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos)	3
	Gobierno, Sistema		=
Sri Lanka (nordeste)	Interna	Gobierno, oposición política y social tamil	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Tailandia – Camboya	Internacional	Tailandia, Camboya	1
	Territorio		↑
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política (Partido del Renacimiento islámico) y social (grupos regionales: gharmis, pamiris), antiguos señores de la guerra, grupos islamistas ilegales (Hizb-ut-Tahrir, Movimiento Islámico de Uzbekistán [IMU]), Uzbekistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema		=
Europa			
Armenia–Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Armenia	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Azerbaiyán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Belarús	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno Identidad, Gobierno		↑
Chipre	Interna internacionalizada	Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Moldova, Rep. de (Transdniestria)	Interna internacionalizada	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Rusia	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados del norte del Cáucaso	1
	Gobierno		↓
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Chechenia, grupos armados de oposición	2
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Rusia (Ingushetia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Ingushetia, grupos armados de oposición (Jamaat Ingush)	1
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Rusia (Karachaevo-Cherkesia)	Interna	Gobierno ruso, Gobierno de la república de Karachaevo-Cherkesia, grupos armados de oposición	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↓
Rusia (Osetia del Norte)	Interna	Gobierno ruso, Gobierno de la república de Osetia del Norte, grupos armados de oposición	1
	Sistema, Identidad, Gobierno		↓
Serbia – Kosovo	Internacional ⁸	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Oriente Medio			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, AQPA, ISIS	2
	Gobierno, Identidad		↑
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, Hermanos Musulmanes (HM) y su brazo político Partido Libertad y Justicia (PLJ), Fuerzas Armadas, coalición Frente de Salvación Nacional (FSN), partido salafista al-Nour, Movimiento Tamarod, Movimiento 6 de Abril, coalición islamista Alianza para el Apoyo de la Legitimidad	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política, religiosa y social	1
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, PJAK, Gobierno Autónomo del Kurdistan iraquí (KRG), Iraq	1
	Autogobierno, Identidad		=
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran, Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán – EEUU, Israel⁹	Internacional	Irán, EEUU, Israel	2
	Sistema, Gobierno		↓
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno de la Región del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, grupo libanés Hezbollah y su brazo armado (Resistencia Islámica)	3
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah, Coalición opositora 14 de marzo (liderada por el Movimiento Futuro), Amal, Movimiento Patriótico Libre, Partido Árabe Democrático (alauí), Hizb ul-Tahrir, milicias, Brigadas Abdullah Azzam (vinculadas a al-Qaeda)	3
	Gobierno		↑

8. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.
9. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Oriente Medio			
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam	1
	Gobierno		=
Siria - Turquía	Internacional	Siria, Turquía	3
	Gobierno		=
Yemen	Interna	Gobierno, fuerzas de seguridad, milicias progubernamentales, militares desertores, grupos tribales armados, sectores políticos y sociales	3
	Gobierno		↑
Yemen (sur)	Interna	Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur /Al-Hiraak al-Janoubi)	2
	Autogobierno, Recursos, Territorio		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2014

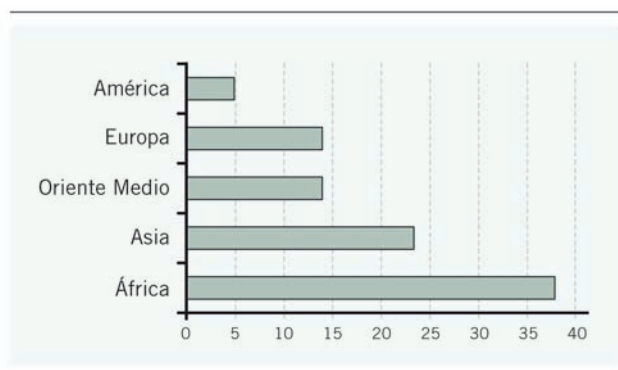
En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2014, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2014 se identificaron **95 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 38 casos, seguida de Asia, donde se registraron 24 casos.** Europa y Oriente Medio fueron escenario de 14 contextos de tensión cada una, mientras en América se identificaron cinco. **La cifra total supone una cierta reducción con respecto al balance registrado el año anterior (99 tensiones).** El descenso en el número de tensiones es atribuible, en parte, al hecho de que diversos casos que habían sido considerados crisis socio-políticas pasaron a ser calificados como conflictos armados en 2014 –RDC (este-ADF), China (Turquestán Oriental), Ucrania, Egipto (Sinaí)– y, por otra parte, a

África continuó siendo el continente con mayor número de tensiones a nivel global (40%), si bien la mayor parte de las tensiones de intensidad más elevada tuvieron lugar en Asia y Oriente Medio

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones 2014



la reducción de la tensión en diversos contextos, que dejaron de ser considerados como crisis socio-políticas. Por otra parte, algunos casos que en periodos anteriores habían sido considerados como conflictos armados, en 2014 fueron analizados como situaciones de tensión: Burundi, Rusia (Chechenia) y Rusia (Ingushetia).

Si bien las situaciones de tensión pueden atribuirse a múltiples factores, el análisis del panorama de crisis en 2014 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global un 70% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados. A su vez, **cerca de la mitad de las tensiones (46%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias.** Cabe destacar que en más de una cuarta parte de las tensiones (27%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

En términos de intensidad de las tensiones, **durante 2014 cerca de dos tercios de las tensiones presentaron una intensidad baja (59%), mientras una cuarta parte de los contextos registró una intensidad media** y algo más de una sexta parte se caracterizó por niveles elevados (16% o 15 de los 95 casos). En términos comparativos con el año anterior, la cifra de tensiones graves se redujo ligeramente en 2014 (un 16% en 2014 frente a un 20% en 2013). Asia y Oriente Medio fueron las regiones con mayor número de tensiones de alta intensidad, con cinco casos cada una. Otros tres casos de alta intensidad se ubicaron en África, dos en América y uno en Europa. **Las**

tensiones de mayor gravedad en 2014 fueron Kenya, Nigeria, Venezuela, Corea RPD-Rep. de Corea, Filipinas (Mindanao-MILF), India-Pakistán, Pakistán, Tailandia, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Egipto, Israel-Siria-Líbano, Líbano, Siria-Turquía y Yemen. Cabe destacar que algunas de estas tensiones de alta intensidad fueron escenario de hechos de violencia con unos umbrales de letalidad superiores al centenar de víctimas, como fue el caso de la violencia intercomunitaria en Nigeria en torno al acceso a recursos, con varios centenares de muertes; la grave crisis multidimensional que afecta a Pakistán –de manera adicional a los conflictos armados que padece–, con escenarios urbanos como el de Karachi, con en torno a dos millares de víctimas mortales, en su mayor parte asesinatos selectivos; los choques entre el Ejército y el BIFF, facción disidente del MILF en la región de Mindanao (Filipinas), con más de un centenar de muertes; hechos de violencia en Egipto a lo largo del año, incluyendo enfrentamientos entre sectores disidentes y fuerzas de seguridad y represión interna contra opositores islamistas y no islamistas, con más de un centenar de víctimas mortales; y varios centenares de personas fallecidas en Líbano, mayoritariamente por choques que involucraron a milicianos de Hezbollah, a grupos armados con base en Siria y al Ejército, entre otros actores.

Más allá de los impactos en términos de letalidad de numerosas tensiones, las consecuencias sobre la seguridad humana fueron amplias, e incluyeron también un elevado número de heridos en tensiones con hechos de violencia graves, así como nuevos desplazamientos de población y violencia sexual.¹⁰ En términos de heridos, fueron especialmente graves durante el año crisis como las de Venezuela (más de 850 heridos en los incidentes derivados de las mayores protestas en los últimos años), Tailandia (más de 700 heridos a causa de choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes de diversos signo) o Bosnia (varios cientos de heridos en protestas en una treintena de ciudades en Bosnia y Herzegovina a comienzos de año). En todo caso, más allá de los impactos directos, muchas de las crisis –tanto de alta y media intensidad como de intensidad baja– acumulaban impactos de larga duración en términos de seguridad humana, ya fue-

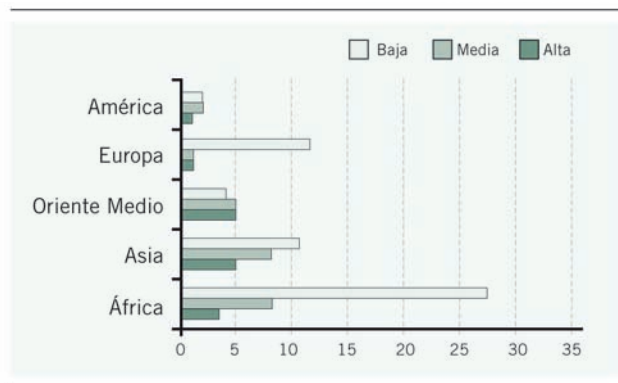
ra por la precariedad de los sistemas públicos –a menudo como consecuencia añadida de las reformas impuestas por los organismos internacionales en los procesos de acompañamiento internacional a la gestión de las crisis actuales o pasadas–, la discriminación crónica contra sectores determinados de población –minorías étnicas o religiosas, mujeres, población LGTBI, entre otros– o las dificultades que procesos como la militarización, la existencia prolongada de minas y las políticas en torno a los recursos naturales, entre otros, suponían para la búsqueda de medios de vida.

En cuanto a la evolución en los niveles de violencia y desestabilización durante 2014, el análisis comparado con el período anterior reveló que **más de la mitad de las tensiones (49 casos o un 52%) mantuvo unos niveles similares a los del 2013**, en otro 28% de los casos se evidenció un deterioro de la situación, mientras que en un 20% se produjo una cierta mejoría. Finalmente, y en cierta consonancia con la tendencia observada en años anteriores, más de la mitad de las tensiones en el mundo fueron de carácter interno (58%), involucrando a actores de un Estado que operaban dentro del mismo. Asimismo, algo más de una cuarta parte de las tensiones (26%) fueron catalogadas como internas internacionalizadas, ya fuera porque algunos de los actores principales de la disputa era foráneo o por la extensión de las disputas al territorio de países vecinos. Tan solo un 16% de las tensiones en 2014 fueron de carácter internacional (15 de los 95 casos).

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, **en 2014 el continente africano se mantuvo como principal escenario de las tensiones a nivel global**. Un 40% del total de contextos de crisis socio-políticas se produjeron en África (38 de los 95 casos), porcentaje similar al de 2013 (39%). Aun así, pese a ser escenario de algunos de los conflictos armados más graves, en lo que respecta a situaciones de tensión sociopolítica, el continente solo registraba tres de las 15 crisis de mayor intensidad de todo el mundo en 2014: Burundi, Kenya y Nigeria, frente a las cinco identificadas en 2013 en ese continente. De esas cinco del año anterior, una (RDC [ADF-este]) pasó a ser catalogada en 2014 como conflicto armado por la grave escalada de violencia, mientras otras dos (Madagascar y RDC-Rwanda) redujeron sus niveles de intensidad ese año. Asimismo, **cerca de tres cuartas partes de las tensiones en África en 2014 fueron de intensidad baja** (27 de los 38 casos o 71%). A su vez, frente al elevado número de tensiones que tendieron a deteriorarse en África en 2013 (44%), en 2014 solo algo más de una cuarta parte de las crisis en el continente africano (ocho de los 38 casos) se agravaron de manera significativa, mientras la tendencia predominante fue a la estabilización (24 casos o 63%).

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



10. Véase el capítulo 4 (Dimensión de género en la construcción de paz).

Por otra parte, en lo que respecta al escenario de las disputas y el origen de los actores involucrados, la gran mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (66%), en líneas similares a años anteriores. Algo más de una quinta parte de las crisis presentó elementos de internacionalización (21%), entre ellos la presencia y acción de actores foráneos, ya fueran actores armados no estatales de diverso tipo –como la organización armada al-Shabaab (procedente de Somalia) en Kenya, las acciones de grupos yihadistas en Níger y Mauritania, la presencia de mercenarios de Liberia y Côte d'Ivoire en este último–, o de tropas internacionales –como la ONUCI y las fuerzas francesas Force Licorne en Côte d'Ivoire–; o la influencia de sectores de la diáspora –como por ejemplo en Eritrea o Rwanda. Solo cinco de las 38 tensiones en África tuvieron un carácter internacional: Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, las crisis fueron de dimensión multicausal, en consonancia con la tendencia a nivel global. Al mismo tiempo, **se observa una importante prevalencia de la oposición a las políticas de los respectivos gobiernos. Este elemento estuvo presente en 29 de las 38 tensiones contabilizadas en el continente en 2014 (76% de los casos).** Durante el año, esa incompatibilidad con el gobierno se materializó de diversas maneras, incluyendo movilizaciones ciudadanas contra las autoridades por cuestiones políticas o sociales –como en Burkina Faso y en RDC, con protestas contra los intentos de sus respectivos presidentes de eliminar los límites a sus mandatos; las amenazas de la oposición en Guinea de organizar nuevas movilizaciones antigubernamentales; y las protestas en Chad por las políticas de recortes en diversos ámbitos, entre otros casos–, la restricción del espacio político por parte de los gobiernos –en Burundi, con un incremento de la presión contra la oposición; en Eritrea, provocando una escalada de peticiones de asilo en el exterior, entre otros–, actividad armada o amenazas de violencia en el contexto de fragilidad institucional y disputas políticas –como las amenazas de RENAMO de vuelta a la violencia en Mozambique si se validaban unos resultados electorales que consideraban fraudulentos–, o intentonas golpistas –como el intento fracasado de golpe de Estado en Gambia a finales de año, o la toma de poder por el Ejército en Burkina Faso tras movilizaciones ciudadanas y disturbios, dando paso a un proceso de transición bajo liderazgo compartido entre diversos sectores.

Adicionalmente, cabe destacar que las demandas identitarias y/o de autogobierno fueron una de las causas principales en un 37% de las tensiones en África. En ese sentido, durante el año cobraron importancia, entre otros casos, las amenazas de ataques de gran escala contra el Ejército eritreo por parte de la rama armada del opositor RSADO por la discriminación contra la comunidad afar. Adicionalmente, cabe destacar que la lucha por el con-

trol de los recursos también fue un elemento relevante en África, presente en 11 de las 38 tensiones (29% de los contextos) como una de sus causas principales. Además, era uno de los factores presentes en dos de las tres tensiones de alta intensidad registradas en el continente (Kenya y Nigeria).

En relación a las tensiones en **Asia**, el continente se caracterizó por una gran heterogeneidad en cuanto a la tipología de las tensiones. En términos de intensidad, **un tercio de las situaciones de tensión graves a nivel global tuvieron lugar en el continente asiático** (cinco de las 15). Respecto al total de tensiones en Asia, éstas representaron una tercera parte. Los contextos de alta intensidad fueron Corea del Norte-Corea del Sur, Filipinas (Mindanao-MILF), India-Pakistán, Pakistán y Tailandia. De estas cinco, la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur y la situación en Tailandia se agravaron durante 2014, mientras en las otras la evolución fue relativamente estable con respecto a la situación ya muy grave del año anterior. En términos generales, en la mayor parte de las tensiones en Asia –independientemente de su intensidad– no hubo cambios significativos durante 2014 (54% de los casos), mientras en cerca de un 30% de los contextos la situación experimentó una cierta mejoría y en un 17% se agravó (cuatro de los 24 casos). Además de en la tensión que afecta a la península de Corea y de la crisis en Tailandia, la situación también se deterioró en Sri Lanka (nordeste) y en relación a la tensión entre Tailandia y Camboya.

Siguiendo la tendencia de años precedentes, **uno de los rasgos característicos de las tensiones en Asia fue la relevancia de las aspiraciones identitarias y de autogobierno.**

Ésta fue una de las causas principales de las disputas en la mitad de los casos, porcentaje regional solo superado por las tensiones en Europa. Un elevado número de esas tensiones en Asia eran contextos con presencia de grupos armados, aunque con grado diverso de actividad armada y recursos. Asimismo, como en el resto de regiones, la oposición a las políticas de los gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de los Estados fue otra de las causas principales, presente en más de la mitad de los contextos (13 de 24 casos). Cabe destacar también que más de la mitad de las tensiones fueron de carácter interno (54%), una cuarta parte fueron tensiones internas internacionalizadas –cuando alguno de los actores de la disputa es foráneo y/o cuando la tensión se extiende a territorios de países vecinos– y una quinta parte fueron de naturaleza internacional. Las tensiones internacionales fueron: RPD Corea-EEUU, Japón, Rep. de Corea (y otros actores); RPD Corea-Rep. de Corea; India-Pakistán; y Tailandia-Camboya.

América concentró el menor número de tensiones a nivel mundial, con un total de cinco casos en 2014, en línea con años anteriores. De ellas, una tensión tuvo niveles de intensidad altos durante el año –Venezuela, en un año

en que se registraron las protestas más intensas de los últimos años, con más de 40 víctimas mortales, en torno a 850 heridos y más de 3.000 detenciones, principalmente en el primer trimestre del año. Del resto de crisis socio-políticas, dos tuvieron niveles de intensidad medios (Haití y Perú) y las otras dos restantes, bajos (Bolivia, Paraguay). Las cinco tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales, que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter, como las mencionadas en Venezuela. En algunos casos, ese factor se dio en combinación con otras causas, como las demandas identitarias y/o de autogobierno (Bolivia) o las disputas en torno al acceso o uso de recursos (Bolivia, Perú). Entre las crisis de intensidad media, cabe destacar el deterioro de la situación en Haití, con numerosas protestas antigubernamentales y nuevos retrasos en las elecciones; mientras, en Perú, la situación mejoró y no se registraron enfrentamientos significativos entre el Ejército y las facciones remanentes de Sendero Luminoso, aunque el Estado mantuvo la presión militar, política y judicial contra el grupo. Cabe destacar que el caso de Haití fue el único contexto de tensión interna internacionalizada en América, por el papel de la MINUSTAH en el país, mientras que el resto de tensiones tuvo carácter interno. Cabe mencionar que aunque no se identificaron contextos de tensión dentro de su territorio, EEUU se vio involucrado en tensiones internacionales fuera del continente americano, tanto en Asia como en Oriente Medio. EEUU fue un actor relevante en la tensión internacional en torno al programa nuclear norcoreano y en la disputa sobre el programa atómico iraní, entre otras, así como en diversos conflictos armados.¹¹

En cuanto a Europa, en línea con la tendencia de años anteriores, el panorama de contextos de tensión se caracterizó por la preeminencia de situaciones de baja intensidad, que representaron en torno a un 85% de los casos (12 de 14), mientras que el continente solo registró una situación de alta intensidad: la disputa entre Armenia y Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, que fue escenario durante el año de una escalada significativa de las violaciones del alto el fuego. Estos niveles reducidos de inestabilidad y violencia contrastaron con el potencial impacto desestabilizador del conflicto armado ucraniano en el continente. **La pseudo Guerra Fría entre las instituciones euroatlánticas y Rusia derivada de la guerra en Ucrania influyó en diversas tensiones existentes en el continente europeo, como en Moldova (Transnistria), fronteriza con Ucrania, donde los actores principales pusieron a sus fuerzas en alerta.** Algo más de la mitad de las tensiones se agravaron durante 2014 (ocho de los 14 casos), mientras un 28% de las disputas registraron cierta mejora y un 14% se mantuvieron sin cambios significativos. En relación a las causas de fondo de las tensiones en Europa, cabe destacar que **cerca de cuatro quintas partes de las disputas tenían entre sus**

En el continente americano, en 2014 Venezuela fue escenario de las protestas más intensas de los últimos años

causas principales demandas identitarias y/o de autogobierno (11 de los 14 casos). La oposición a las políticas de los gobiernos también fue un factor destacado, presente en más de dos tercios de los casos (10 casos). En 2014, esa dimensión cobró relevancia en Bosnia y Herzegovina, con protestas a principios de año en una treintena de ciudades, dinámica alejada del habitual eje sectario y centrada en reclamaciones de mayor bienestar y en el rechazo a las privatizaciones de empresas y sus efectos sociales. Las protestas antigubernamentales también cobraron relevancia en Abjasia, con movilizaciones que forzaron un cambio de Gobierno, que a su vez profundizó aún más las relaciones con Rusia. También en Kosovo se agravaron las disputas internas en torno al poder político tras las elecciones generales. Por otra parte, cabe destacar que la mitad de las tensiones en Europa fueron de carácter interno (siete de los 14 casos), mientras un 36% fueron internas internacionalizadas y un 14% fueron internacionales (dos casos).

Por último, en lo que respecta a la situación de las tensiones **en Oriente Medio, cabe destacar que un año más fue la región con mayor porcentaje de tensiones de alta intensidad sobre el total de disputas en su región** (36% o cinco de los 14 casos), afectada por las dinámicas activadas en la región desde 2011, agravadas por la evolución de los acontecimientos en 2014 en las guerras de Siria e Iraq, que impactaron durante el año en muchas de las tensiones existentes. **Las tensiones de mayor gravedad en términos de violencia e inestabilidad fueron Egipto, Israel-Siria-Líbano, Líbano, Siria-Turquía y Yemen.** Así, Egipto fue escenario de continuas movilizaciones y enfrentamientos entre sectores disidentes y fuerzas gubernamentales, con más de un centenar de víctimas mortales, y una mayor influencia del Ejército en la vida política. En relación a Israel-Siria-Líbano, se incrementaron los incidentes y hechos de violencia, incluyendo ataques, incursiones y escaramuzas, en un entorno de seguridad cada vez más inestable. Líbano, por su parte, fue escenario de una extensión de la guerra en Siria, con enfrentamientos frecuentes de Hezbollah y el Ejército con grupos armados con base en Siria, con más de dos centenares de muertes, según recuentos parciales. También la zona fronteriza entre Siria y Turquía asistió a una escalada de tensión, con incidentes y acusaciones cruzadas entre ambos países, entre otros elementos. A su vez, la tensión en Yemen escaló gravemente, con crecientes niveles de polarización, violencia e inestabilidad, así como la toma de control de la capital por las fuerzas al-houthistas, que forzaron un cambio político, evidenciándose una mayor interrelación entre las diversas disputas en el país.

En términos de la evolución de las tensiones, la mayor parte de los casos en Oriente Medio (57%) mantuvo niveles de violencia e inestabilidad similares a los de 2013 (ocho de 14 tensiones) y en otro 36% la situación

11. Véase el capítulo 1 (Conflictos armados).

se agravó (cinco de 14 casos). **Los contextos que vieron agravar sus dinámicas de conflicto fueron: Arabia Saudita, Irán (Sistán Baluchistán), Iraq (Kurdistán), Líbano y Yemen.** Solo una de las tensiones mejoró: la que enfrenta a Irán con diversos países de la comunidad internacional por su programa nuclear, ante el avance de las vías diplomáticas, en línea con el año anterior. A nivel general, en Oriente Medio la gran mayoría de las tensiones fueron internas (43%, o seis de los 14 casos) o internas internacionalizadas (36% o cinco de las 14 tensiones). Como en el resto de regiones, las tensiones en Oriente Medio respondieron a múltiples causas. El factor más presente en el origen de las disputas en esta región fue la oposición a las políticas internas o internacionales de los respectivos gobiernos, en un 71% de los casos (10 de las 14 tensiones). Las demandas identitarias y/o de autogobierno también fueron un elemento relevante entre las causas principales, presente en un 42% de los casos.

La guerra en Siria influyó negativamente en varias de las tensiones de mayor intensidad en Oriente Medio, con un grave deterioro de la situación en Líbano

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Madagascar	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas

Síntesis:

Desde el fin del régimen comunista en los años noventa la isla ha vivido procesos de inestabilidad política intermitentes. La toma inconstitucional del poder por parte del antiguo alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, contando con el apoyo del Ejército, generó una nueva crisis política en marzo de 2009. Las dificultades para lograr un acuerdo de reparto del poder entre los principales líderes políticos han llevado a la parálisis institucional, produciéndose brotes de violencia esporádicos. Por otra parte, en el marco de la crisis económica que afecta al país en los últimos años, en el sur de Madagascar desde mediados de 2012 se desencadenó una espiral de violencia derivada de los robos y saqueos de los dahalos (ladrones en malgache) contra la población civil, que provocó una desmesurada intervención de los cuerpos de seguridad, la creación de milicias de autodefensa y la contratación de empresas de seguridad privadas para sofocar la crisis.

En lo concerniente al ámbito político, durante el año se produjeron importantes avances en el proceso de transición política que atraviesa el país en los últimos

años. El presidente Hery Rajaonarimampianina ganó las elecciones presidenciales en segunda ronda celebrada el 20 de diciembre de 2013 en un clima de normalidad. La Corte Suprema Electoral confirmó en enero la victoria de Rajaonarimampianina, candidato del presidente saliente Andry Rajoelina, con el 53,5% de los votos, frente al ex ministro de Sanidad Jean Louis Robinson, candidato del presidente depuesto Marc Ravalomanana, que obtuvo el 46,5% de los votos. Rajaonarimampianina nombró el 16 de abril como primer ministro del país a Roger Kolo. Éste se convirtió en el nuevo primer ministro como parte del proceso de transición política que está llevando a cabo el país. Diversos países celebraron este paso, que culmina el proceso democrático iniciado con las elecciones legislativas y presidenciales celebradas a finales de 2013. La organización que agrupa a los países de África Austral, la SADC, también celebró la decisión. Por su parte, la Organización Internacional de la Francofonía decidió a finales de marzo integrar nuevamente a Madagascar en la organización después de haber estado suspendido durante los últimos cinco años, siguiendo la senda de la UA en enero. En mayo, el Banco Mundial anunció la entrega de 400 millones de dólares a Madagascar, y la UE, FMI, EEUU también reanudaron las relaciones políticas plenas y la ayuda oficial al desarrollo, interrumpidas desde el golpe de 2009. No obstante, la voluntad de retornar del exilio al país del ex presidente Marc Ravalomanana y el rechazo del actual presidente a permitirlo, fue la única cuestión que ensombreció el proceso durante el año. En este sentido, el 12 de octubre, Ravalomanana decidió retornar secretamente al país después de cinco años en el exilio, lo que fue visto como un intento de cuestionar la legitimidad del actual presidente. La UA y la SADC condenaron esta decisión de Ravalomanana, que fue arrestado por las autoridades con el argumento de la necesidad de protegerle, y se produjeron diversas manifestaciones de protesta que fueron dispersadas por la Policía. Posteriormente fue sometido a arresto domiciliario. En noviembre, los antiguos presidentes Andry Rajoelina, Ravalomanana y el actual presidente, Hery Rajaonarimampianina, acordaron llevar a cabo un proceso de reconciliación nacional, que Rajaonarimampianina pretendió liderar. El 19 de diciembre se celebró una reunión entre el actual presidente y sus predecesores, los antiguos presidentes Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Albert Zafy y Didier Ratsiraka, liderada y facilitada por la Malagasy Christian Council of Churches (FFKM).

Por otra parte, la cuestión que continuó generando una mayor preocupación fue **la continuación de los actos de violencia en el sur del país.** El distrito de Amboasary fue el epicentro de los enfrentamientos y acciones violentas, que causaron decenas de víctimas mortales y el desplazamiento de unas 3.000 personas, y el Gobierno desplegó fuerzas gubernamentales adicionales para frenar los enfrentamientos intercomunitarios incentivados por los actos de saqueo de ganado. El Gobierno informó en julio que la operación que había llevado a cabo en el sur durante los

últimos meses en la que habían participado 200 militares de las fuerzas especiales, apoyados por la población local contra los ladrones de ganado (zebús, principalmente) conocidos como dahalos, había causado la muerte de decenas de ladrones y la recuperación de centenares de cabezas de ganado, pero posteriormente se constataron nuevos enfrentamientos en agosto. No obstante, el Gobierno estableció una amnistía general a los dahalos si se rendían y en octubre se acogieron a esta rendición en masa 2.280 antiguos dahalos. Sin embargo, diversas organizaciones manifestaron su pesimismo ante esta decisión por el clima de impunidad que instaura y por el hecho de que este grupo de antiguos ladrones no disponen de recursos para subsistir en la sociedad, y las autoridades no han establecido ningún tipo de fondo de compensación o mecanismo para la creación de puestos de trabajo.

A pesar de la firma del acuerdo de paz que facilitó la celebración de las elecciones en Mozambique, lo ajustado de los resultados y las irregularidades observadas dispararon nuevamente las alarmas

Durante la primera parte del año **se produjo una reducción significativa de la tensión y tras la firma del acuerdo de alto el fuego y posterior acuerdo de paz se facilitó la celebración de las elecciones en octubre, aunque lo ajustado de los resultados y las irregularidades observadas dispararon nuevamente las alarmas a finales de 2014.** RENAMO, el principal partido de la oposición, había condicionado su participación en las elecciones de octubre de 2014 a una serie de reformas políticas. Ante la negativa del Gobierno liderado por FRELIMO de llevar a cabo estas reformas, RENAMO había retirado su firma el 21 de octubre de 2013 del acuerdo de paz de 1992. Desde entonces se produjeron enfrentamientos esporádicos. Aunque a

principios de enero milicias armadas del partido político RENAMO se establecieron en el distrito de Homoine, lo que provocó el desplazamiento de población en esta zona sureña del país –que había sido en el pasado su principal base militar– posteriormente, el 21 de febrero, los parlamentarios votaron una reforma de la Comisión Electoral Nacional (CEN), que contribuyó a desencallar la crisis. El principal cambio fue que la CEN incrementaría su número de miembros de 13 a 17 y RENAMO obtendría dos asientos adicionales, aumentando su presencia a cuatro miembros, mientras que FRELIMO dispondría de cinco plazas, el partido MDM dispondría de un asiento y las restantes siete plazas estarían ocupadas por representantes de la sociedad civil, convirtiendo a la CEN en un espacio más plural. La agencia de noticias del país, AIM, informó el 14 de marzo que los cuatro miembros de RENAMO ya habían sido nombrados para ocupar sus plazas en la CEN, lo que hacía prever una reducción de la tensión. Posteriormente, el Consejo Nacional de RENAMO se reunió a mediados de junio para analizar la situación política del país, y el partido confirmó que se presentaría en las próximas elecciones del 15 de octubre. En paralelo, aunque en julio se constataron ataques contra objetivos civiles y movimientos de la insurgencia, finalmente el Gobierno y RENAMO llegaron a un acuerdo el 24 de agosto para acabar el conflicto político que enfrentaba a estos dos grupos desde hace dos años y que había tenido episodios esporádicos de violencia armada que hacían temer una reapertura del conflicto que padeció el país desde su independencia en 1975 hasta 1992. Las dos fuerzas alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y acordaron la integración de los combatientes de RENAMO en las Fuerzas Armadas mozambiqueñas y una amnistía para los actos violentos llevados a cabo a partir de 2012. Este pacto facilitó el camino para que el presidente Armando Guebuza (FRELIMO) y el líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, se reunieran en Maputo para firmar el acuerdo de paz que ratificaba la integración de los militantes de RENAMO en los cuerpos de seguridad. El Parlamento ratificó días después el proceso, que dio luz verde al inicio de la campaña electoral de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 15 de octubre. En las semanas previas a la firma del alto el fuego el Gobierno había liberado a varios militantes de RENAMO

Mozambique	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado RENAMO

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabue) y la Sudáfrica del *apartheid*, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egídio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y un desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

detenidos en combates recientes como medida de buena voluntad para facilitar una aproximación con el grupo.

No obstante, el inicio de la campaña electoral provocó un incremento de la tensión en el país. A pesar de producirse denuncias por parte del líder de RENAMO de irregularidades y fraude y acusaciones de parcialidad e intimidación por parte de la Policía y los medios de comunicación públicos, las misiones de observación internacional (SADC, UE, EEUU) calificaron el proceso de justo y transparente, reconociendo algunas irregularidades pero que no habrían influido decisivamente en el resultado, y algunos brotes esporádicos de violencia. Dhlakama descartó un retorno a la violencia. Las elecciones ratificaron a FRELIMO nuevamente en el poder, de la mano de Filipe Nyusi, quien sucedió a Armando Guebuza, a quien el mandato constitucional impedía presentarse a una tercera legislatura. Sin embargo, el apoyo a FRELIMO cayó del 75% alcanzado en las elecciones de 2009 al 57%, mientras que RENAMO pasó del 16% al 34%. La preocupación ante la corrupción, el autoritarismo y la denuncia contra la creciente desigualdad en el país hizo avanzar a RENAMO, aunque de forma insuficiente para alcanzar el poder. No obstante, los partidos opositores no aceptaron los resultados y la CEN puso de manifiesto la división en el país al aprobar los resultados por 10 votos contra 7. RENAMO exigió negociaciones para establecer un gobierno de unidad nacional o de tipo provisional. En diciembre amenazó con establecer un gobierno paralelo en las provincias donde el partido había conseguido la mayoría y Dhlakama a finales de diciembre amenazó con el retorno a la violencia si el Tribunal Constitucional validaba los resultados electorales. El 30 de diciembre el tribunal validó los resultados electorales, por lo que el clima de tensión se incrementó.

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	1
Evolución trimestral:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil

Síntesis:

Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron

diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas.

La evolución en el país fue convulsa, con protestas masivas contra los intentos de perpetuación en el poder del presidente; la toma de poder del Ejército y la salida del mandatario; y el inicio de un proceso de transición.

Ya en los primeros trimestres del año aumentó la tensión social y política, por el malestar entre la oposición y en algunos sectores oficialistas ante los intentos del presidente, Blaise Compaoré, de reformar la Constitución para eliminar los límites al mandato constitucional –en 2015 culminaba su presidencia. La tensión se tradujo en posiciones en contra y a favor de un posible referéndum sobre los límites de mandato y en movilizaciones sociales en diversos momentos del año. La oposición cifró en entre 300.000 y 500.000 personas la participación en una manifestación en enero, calificada de la más numerosa en décadas, si bien la Policía la redujo a unas 10.000. En este escenario, altos cargos del partido gobernante CDP dimitieron y formaron un nuevo movimiento político. La tensión se elevó en octubre, con un incremento de protestas, principalmente en la capital, como la del 28 de ese mes con centenares de miles de personas. Una treintena de personas murieron y un centenar resultaron heridas en la jornada de protestas del 30 de octubre, día en que el Parlamento debía votar la propuesta del presidente para eliminar las restricciones a su mandato. En esa jornada, manifestantes prendieron fuego al Parlamento, asaltaron la sede de la televisión estatal y del ayuntamiento e incendiaron casas de parlamentarios. Medios de comunicación informaron de disparos con munición real del Ejército contra manifestantes. El Ejército tomó el poder ese día e inicialmente el jefe del Estado Mayor, Nabéré Honoré Traoré, se autoproclamó líder del proceso de transición y anunció la próxima creación de un órgano de transición, a lo que siguió la designación el 1 de noviembre del teniente coronel Isaac Zida como nuevo líder del proceso.

La toma de poder militar generó nuevas protestas ciudadanas y críticas de actores internacionales, como la UA, ECOWAS y la ONU, y la UA amenazó con sanciones si no se traspasaba el liderazgo al poder civil. A comienzos de noviembre comenzaron conversaciones entre el Ejército, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y líderes tribales, con mediación africana (presidentes de Ghana, Nigeria y Senegal). Alcanzaron un pacto el 13 de noviembre, sobre un marco de transición bajo liderazgo civil, que contemplaba el nombramiento de un presidente civil interino, la creación de un órgano legislativo de 90 miembros y elecciones presidenciales y legislativas tras un año de transición. **Un panel especial de líderes políticos, religiosos, civiles, tradicionales y militares designó como nuevo presidente a Michel Kafando** –candidato

del Ejército, antiguo ministro de Exteriores y antiguo representante de Compaoré ante la ONU. A su vez, Kafando nombró al teniente coronel Zida como primer ministro. Ello y la retención de cuatro carteras claves por los militares en el nuevo Gobierno de transición –la de Defensa y Primer Ministro en manos del propio Zida– generó recelos entre diversos sectores, apuntando a que el Ejército estaría intentando controlar al máximo el proceso de transición. Por otra parte, el Gobierno prohibió el partido del anterior régimen, el CDP, así como otras formaciones aliadas. En todo caso, la situación tendió a cierta estabilización en diciembre. Ese mes se anunció la creación de la comisión de reconciliación nacional y reformas.

Burkina Faso fue escenario de protestas ciudadanas contra la extensión del mandato presidencial, seguidas de la toma del poder por el Ejército y el inicio de un proceso de transición

Côte d'Ivoire	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI

Síntesis:

La discriminación política, económica y social hacia los marfileños originarios del norte del país se encuentra en la base de la grave crisis iniciada en el país en los años ochenta. Con un primer conflicto en 2002 y la reactivación de la violencia armada en 2010 tras las elecciones presidenciales, la estabilidad en el país continúa en ciernes. La conclusión de los enfrentamientos en abril de 2011 y la creación de un nuevo Gobierno, con el presidente Alassane Ouattara (de origen norteño) al frente del país, abrieron las expectativas para el cambio. La justicia y reparación a las víctimas, la transformación de leyes discriminatorias, la resolución de las disputas en torno a la propiedad de tierras y la reforma del sector de seguridad, son algunos de los grandes retos que enfrenta el país. La presencia de gran número de armas ligeras, la persistencia de la violencia en el oeste y la inestable frontera con Liberia, donde permanecen grupos de mercenarios, ponen en peligro una paz frágil.

La situación en el país continuó mejorando, con nuevas medidas hacia la reconciliación política y una situación de seguridad mayoritariamente estable, si bien el contexto continuó siendo frágil. En el plano político, en un año previo a los comicios presidenciales de 2015, el diálogo se reanudó en mayo, tras estancarse en los meses previos debido, entre otros elementos, a tensiones vinculadas a los procesos de justicia transicional –en marzo fue transferido a la Corte Penal Internacional el aliado del ex presidente Laurent Gbagbo y líder de los Jóvenes Patriotas, Charles Blé Goudé, acusado de crímenes contra la humanidad en la crisis postelectoral de 2010-2011. Hubo desavenencias entre Gobierno y oposición en torno a la nueva legislación aprobada en junio sobre la Comisión Electoral Independiente y la oposición criticó lo que percibía como sobrerrepresentación gubernamental. La

reelección en agosto de su presidente, Youssouf Bakayoko –votación boicoteada por miembros de partidos políticos opositores y parte de representantes de la sociedad civil– llevó al opositor Frente Popular Marfileño (FPI, por sus siglas en francés, partido oficialista en el anterior régimen) a retirarse de la comisión y a la coalición de partidos Alliance des Forces Démocratiques de Côte d'Ivoire, liderada por el FPI, a suspender parcialmente su participación. En reacción, el Gobierno adoptó medidas para ampliar la composición de la mesa de la Comisión, posición considerada insuficiente por la Alianza, pero

que aun así agradeció. Asimismo, otras medidas durante el año dirigidas a restablecer la confianza y reducir la brecha política incluyeron la autorización al FPI de organizar mítines políticos, por primera vez desde la crisis postelectoral de 2011; la liberación de cerca de 300 personas detenidas en relación a la crisis postelectoral de 2011; o el compromiso de no emprender procesos judiciales contra personas regresadas del exilio. Por otra parte, también en el plano político, el presidente Alassane Ouattara confirmó de nuevo que se presentaría a las elecciones de 2015. Por otra parte, **en el opositor FPI hubo divisiones internas en torno a la elección del liderazgo del partido tras el anuncio del ex presidente Laurent Gbagbo de optar al cargo, para el que había anunciado que optaría a ser reelegido su presidente, Pascal Affi N'Guessan. Finalmente la candidatura de Gbagbo fue invalidada por un tribunal** tras las denuncias de Affi N'Guessan. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, valoró en sus informes sobre Côte d'Ivoire durante el año los avances hacia la reconciliación, la normalización y la recuperación económica del país, aunque señaló los numerosos retos pendientes (marco jurídico para las elecciones, reformas en materia de nacionalidad y cuestión de la tierra, entre otras).

En materia de seguridad la situación permaneció estable en su mayor parte, aunque continuó siendo estructuralmente frágil. **La predominancia de la estabilidad, incluyendo en el oeste del país, favoreció la continuación del retorno de la población desplazada y llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar una reducción del contingente militar de la ONUCI.** Se redujeron las denuncias por incidentes violentos asociados a las fuerzas de seguridad, ex combatientes y dozos (cazadores tradicionales), según constató la ONU a finales de año. **Aun así hubo incidentes durante el año. Entre los hechos más graves, un ataque a mitad de mayo de unos 40 hombres armados contra la localidad de Fetai, en la frontera con Liberia, con un balance de 13 víctimas mortales,** incluyendo tres soldados, y el desplazamiento de unas 2.500 personas. Otros incidentes también en torno a la frontera con Liberia incluyeron un ataque a finales de abril en que se quemaron casas y se saquearon establecimientos, provocando el desplazamiento de otras 2.000 personas. Según el informe de abril del Grupo de expertos sobre Côte d'Ivoire, mercenarios y milicianos seguían activos en Liberia y Côte d'Ivoire y unos 43.000 ex combatientes

seguían armados en Côte d'Ivoire. Además, las denuncias de abusos de tropas, dozos y ex combatientes incluían casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, extorsión y delincuencia. Durante el año hubo también nuevas denuncias por violencia sexual, incluyendo 180 casos verificados de violación entre mayo y diciembre, incluyendo 32 violaciones colectivas, en un contexto de impunidad para los perpetradores. Por otra parte, se renovó el mandato de la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación.

Unos 43.000 ex combatientes seguían armados en Côte d'Ivoire, según el informe del Grupo de Expertos sobre el país

Guinea	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos

Síntesis:

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantienen al país en una situación de inestabilidad.

Continuó la situación de tensión entre Gobierno y oposición, aunque en menor intensidad que el año anterior –un 2013 marcado por continuas protestas opositoras, con una treintena de muertes y más de 250 heridos–, a lo que se añadió el impacto de la epidemia del ébola. Los desacuerdos en 2014 llevaron a la oposición a amenazar con nuevas protestas. En diversos momentos durante el año, la oposición, encabezada por la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) expresó preocupación por los planes del Gobierno de retrasar los comicios locales a 2015. Según la oposición, la cuestión de las elecciones locales había sido uno de los aspectos de los acuerdos políticos de julio de 2013, desmintiendo a un portavoz presidencial que afirmó que ese tema no había sido incluido en los acuerdos. También se acusó al Gobierno de incumplimiento de los acuerdos políticos de 2013. Desde algunos sectores de la oposición también se alertó sobre la falta de avances en los preparativos para las elecciones presidenciales de 2015. El primer ministro, Mohamed Saïd Fofana, anunció su dimisión y la de su equipo de Gobierno a mitad de enero. El presidente, Alpha Condé le reafirmó en su cargo y se formó el nuevo gobierno, sin figuras de la oposición y con la mitad de miembros del anterior gabinete.

En julio el Gobierno invitó a la oposición al diálogo. La oposición aceptó la reanudación del diálogo político, pero puso condiciones. En concreto, reclamó que se abordasen diversos puntos: la elección del operador técnico encargado de gestionar el registro electoral; la corrección de las irregularidades vinculadas al registro electoral; la organización de los comicios locales; la elaboración del calendario electoral, tanto de comicios locales como presidenciales; la mejora del marco jurídico e institucional para los elecciones (legislación electoral, legislación sobre la comisión nacional electoral, tribunal constitucional, tribunal de cuentas, institución nacional independiente sobre los derechos humanos, etc), respeto al principio de neutralidad del servicio público y de acceso igualitario de los partidos a los medios de comunicación del Estado; identificación y persecución judicial de los autores y cómplices de actos violentos en manifestaciones políticas; e indemnización a las víctimas de las últimas protestas políticas. También se puso la condición de que el diálogo político incluyese a los mismos actores que firmaron los acuerdos de 2013. Las partes se acercaron a la consecución de un acuerdo en julio, tras varias reuniones bajo los auspicios del ministro de Justicia, Cheick Sacko. No obstante, un supuesto acuerdo verbal acabó fracasando, ante las denuncias de que el Gobierno había omitido en el anuncio del acuerdo algunos de los pactos alcanzados. La tensión se agravó de nuevo en torno a las peticiones de la oposición de disolución de la comisión electoral por su elección de una compañía francesa para tareas relativas al registro electoral. Asimismo, el clima se empeoró por el asesinato en septiembre del opositor Amadou Oury Diallo, muerte que fue calificada de asesinato político por la UFDG. La oposición amenazó con una nueva campaña de protestas a mediados de diciembre si no se abordaban sus demandas de reforma electoral. En diciembre hubo nuevos ofrecimientos gubernamentales para retomar el diálogo y la oposición volvió a plantear sus condiciones para el diálogo, poniendo de manifiesto las dificultades persistentes de comunicación y capacidad de acuerdos entre ambas partes y apuntando a la incertidumbre en torno al transcurso de los comicios en 2015.

Guinea-Bissau	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, redes internacionales de narcotráfico

Síntesis:

La historia de Guinea-Bissau desde su independencia de Portugal en 1974 incluye una sucesión de guerras civiles y golpes de Estado que han impedido al país alcanzar la estabilidad política además de abortar cualquier intento de funcionamiento democrático. La gran influencia de las Fuerzas Armadas sobre la realidad política del país y los

enfrentamientos entre partidos que representan a diferentes grupos étnicos suponen un gran obstáculo para el logro de la paz. La ruptura del pacto de estabilidad firmado en 2007 entre los principales partidos políticos fue, una vez más, una oportunidad perdida para poner fin a la dinámica violenta que domina la vida política. El impacto cada vez mayor de las redes del narcotráfico internacional en África Occidental se había convertido en un factor añadido a la crisis. El asesinato del presidente, Joao Bernardo Vieira, en marzo de 2009 supuso el inicio de una nueva época de inestabilidad. En abril de 2012 el Ejército perpetró un nuevo golpe de Estado tras una primera ronda en las elecciones legislativas en las que ganó el candidato del PAIGC, que ocupaba el poder, y que fue cuestionada por parte de la oposición, pese al respaldo de los observadores internacionales. Tras el golpe se inició un nuevo proceso de transición.

La situación en el país experimentó una notable mejoría, con el retorno al orden constitucional de la mano de las elecciones legislativas y presidenciales, el restablecimiento de las relaciones con actores internacionales y el impulso a reformas internas. Los comicios transcurrieron en abril en calma, a pesar del retraso inicial –aplazamiento de marzo a abril que contó con el respaldo de la oposición– y de las divisiones internas en el Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) –antiguo partido oficialista y cuyo candidato, Carlos Gomes Junior, resultó ganador en la primera vuelta de las elecciones de 2012 tras las cuales el Ejército dio un golpe de Estado. El candidato del PAIGC, José Mario Vaz, ganó los comicios presidenciales en segunda vuelta en mayo. Tras algún cuestionamiento inicial del candidato independiente Nuno Nabiam –señalado en algunos análisis como el candidato con apoyo militar–, éste aceptó los resultados, como también hizo el Ejército. El PAIGC también obtuvo mayoría en las legislativas y ningún partido llegó a impugnarlas. La participación, del 89,29%, fue considerado un umbral sin precedentes y el secretario general de la ONU la calificó de logro histórico. Las elecciones legislativas y presidenciales fueron consideradas internacionalmente como libres, limpias y transparentes. Se formó un nuevo Gobierno, dominado por el PAIGC, pero con presencia del Partido de la Renovación Social (PRS), principal partido opositor, con 19 y seis miembros respectivamente en el gabinete, junto a otros miembros de formaciones minoritarias. El nuevo primer ministro, Domingos Simões Pereira, apeló al diálogo inclusivo y a la búsqueda del consenso en las principales cuestiones nacionales en su investidura. Asimismo, la nueva Presidencia impulsó reformas internas y, entre otras medidas, destituyó en septiembre al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Antonio Indjai, promotor del golpe y perseguido por EEUU por cargos de complicidad en tráfico de drogas. En su lugar, el presidente nombró al general Biague Nantam. A su vez, en octubre retiró de la función pública al candidato presidencial, aliado de Indjai y figura destacada del PRS, Nuno Nabiam. En clave internacional, con el inicio de la etapa postelectoral, actores internacionales,

como la UA y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, retomaron las relaciones con Guinea-Bissau, rotas tras el golpe militar de 2012. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en noviembre la extensión del mandato de la Oficina de la ONU en el país, UNIOGBIS, por tres meses más. También ECOWAS aprobó prolongar el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz.

Pese a las mejoras políticas en el país, la situación de derechos humanos continuó siendo problemática, con nuevos casos de violencia por motivos políticos durante el año, en un contexto de impunidad extendida. No hubo avances en la investigación de graves violaciones de derechos humanos en periodos anteriores. Por otra parte, en materia de seguridad la situación de mantuvo mayoritariamente estable. Aun así se produjeron algunos incidentes. Entre éstos, 19 personas ocupantes de un minibús murieron en septiembre por la explosión de una mina terrestre. Otras 10 personas resultaron heridas por la explosión de otra mina.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
<i>Tipología:</i>	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, milicias comunitarias

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

La situación en Nigeria continuó siendo frágil, con numerosos episodios de violencia intercomunitaria, así como un clima de antagonismo político en el contexto previo a las elecciones presidenciales de febrero de 2015. Todo ello supuso tensiones añadidas a la grave situación que atraviesa el país por el conflicto armado con la insurgencia islamista Boko Haram (BH).¹² **La violencia entre sectores de la comunidad fulani, seminómada, dedicada al pastoreo y mayoritariamente**

12. Véase el resumen sobre Nigeria (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

musulmana, y tribus asentadas, mayoritariamente agrícolas o dedicadas a la cría de animales y cristianas –como sectores de la comunidad berom–, causó varios centenares de muertes durante el año. Solo entre julio y septiembre, el balance se elevó a más de 300 muertes, según varios recuentos de medios de comunicación y centros de análisis. Entre los incidentes, al menos 100 personas murieron a mediados de marzo en varios días de violencia en diversas localidades del estado de Kaduna, mientras algunas fuentes elevaban el balance a unas 200 víctimas mortales en esos días. Cerca de 300 personas murieron en actos de violencia intercomunitaria en abril en los estados de Nasarawa (centro), Zamfara (noroeste) y Taraba (este), según el recuento de International Crisis Group. A principios de abril, unos 30 pastores fulani murieron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en el estado de Nasarawa. Otras 120 personas murieron en diversos hechos de violencia intercomunitaria en el área de Sanga, en el estado de Kaduna, en junio. Unas 50 personas murieron en hechos de violencia a mitad de julio en el distrito de Gidandawa (estado de Zamfara). Incidentes en una sola jornada de violencia en Tundun-Ababu (estado de Nasarawa) a finales de agosto causaron al menos 60 víctimas mortales. Otras 60 personas murieron en choques a principios de septiembre en ese mismo estado. Según la ONG Human Rights Watch, más de 10.000 personas han muerto desde 1992 por violencia entre tribus dedicadas al pastoreo y tribus agrícolas. Si bien la violencia intercomunitaria no está normalmente vinculada a la violencia protagonizada por BH, durante el año algunas voces alertaron de los riesgos de que el grupo armado pueda hacer aumentar las tensiones intercomunitarias. Y algunos análisis apuntaron a supuestos vínculos entre pastores fulani y BH, señalando que algunos pastores fulani responsables de ataques en el estado de Zamfara eran miembros de BH. A su vez, algunas informaciones en prensa apuntaron a un mayor acceso a armas sofisticadas por parte de sectores de pastores. Por su parte, fuentes gubernamentales informaron durante el año de la detención de supuestos miembros de BH que se hacían pasar por pastores. En paralelo, durante el año la violencia intercomunitaria se extendió más allá de las fronteras de Nigeria, con una veintena de muertes en choques en el segundo trimestre entre agricultores de Camerún y cientos de hombres armados supuestamente pastores fulani que habían huido de los estados nigerianos de Taraba y Benue.

Por otra parte, la situación política en el país se mantuvo convulsa, en un contexto de grave impacto de la violencia de BH, de numerosos retos en materia de gobernanza y corrupción y de antagonismo político en el contexto prelectoral. **Durante el año abandonaron el partido gubernamental PDP destacados miembros, incluyendo docenas de gobernadores estatales y legisladores. El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, fue confirmado como candidato único del PDP a los comicios presidenciales**, mientras el principal partido opositor, el APC, eligió como candidato al ex dirigente

militar Muhammadu Buhari, quien accedió al poder por golpe de Estado en 1983 y presidió el país hasta 1985, cuando Ibrahim Bagangida dio otro golpe militar. El APC centró su discurso durante 2014 en la incapacidad del Gobierno de hacer frente a la inseguridad en el país y la violencia de BH, así como en sus fracasos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Cuerno de África

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EPDF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindicación del árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinización, que lleva a cabo el PFDJ, que controla todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislamiento. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

Uno de los hechos más destacables que pusieron de manifiesto la situación en Eritrea fue el anuncio de ACNUR en noviembre, que señaló que la cifra de demandantes de asilo en Europa durante los 10 primeros meses de 2014 procedentes de Eritrea se había multiplicado por tres en comparación con el mismo periodo de 2013, pasando de 13.000 a 37.000. El 22% de la población refugiada que llegó a Italia era eritrea, la segunda nacionalidad tras la siria en alcanzar las costas italianas. La mayoría son jóvenes

que huían del autoritarismo del régimen eritreo y de la intensificación de una campaña de reclutamiento para participar en el servicio militar obligatorio de duración indefinida. El servicio militar obligatorio fue introducido en el país en 1995, lo que, entre otros factores, ha contribuido a hundir al país –según un informe– en el que el 80% de la población vive de la agricultura de subsisten-

El 22% de la población refugiada que llegó a Italia era eritrea, la segunda nacionalidad tras la siria

cia y, por tanto, es muy dependiente de la mano de obra para poder realizar las actividades del campo.¹³

Por otra parte, otra cuestión importante del año fue la **celebración en agosto de la Conferencia de Semera (Etiopía). En esta reunión participaron miembros de la comunidad afar eritrea y etíope en la que discutieron sobre cuál debería ser la estructura de gobierno que sustituya a la actual en Eritrea.** En paralelo, el grupo armado RSADO afirmó que su brazo armado se había fortalecido y estaba preparado para lanzar ataques a gran escala contra el Ejército eritreo. Además, RSADO añadió que la comunidad afar en el país estaba siendo duramente reprimida por parte del Gobierno eritreo. En la Conferencia de Semera participaron unos 500 representantes entre los cuales había líderes políticos, miembros del RSADO, el movimiento de jóvenes Red Sea Afar, la liga de mujeres, ancianos, representantes de la comunidad refugiada, otras organizaciones de la sociedad civil, observadores internacionales y miembros de la diáspora eritrea. En el segundo trimestre del año una firma de abogados sueca presentó una acusación de crímenes contra la humanidad contra diversos líderes del país, incluido el actual presidente. En paralelo, a finales de junio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión de investigación sobre la situación de Eritrea, a raíz de una resolución del Consejo que condenaba las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el país, resolución que fue rechazada por la propia Eritrea. La política de bloqueo de los medios de comunicación independientes y de la entrada de expertos de la ONU para certificar la situación en el país dificulta la posibilidad de disponer de información real sobre la situación en el país, por lo que solo se dispone de las informaciones de las personas que huyen del país. Amnistía Internacional declaró en 2013 que unas 10.000 personas se encontraban encarceladas en el país por razones políticas desde la independencia de Etiopía en 1993. Por último, cabe destacar un estudio de Human Rights Watch (HRW) publicado en febrero que documenta la colaboración entre los responsables de seguridad de Egipto y Sudán con los traficantes de personas que secuestran y torturan a población refugiada eritrea con el objetivo de extorsionarla y obtener dinero de sus familiares. Así, en los últimos tres años, según HRW, entre centenares y miles de eritreos que huyeron de la represión gubernamental en Eritrea fueron secuestrados en los campos de refugiados en Sudán y vendidos a traficantes en la Península del Sinaí, y muchos de ellos fueron torturados y extorsionados con el objetivo de obtener dinero por su liberación.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Gobierno, Recursos, Autogobierno Interna Internacionalizada

Actores: Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), SLDF, secta Mungiki, MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyu, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, aunque también está pendiente de juicio ante la CPI por su vinculación con los hechos de 2007. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le ha sumado durante 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

Durante el año se intensificaron las acciones de violencia por parte de grupos simpatizantes de la insurgencia somalí al-Shabaab y el goteo de víctimas mortales producto de ataques por parte de éstos y de operaciones de los cuerpos de seguridad del país fueron constantes y sumaron alrededor de 200 víctimas mortales. La mayoría de acciones se produjeron en la zona norte y en la costa. En Mombasa, en la costa sureste, también se produjeron acciones de violencia. Al-Shabaab amenazó en junio con llevar a cabo acciones contra el sector turístico del país, que ha sufrido una importante crisis como consecuencia de las acciones de la militancia islamista. Solo entre los meses de noviembre y diciembre la cifra de víctimas mortales superó las 70 personas, además de haber causado decenas de heridos, a las que se podrían añadir los más de 100 militantes somalíes muertos en noviembre en dos ataques aéreos kenianos llevados a cabo en sus bases en el sur de Somalia, según el Gobierno. De acuerdo con algunos analistas, este ataque habría sido cometido en represalia por otro contra un autobús que viajaba entre

13. Véase Gaim Kibreab, "The national service/Warsai-Yikealo Development Campaign and forced migration in post-independence Eritrea", en *The Journal of Eastern African Studies*, vol.7, no.4., 2013, en The Economist, "Miserable and useless", *The Economist*, 10 de marzo de 2014, <http://www.economist.com/blogs/baobab/2014/03/national-service-eritrea>.

Mandera y Bulla Arabia, en la zona fronteriza entre Kenya y Somalia, a finales de noviembre, en el que murieron 28 personas, que fueron separadas y ejecutadas por ser no musulmanas. A su vez, al-Shabaab anunció que esta acción había sido cometida como represalia a las operaciones que había llevado a cabo la Policía en cuatro mezquitas a principios de noviembre, que fueron cerradas durante semanas y en las que fueron arrestados centenares de jóvenes. La proliferación de ataques, acciones militares de represalia, detenciones, tiroteos y explosiones de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) fue constante, lo que provocó el desplazamiento de centenares de personas. La acción más grave del año se produjo entre el 15 y el 16 de junio en la localidad de Mpeketoni y sus alrededores, en la región del departamento de Lamu, en la que diversos hombres armados dieron muerte a unas 60 personas y esas dos mismas noches otras cinco personas fueron también ejecutadas en esa misma zona.

Durante el año se intensificaron las acciones de violencia en Kenya por parte de grupos simpatizantes de la insurgencia somalí al-Shabaab

Ante esta situación, el Gobierno intentó poner en marcha diversas medidas para atajar el creciente clima de violencia, y el 19 de diciembre aprobó una ley antiterrorista que generó preocupación en EEUU y en diversas organizaciones de derechos humanos, ante lo que supone la implantación de importantes restricciones a libertad de reunión e información. Más de 500 ONG fueron prohibidas, entre las que se incluía a unas 15 acusadas de vínculos con el terrorismo. La coalición política opositora CORD, que atraviesa una fase de fragilidad según diversos analistas, presentó batalla judicial para frenar la ley. En paralelo, el Gobierno también llevó a cabo una fuerte operación de acoso contra el grupo separatista Mombasa Republican Council (MRC), cuyos miembros fueron acusados de reunión ilegal, de actos de conspiración, y en diversas fases del año se produjeron arrestos de decenas de miembros de la organización, como el que tuvo lugar el 31 de diciembre contra el líder del MRC. El Gobierno trató de vincular las acciones de al-Shabaab al MRC aunque el movimiento político independentista rechazó reiteradamente tener ninguna relación con el grupo armado. Otra de las cuestiones destacadas del año fue la detención de alrededor de 4.000 personas de origen somalí por parte de los cuerpos de seguridad de Kenya en un operativo policial sin precedentes en abril, lo que desató una crisis diplomática entre Somalia y Kenya. Las autoridades argumentaron que se trataba de una operación de revisión de documentación pero en realidad ocultaba, según numerosos analistas, la criminalización de toda una comunidad, acusada de tener vínculos con al-Shabaab. Los cuerpos de seguridad trasladaron a miles de somalíes al estadio de Kasarani, principalmente desde el barrio de Eastleigh, conocido como el pequeño Mogadiscio debido a la importante presencia de población de la comunidad somalí. Por otra parte, proliferaron los enfrentamientos intercomunitarios en disputas por la propiedad de la tierra y robos de ganado, sobre todo en la zona norte del país, en los que también murieron centenares de personas durante todo el año. A finales de agosto la Cruz Roja de Kenya anunció

que al menos 77 personas habrían muerto en enfrentamientos entre los clanes degodia y garre en el condado de Mandera (fronterizo con Etiopía y Somalia).

En lo concerniente al juicio sobre la violencia postelectoral que tuvo lugar tras las elecciones de diciembre de 2007 en Kenya en el que **la CPI investigaba la implicación del actual presidente Uhuru Kenyatta y de su primer ministro, William Ruto, finalmente la CPI el 5 de diciembre retiró los cargos de crímenes contra la humanidad que pesaban contra el presidente**. Esta decisión fue interpretada como una dura derrota de la CPI ante la acción del Gobierno keniano para boicotear y dificultar la acción de la justicia internacional. La CPI había solicitado la comparecencia de Kenyatta ante el tribunal para principios de octubre, y también solicitó la de un representante del Gobierno para revisar el estatus de cooperación entre la CPI y el Gobierno. Kenyatta hubiera debido comparecer en marzo, pero la CPI decidió posponerla por falta de pruebas y testimonios, como consecuencia de la poca colaboración ofrecida por el Gobierno. Finalmente, se produjeron algunas movilizaciones durante el año contra el Gobierno por sus fracasos en el campo de la seguridad, el incremento de la criminalidad, el aumento del coste de la vida y la corrupción, entre otras cuestiones.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupo armado FNL

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. Esta situación se ha visto agravada por los planes de reforma de la Constitución por parte del Gobierno.

La proximidad de las elecciones presidenciales, el creciente autoritarismo del Gobierno y la reducción del espacio político y las acciones de insurgencia y con-

trainsurgencia marcaron la evolución de la situación en el país. Durante el año persistió el clima de impunidad, amenazas a periodistas, restricciones a la libertad de reunión y expresión, y el Gobierno llevó a cabo detenciones y numerosos actos de presión a la oposición política. Entre otros, cabe destacar la orden de búsqueda que pesa contra Alexis Sinduhije, fundador de la radio RPA y presidente del partido MSD (que pasó a la clandestinidad en marzo y posteriormente apareció en Bélgica demandando asilo en mayo) y el arresto en marzo de unos 70 de sus militantes tras enfrentamientos con la Policía; el juicio en septiembre contra el presidente de la coalición opositora ADC-Ikibiri, Léonce Ngendakumana (condenado a un año de prisión); y el arresto y juicio de Pierre-Claver Mbonimpa, presidente de la organización de defensa de los derechos humanos APRODH. La detención y procesamiento de este último desencadenó una campaña de solidaridad internacional que contribuyó a que el Gobierno decretara su libertad provisional por motivos de salud a finales de septiembre. En este sentido, Amnistía Internacional denunció en julio la creciente restricción del espacio político en el país, las limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y de reunión, así como el incremento de la violencia política en el país vinculada al gobernante CNDD-FDD. No obstante, conforme avanzó el año se redujeron las ejecuciones extrajudiciales y los casos de tortura y malos tratos, así como los incidentes políticamente motivados en los que estaban implicados las juventudes del CNDD-FDD, las Imbonerakure (aquellos que ven de lejos, en kirundi), que pasaron de 14 de promedio mensual entre enero y julio a tres entre agosto y diciembre, según la ONU. Al destacó que la tensión política se había incrementado a raíz del intento de modificación de la Constitución para permitir al actual presidente presentarse a un tercer mandato. Finalmente, afirmó que las Imbonerakure habían sido responsables de cometer intimidaciones, presiones y actos de violencia, incluso atacando y ejecutando a miembros de la oposición política con impunidad. Un cable confidencial de la ONU divulgado en abril causó un importante revuelo ya que testimoniaba que los Imbonerakure habían recibido armas y uniformes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Diversos representantes y relatores de la ONU denunciaron también este agravamiento de la situación durante sus visitas al país, como Adama Dieng, el relator especial de la ONU para la prevención del genocidio; Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; o Ivan Simonovic, asistente del secretario general de la ONU para los derechos humanos y director de la OHCHR. Los representantes especiales de la ONU, UA, UE y los EEUU denunciaron de forma conjunta las trabas a las libertades y a la libertad de expresión y a las actividades de la oposición política en el país. La ONU estableció una misión electoral en el país (MENUM). La comunidad internacional se debatió entre establecer presiones amigables o bien sanciones para corregir este deterioro de la situación. Los Países Bajos, uno de los principales donantes del país, condicionó su ayuda de 1,3 millones de dólares

Se produjo un incremento de movilización social como consecuencia del creciente autoritarismo del Gobierno burundés y la reducción del espacio político

al proceso electoral a que se respetaran los compromisos de apertura política y ausencia de violencia política.

En lo concerniente a las elecciones legislativas y presidenciales previstas para mayo y junio de 2015, **continuó la importante movilización social en contra de la reforma de la Constitución promovida por el Gobierno**, que pretende permitir al presidente, Pierre Nkurunziza, concurrir a un tercer mandato. El 25 de abril se aprobó la ley electoral por unanimidad, aunque excluía la cuestión de la reforma constitucional. El 24 de noviembre se inició **el registro de votantes, que fue calificado de fraude masivo por la sociedad civil, la oposición política en su conjunto y la prensa independiente, por haber detectado numerosas irregularidades**, como la existencia de documentos nacionales de identidad falsos, distribuidos masivamente entre los sectores próximos al partido en el poder, el CNDD-FDD, incluso a menores de edad, por lo que se exigió el

reinicio del proceso de registro y la dimisión de la comisión electoral (CENI). El propio ministro de Interior reconoció la existencia de irregularidades, así como también la CENI, pero desestimaron la anulación del proceso y el 10 de diciembre anunciaron el cierre de la operación, con 3,7 millones de electores registrados. Además, la CENI también fue acusada de falta de transparencia en la aplicación del calendario electoral. Esta situación provocó un incremento de la tensión política en todo el país, y la comunidad internacional manifestó su preocupación ante el grave deterioro del clima político. El partido tutsi UPRONA se retiró del Gobierno y rechazó los nuevos nombramientos realizados por Nkurunziza surgidos de una facción de UPRONA próxima al poder para mantener los equilibrios etnopolíticos en el seno del Gobierno que exige la Constitución surgida de los acuerdos que pusieron fin a la guerra en el país. No obstante, a diferencia de lo que sucedió en 2010, todos los partidos reiteraron su voluntad de participar en el proceso electoral.

Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se redujeron sustancialmente, ya que en el primer semestre de 2014 se registraron 11 enfrentamientos y desde agosto solo se produjeron tres, según la ONU. No obstante, entre el 30 de diciembre de 2014 y el 3 de enero de 2015 se desencadenaron graves enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y un grupo armado rebelde procedente de RDC en la provincia de Cibitoke, en el noroeste del país. Un clima de confusión envolvió las informaciones en torno a este ataque. **Según fuentes militares desde el anonimato, 105 miembros del grupo armado habrían muerto como consecuencia de los enfrentamientos** y otros cuatro habrían sido capturados de un total de 121 combatientes. El Ejército se habría incautado de armamento de diferente calibre, un mortero y lanzagranadas. Esta fuente anónima señaló que dos soldados habrían muerto en el trascurso de los enfrentamientos, aunque otras fuentes militares aumentaron esta cifra a al menos 12 soldados muertos. Según fuentes oficiales,

el Ejército y la Policía, apoyados por milicias de civiles, interceptaron un grupo de unos 200 combatientes que pretendían alcanzar el bosque de Kibira, en el centro-norte del país, para protegerse. Kibira había sido el santuario de diversos grupos armados en el reciente conflicto que ha afectado al país desde los años noventa. Las fuerzas de seguridad habrían rodeado al grupo en la comuna de Murwi, donde les habrían atacado sin cesar. La oposición y la sociedad civil han denunciado la existencia de diversos casos de rebeldes detenidos que habrían sido desarmados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente. El Gobierno desmintió estas acusaciones señalando que su intención era frenar este grupo y que sirviera de lección a otros grupos, como las FNL de Aloys Nzabampema. La zona fronteriza con RDC ha sido escenario de otros ataques previos de menor intensidad reivindicados por una facción disidente de las FNL, que ha negado estar vinculada con estos últimos hechos. En octubre la MONUSCO confirmó la presencia de las Fuerzas Armadas burundesas en la provincia congoleña de Kivu Sur, donde habrían entrado en combate con sectores de las FNL, aunque se desconoce el número de muertos. También se produjeron enfrentamientos en junio entre el Ejército y remanentes de las FNL cerca de Sangé, en Kivu Sur, acción que tuvo lugar cuatro meses después de que el Ejército hubiera ejecutado a tres supuestos rebeldes en la misma zona. En diciembre de 2013 RDC y Burundi habían renovado el acuerdo por el que el Ejército burundés podía acceder a territorio congolés en persecución de las FNL, y posteriormente se retiró.

Chad	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un

acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria.

La situación en Chad empeoró durante el año. En primer lugar, cabe **destacar el malestar creciente relativo al coste de la vida.** Los profesores de las universidades y los profesionales de la abogacía convocaron una huelga el 10 de noviembre como consecuencia del impago de salarios, a la que se sumaron los estudiantes. Esta situación derivó en protestas desencadenadas el 11 de noviembre contra los recortes en el suministro de gasolina y el incremento de los precios. Los cuerpos de seguridad reprimieron con dureza las protestas y manifestaciones, que se saldaron con diversos heridos y al menos con cinco muertos en noviembre. Los principales focos de protesta tuvieron lugar en las ciudades de Sarh, Moundou y la capital, N'Djamena, en el sur. Las protestas continuaron en diciembre, y mientras que los profesores continuaron con la huelga, los abogados pusieron fin a la suya. Diversos estudiantes universitarios fueron arrestados por su participación en las movilizaciones. En paralelo, cabe destacar la retirada de las tropas chadianas de la RCA debido a las acusaciones de connivencia con los grupos armados y milicias de la coalición Séléka, lo que convirtió a la misión chadiana en objetivo de los ataques de las milicias antibalaka. El detonante definitivo fue la acusación de haber abierto fuego contra sectores antibalakas y población civil a finales de marzo. Por otra parte, a raíz de la muerte de cinco soldados chadianos en la misión de la ONU en Malí (MINUSMA) a mediados de septiembre, el Gobierno chadiano acusó a la ONU de utilizar a sus soldados como escudos humanos.¹⁴ En mayo el Gobierno de Idriss Déby decretó el cierre de la frontera para frenar los brotes de violencia transfronteriza, lo que fue criticado por la comunidad internacional por abandonar a la población civil que huía del conflicto armado en RCA. También a mediados de mayo el Gobierno chadiano anunció estar preparado para combatir al grupo armado islamista Boko Haram (BH) en una cumbre regional celebrada en París en la que participaron los países vecinos de Nigeria, y en junio BH amenazó con perpetrar ataques en la capital chadiana.¹⁵ Chad reforzó las patrullas fronterizas por la creciente inestabilidad.

RDC	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social y antiguos grupos armados de oposición

14. Véase el resumen sobre Malí (norte) en el capítulo 1 (Conflicto armados).

15. Véase el resumen sobre Nigeria (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.¹⁶ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad.

Persistió durante todo el año el clima de tensión derivado de la voluntad del presidente Joseph Kabila de reformar el artículo 220 de la Constitución,

lo que permitiría la extensión del límite de mandatos presidenciales y le facilitaría el camino para mantenerse en el poder. La oposición política organizó diversas movilizaciones durante el año, y la Iglesia Católica del país y EEUU reiteraron su llamamiento a que el presidente Kabila abandonara su puesto en 2016. Kabila pretende poder prolongar su mandato presidencial para las elecciones que tendrán lugar en 2016, cuando se cumpliría su segundo mandato al frente del país (2006-2011, 2011-2016), además del periodo de transición en el que también estuvo dirigiendo el país (2003-2006). El país atraviesa una grave crisis política tras las elecciones legislativas y presidenciales de 2011, cuyos resultados no fueron aceptados por la oposición. Ninguna de las elecciones que deberían haberse celebrado posteriormente a las de 2011 ha tenido lugar. Con el fin de completar el ciclo electoral de las próximas elecciones presidenciales previstas para el 2016, las autoridades revocaron el calendario electoral con el anuncio de la celebración de elecciones locales en 2015, antes de las elecciones provinciales y el Senado. La oposición y numerosos actores de la sociedad civil denunciaron este cambio y se rebelaron contra el proyecto de reforma constitucional. Durante todo el año hubo continuas noticias sobre restricciones de actividades a algunos partidos políticos por parte del Gobierno y los cuerpos de seguridad. Los socios y donantes internacionales continuaron condicionando su apoyo a la publicación del calendario y el presupuesto global para las elecciones.

El 7 de diciembre, Joseph Kabila, en cumplimiento de una de las recomendaciones del diálogo nacional que

tuvo lugar entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre de 2013, nombró un nuevo Gobierno de “cohesión nacional”, ampliamente esperado, formado por 47 miembros de la coalición gobernante y de la oposición política. Esta remodelación supuso el retorno de diversos líderes de los partidos políticos clave de la coalición gobernante a la primera línea de poder. Entre ellos, Evariste Boshab, secretario general del partido de Kabila, el PPRD, fue nombrado viceprimer ministro y ministro de Seguridad e Interior, cargo que le permitirá supervisar el ciclo electoral. El nuevo Gabinete incluía siete mujeres (14% de los altos cargos de ministros y viceministros) y 10 miembros de la oposición fueron cooptados por el nuevo Gobierno, entre los que destaca el secretario general del partido MLC, Thomas Luhaka, que fue automáticamente expulsado del MLC. El 15 de diciembre, en un discurso sobre el estado de la nación, Kabila manifestó los principales ejes del nuevo Gobierno tras haber sido recientemente remodelado, entre los que destacaba la implementación del proceso de descentralización y las reformas socioeconómicas. Además, de cara a recuperar su imagen ante la opinión pública interna, señaló que el país no cedería ante presiones extranjeras en relación a las elecciones presidenciales de 2016, y que la actual situación en el país ya no justificaba la presencia de la misión MONUS-

CO en las dimensiones actuales y que, por lo tanto, había llegado la hora de discutir su reducción. Finalmente, cabe destacar que durante todo el año persistió la inseguridad en la región de Katanga, y en concreto en el “triángulo de la muerte”, entre los territorios de Pweto, Manono y Mitwaba, donde las Fuerzas Armadas congoleesas llevaron a cabo una ofensiva para desarticular a la milicia Mai Mai Bakata Katanga. A mediados de diciembre el último informe del secretario

general de la ONU del año señaló que habían 580.000 personas desplazadas por la violencia y la inseguridad en la región. Por otra parte, cabe destacar la sentencia de 12 años de prisión para el señor de la guerra Germain Katanga por la Corte Penal Internacional el 23 de mayo, por ser culpable de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra cometidos en 2003 en el distrito de Ituri.

RDC – Rwanda

Intensidad: 1

Evolución: =

Tipología: Identidad, Gobierno, Recursos Internacional

Actores: Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)

Síntesis:

Las tensas relaciones entre RDC y Rwanda se remontan a principios de los noventa, cuando el dictador zaireño Mobutu apoyó al régimen rwandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del RPF, insurgencia liderada por

16. Véase la síntesis de RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y RDC (ADF-Nalu) en este mismo capítulo.

Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 toma el poder en Rwanda. Desde ese momento Kagame intentó derrocar a Mobutu y perseguir a los responsables del genocidio de 1994 huidos a RDC. En 1996 apoyó a Laurent Desiré Kabila para derrocar a Mobutu, objetivo que consiguió en 1997. Posteriormente Kabila interrumpió las relaciones con Rwanda, país con el que se enemistó porque pretendía continuar la persecución de los responsables del genocidio. Entre 1998 y 2003 transcurrió la “primera guerra mundial africana”, así llamada por la participación de hasta ocho países de la región en apoyo del Gobierno congolés o contra él, como es el caso de Rwanda. La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras hostiles de Rwanda, entre otros países. Éstas justificaban su presencia con la existencia de grupos insurgentes en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congoleesas para acabar con ellos, mientras ejercían el control y la explotación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por Rwanda y otros países. RDC se ha apoyado en estos grupos hostiles a Rwanda en favor de sus propios intereses, principalmente las FDLR, causantes del genocidio de Rwanda de 1994. Pese a ello, las relaciones entre los dos países, difíciles por la existencia de estos grupos y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar o acabar con éstos, han ido oscilando.

Persistió el clima de tensión entre ambos países y en la primera parte del año se produjo un enfrentamiento que hizo saltar las alarmas.

Los hechos más destacados del año tuvieron lugar en junio, cuando se produjeron diversos intercambios de disparos y enfrentamientos transfronterizos entre las Fuerzas Armadas de ambos países en los que murieron cinco soldados congolese. La zona donde se produjeron los enfrentamientos, Kanyesheja, se encuentra bajo disputa entre ambos países. La Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), organización que agrupa a los diferentes países de la región, llevó a cabo una investigación de los hechos, a petición de Rwanda, investigación que dio la razón a RDC. El informe contradecía la versión rwandesa según la cual las muertes se habrían producido por violación de la integridad territorial de Rwanda, por lo que tendría veracidad la versión congolese que afirma que sus soldados murieron tras ser capturados por las Fuerzas Armadas rwandesas en territorio congolés, trasladados a Rwanda y posteriormente ejecutados. Los investigadores regionales solicitaron la autopsia de los cuerpos de los soldados. Rwanda cuestionó la credibilidad del informe, que no fue firmado por Rwanda, y sí lo fue por ocho países de la región y por la MONUSCO. Los investigadores recomendaron la organización de una reunión regional para discutir en torno a las disputas fronterizas entre ambos países con el objetivo de reducir la tensión. En este sentido, el proceso de demarcación fronteriza entre RDC y Rwanda se revitalizó en agosto. En lo relativo al contencioso del grupo armado hutu rwandés FDLR, su proceso de desarme voluntario permaneció estancado durante toda la segunda

parte del año, lo que provocó advertencias de Rwanda y de la comunidad internacional.¹⁷

Rwanda	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Gobierno Interna Internacionalizada
Actores principales:	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente

Síntesis:

La llegada del colonialismo belga en 1916 exacerbó las diferencias étnicas entre la comunidad mayoritaria hutu y la minoría tutsi. Ésta última fue considerada superior y ocupó el poder político, económico y social en el país de la mano de Bélgica en detrimento de la mayoría de la población. Esta situación provocó un fuerte resentimiento y ya en 1959 se produjeron los primeros brotes de violencia étnica contra la comunidad tutsi. Tras la independencia en 1962, la comunidad hutu tomó el poder. En 1990 se inició un conflicto armado entre el grupo armado RPF, liderado por la comunidad tutsi de Uganda, huidos en 1959, y el Gobierno hutu, que alcanzaron un acuerdo en 1993. Este acuerdo no fue respetado y sectores extremistas hutus llevaron a cabo un genocidio entre abril y junio de 1994 de cerca de un millón de personas en su mayoría tutsis pero también sectores hutus moderados, ante la inacción de la comunidad internacional, que retiró la misión de la ONU que debía supervisar el acuerdo. El RPF consiguió derrocar y expulsar al Gobierno genocida, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Incluso hay sectores que hablan de un segundo genocidio interno, además de los crímenes cometidos por el RPF en suelo congolés en persecución de los responsables del genocidio de 1994 –las antiguas Fuerzas Armadas rwandesas y las milicias Interahamwe, rebautizadas como FDLR– y de los dos millones de refugiados rwandeses huidos a RDC. Desde entonces el presidente Paul Kagame ha gobernado de forma autoritaria, reprimiendo la disidencia política.

La represión y persecución de la oposición política y de sectores disidentes dentro del propio partido en el poder, el Rwandan Patriotic Front (RPF), se intensificó. Antiguos altos cargos del RPF fueron acusados públicamente de conspirar contra el RPF, como la antigua directora de protocolo del presidente, Rose Kabuye, la ex secretaria permanente Mary Baine, y la ex embajadora en Holanda, Immaculée Uwanyirigira. El presidente del Senado, Jean-Damascène Ntawukuliryayo, dimitió tras acusaciones de malversación de fondos, y supuestamente por haberse reunido con diplomáticos sin haber informado. En agosto también fueron arrestados diversos altos cargos militares retirados, entre ellos el general Franck Rusagara, el capitán David Kabuye y el coronel Tom Byabagamba. A principios de año **se intensificaron las tensiones diplomáticas entre Rwanda y Sudáfrica** a propósito de un ataque perpetrado

17. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

por tres hombres armados contra el domicilio del antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa Rwandesas (RDF, actuales Fuerzas Armadas del país) y antigua mano derecha del presidente Paul Kagame, el general Faustin Kayumba Nyamwasa, exiliado en Sudáfrica. A principios de marzo, Sudáfrica decidió expulsar a tres rwandeses y a un diplomático burundés, acusados de complicidad en el intento de asesinato. Rwanda respondió expulsando a seis diplomáticos sudafricanos de su territorio y acusó a Sudáfrica de acoger a terroristas. Cabe señalar que previamente, en enero, fue asesinado en Sudáfrica el antiguo jefe de inteligencia y cofundador del grupo opositor Rwanda National Congress (RNC), Patrick Karegeya. En febrero, el relator especial de la ONU sobre libertad de reunión y asociación, Maina Kiai, criticó al Gobierno de Paul Kagame, calificándolo de régimen dictatorial. El 15 de febrero se reunieron seis partidos políticos opositores en Bruselas para estudiar una potencial alianza. Por otra parte, cabe destacar la controvertida decisión del Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) que absolvió a dos altos cargos de los cuerpos de seguridad rwandeses en febrero. Esta decisión provocó la condena de la asociación Ibuka, formada por supervivientes del genocidio. Por otra parte, cabe destacar que en octubre se celebró el primer debate político sobre la potencial revisión de la Constitución rwandesa, en lo concerniente a la enmienda constitucional que permita a Kagame presentarse a un tercer mandato. Los pequeños partidos aliados del Gobierno de Kagame iniciaron el debate público en una web progubernamental. Bernard Ntaganda, que había liderado al opositor partido PS-Imberakuri (actualmente aliado del RPF), y que fue expulsado del partido y encarcelado en 2010 por amenazar la seguridad del Estado, salió en junio de la prisión y declaró que estos partidos, meras comparsas del RPF, estaban diciendo en voz alta lo que el RPF estaba pensando. Solo un partido recientemente creado, Democratic Green Party, declaró estar en contra de la extensión del mandato presidencial. Durante la cumbre EEUU-África celebrada en agosto en Washington, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, hizo un llamamiento a los líderes políticos africanos a no reformar sus constituciones en busca de beneficios políticos o personales. En diciembre, el Committee to Protect Journalists desveló un informe crítico sobre la libertad de expresión en el país y la autocensura que se aplicaban los medios de comunicación.

En Rwanda se intensificó la represión y persecución de la oposición política y de sectores disidentes dentro del propio partido en el poder, el Rwandan Patriotic Front

Sudán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de estado en 1989 y que ejerce una duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que fueron acalladas por los aparatos de seguridad.

A los conflictos armados que padece el país en las regiones periféricas se le ha sumado una grave crisis política y social en los últimos años, que persistió durante 2014.

Cabe remarcar, no obstante, que las presiones realizadas desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos así como por parte de la comunidad internacional condujeron a que el 27 de enero de 2014 el presidente, Omar al-Bashir, hiciera un llamamiento a los partidos políticos y a la insurgencia a comprometerse en un proceso de diálogo nacional para construir la paz en el país y discutir una posible reforma constitucional, ofrecimiento no exento de cálculos políticos, que fue aplaudido en el seno del país y por parte de la comunidad internacional.¹⁸ No obstante, los preparativos del proceso durante el año fueron lentos y diversos partidos opositores acusaron al partido gobernante, National Congress Party (NCP) de retrasar deliberadamente el diálogo nacional con el objetivo de

celebrar las elecciones en abril de 2015 y posteriormente a ellas reanudarlos. Los partidos opositores exigieron el retraso de las elecciones hasta que culminara el proceso de diálogo nacional. Sin embargo, el Gobierno rechazó estas demandas y acusaciones y remarcó su compromiso con el proceso afirmando que no debería durar más de tres meses. En diciembre todavía no se había iniciado el proceso, aunque sí se habían realizado reuniones preparatorias. Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años continuaron e incluso se intensificaron durante el 2014, en respuesta a las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno. Las autoridades hostigaron y detuvieron a miembros de la oposición política, líderes de la sociedad civil y periodistas, tal y como destacó HRW, que además denunció la aplicación de censura a la prensa.

18. Véase "El diálogo nacional sudanés, la penúltima esperanza de paz en Sudán", en el capítulo 5 (Oportunidades de paz).

Uganda	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió derrocar al Gobierno de Milton Obote. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria mediante un sistema insólito en el continente, una fórmula de “democracia sin partidos”, en la que todo el poder estaba concentrado en manos de Museveni y el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRM, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema pluripartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de febrero de 2011 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental a las demandas de cambio democrático y a las protestas contra el incremento del coste de la vida. En paralelo, la intervención militar de Uganda en Somalia incrementó las amenazas del grupo armado somalí al-Shabaab hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra.

El país continuó inmerso en un clima de crisis política y social. Los cuerpos de seguridad continuaron gozando de un clima de impunidad generalizada que propició prácticas de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno liderado por el presidente, Yoweri Museveni, prohibió y obstaculizó las manifestaciones de la oposición política, intimidó a periodistas y a miembros de la sociedad civil que trabajaban en la lucha contra la corrupción, la explotación de los recursos naturales como el petróleo y la tierra, y sobre todo, los derechos sexuales. El 31 de julio el Tribunal Constitucional dictaminó que la polémica Ley Anti-Homosexualidad, aprobada por el presidente en febrero, era nula porque no hubo suficiente quórum en el Parlamento el día de su aprobación. El Código Penal ya criminaliza las relaciones homosexuales, aunque la nueva ley era mucho más represiva e incrementaba las penas de cárcel. Numerosos gobiernos y organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos condenaron esta ley.

Por otra parte, cabe destacar el brote de violencia que se produjo en julio en la zona occidental. **Se confirmó la**

muerte de unas 100 personas en julio como consecuencia de ataques a diversas comisarías y cuarteles situados en los distritos de Kasese, Ntoroko y Bundibugyo, en la zona fronteriza entre RDC y Uganda. La mayoría de las víctimas fueron como consecuencia de la acción policial para repeler el ataque, en el que murieron cinco soldados y 12 policías. Investigadores de HRW señalaron que los hechos podrían estar vinculados a la brutalidad policial, y las autoridades rechazaron la posibilidad de que se tratara de simpatizantes o miembros del grupo ADF.¹⁹ Además, días después se hallaron tres fosas comunes en el distrito de Bundibugyo con al menos 30 cuerpos. Diversas fuentes señalan que estas víctimas podrían corresponder a enfrentamientos intercomunitarios vinculados con los ataques previos y derivados de la gestión gubernamental por la propiedad de la tierra en estos tres distritos, región donde diversas multinacionales petroleras están a punto de desarrollar la explotación de crudo, en una zona en la que podría haber hasta 3.500 millones de barriles de petróleo. Por último, en relación a la implicación de Uganda en Somalia, se intensificó la amenaza de represalias de al-Shabaab tras la muerte del líder del grupo en septiembre, ya que Uganda afirmó que había proporcionado información a EEUU sobre los movimientos del líder islamista, y la embajada de EEUU en Kampala alertó de una posible acción de al-Shabaab en el país.

Magreb - Norte de África

Marruecos – Sáhara Occidental	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ²⁰
Actores:	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO

Síntesis:

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, MINURSO, supervisa el cese del fuego y se encarga de la organización de una consulta de autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración de un referéndum que incluya la opción de la independencia.

19. Véase el resumen sobre RDC (Este – ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

20. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

La disputa en torno al Sáhara Occidental continuó caracterizándose por el **bloqueo del diálogo entre Marruecos y el Frente POLISARIO; por periódicas manifestaciones de la población saharauí en demanda de derechos económicos, sociales y autodeterminación; por el acoso de las autoridades marroquíes a activistas saharauis; y por incidentes entre manifestantes saharauis y las fuerzas de seguridad marroquíes**. En este sentido, cabe destacar los hechos que se produjeron en el marco de las protestas celebradas en junio en El Aaiún, en demanda de la inclusión de competencias en materia de derechos humanos para la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO), que resultaron en 15 personas heridas; así como los altercados entre población marroquí y saharauí en Dakhla, que dejaron otras siete heridas en mayo. Durante el segundo semestre también se informó de la muerte de un prisionero saharauí en Dakhla. El activista Hasena Elwali, miembro de la Asociación Saharauí contra la tortura, habría fallecido por falta de asistencia médica adecuada, según denunciaron fuentes saharauis. En su informe anual sobre el Sáhara Occidental, publicado en abril, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó que la situación general era de calma y que no se temía una reanudación del conflicto armado a corto plazo, pero también enfatizó las continuas muestras de descontento de la población saharauí. Si bien reconoció que las autoridades marroquíes habían mostrado una mayor receptividad para permitir visitas de delegaciones extranjeras al Sáhara Occidental, el informe destacó que a los visitantes considerados hostiles por Rabat se les denegó el acceso o fueron expulsados. A lo largo de 2014, de hecho, se produjeron varios casos. Según informaciones de prensa, entre abril y agosto Marruecos había expulsado a unos 40 observadores internacionales. Cabe destacar que en su informe, Ban también se quejó de las restricciones que encuentra la MINURSO para entablar contactos con la sociedad civil de manera independiente, que limitan la posibilidad de que la misión pueda formarse una idea integral de la situación en el Sáhara Occidental (Marruecos considera que las prerrogativas de la MINURSO se limitan a asuntos relativos con cuestiones militares y del alto el fuego, y no a cuestiones relacionadas con la sociedad civil). **El mandato de la misión de la ONU fue prorrogado un año más, sin que se le otorgaran competencias para evaluar la situación de derechos humanos**, como ha demandado en los últimos años el Frente POLISARIO y ONG internacionales, entre otros.

En el plano diplomático, el enviado especial del secretario general de la ONU, Christopher Ross, continuó realizando periódicas visitas a la región con el fin de entrevistarse con los diversos actores relevantes en la disputa e intentar desbloquear el diálogo entre Marruecos y el Frente POLISARIO.²¹ Ross mantuvo su política de no convocar una nueva ronda de conversaciones directas entre delegados marroquíes y saharauis hasta que no existan posibilidades ciertas de lograr algún avance. A lo largo del año, sin embargo, las partes dieron muestras de mantenerse en

sus posturas. El Gobierno marroquí continuó impulsando el proceso de regionalización avanzada que comenzaría por el Sáhara Occidental, y presentó su plan de desarrollo para el territorio, que Rabat denomina como “provincias del sur”, en una sesión paralela durante la 27ª reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. A principios de noviembre, en un discurso con motivo del 39º aniversario de la Marcha Verde, el rey marroquí, Mohamed VI, insistió en que el plan de autonomía era lo máximo que Marruecos podía ofrecer en el marco de este conflicto, rechazó cualquier cambio en los parámetros de la negociación o en el mandato de la MINURSO y demandó a EEUU que adoptara una posición menos ambigua en lo referente a esta disputa y que presionara a Argelia para que detenga su apoyo al Frente POLISARIO. Los dirigentes del POLISARIO reaccionaron con críticas a las políticas y declaraciones de las autoridades marroquíes y su secretario general, Mohamed Abdelaziz, advirtió que si falla la diplomacia no habría otra opción que volver al camino de la lucha armada. Cabe mencionar que, según el informe de Ban Ki-moon, saharauis de diversas orientaciones políticas que viven en el territorio controlado por Marruecos han manifestado su frustración por la exclusión del proceso de negociación y que han expresado que no se sienten representados ni por Marruecos ni por el Frente POLISARIO. Algunas de sus reivindicaciones apuntaban a mejorar su presencia en las conversaciones, promover la reunificación de las familias separadas por el conflicto, preservar la identidad cultural de la población autóctona, dar mayor atención a los aspectos jurídicos de la explotación de recursos y facilitar el empoderamiento de la sociedad civil.

Túnez	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, Ansar al-Sharia

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso

21. Véase el resumen sobre Marruecos – Sáhara Occidental en el capítulo 3 (Procesos de paz).

en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país.

El proceso de transición en Túnez volvió a encarrilarse durante 2014, tras la seria crisis que atravesó en 2013 como consecuencia del asesinato de dos altos dirigentes políticos. Así, **durante el año tuvieron lugar diversos hitos en el ámbito político, pero, al mismo tiempo, continuaron produciéndose hechos de violencia vinculados a la actividad de células insurgentes de corte yihadista y a las operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntos militantes, con un saldo de al menos 50 víctimas mortales.** En lo referente a la evolución política, a principios de año –y cumpliendo con el acuerdo suscrito en el marco del Diálogo Nacional a finales de 2013–, el Gobierno liderado por el partido islamista Ennahda entregó el poder a un nuevo Ejecutivo de tecnócratas. El entonces ministro de Industria, Mehdi Jomaa, sucedió a Alí Larayedh como primer ministro, y conformó un gabinete integrado en su mayoría por figuras independientes. El nuevo Gobierno fue ratificado por el Parlamento a finales de enero, coincidiendo con la aprobación definitiva de la nueva Constitución del país. Tras más de dos años de debate, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dio luz verde por amplia mayoría –200 votos a favor, 12 en contra y cuatro abstenciones– a la nueva Carta Magna, que reemplazó a la que había estado vigente desde 1959. La Constitución elaborada por la ANC reconoce al islam como religión de Estado, pero garantiza la libertad de culto; dota a Túnez de un régimen político parlamentario mixto, con ciertas prerrogativas para el presidente; e intenta dar mayores garantías a la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, uno de los artículos del nuevo texto constitucional exige la paridad entre hombres y mujeres en todas las asambleas electas del país y lo compromete en la adopción de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Tras la puesta en marcha de la nueva Constitución, a finales de mayo se aprobó la nueva ley electoral y los distintos sectores representados en el Diálogo Nacional acordaron que las elecciones legislativas y presidenciales se celebrarían durante el último trimestre del año. La campaña electoral volvió a alentar tensiones, en particular entre sectores seculares e islamistas, pero más allá de incidentes esporádicos, el proceso electoral se desarrolló sin obstáculos y contó con una participación más alta de lo que preveían algunos analistas. **Los comicios parlamentarios, celebrados en octubre, arrojaron como vencedora a la agrupación Nidaa Tounes, partido que se perfiló principalmente a partir de su oposición a los sectores islamistas.** La formación obtuvo 85 de los 217 escaños, relegando al segundo lugar a Ennahda, que consiguió 69 sillones en el Parlamento. Según diversos análisis, el retroceso de Ennahda en las urnas habría respondido a sus problemas de gestión del gobierno y la economía.

Durante 2014 Túnez avanzó en el proceso de transición, pero también enfrentó diversos episodios de violencia protagonizados por grupos de línea yihadista

Nidaa Tounes se presentó como una fuerza capaz de ofrecer mayor estabilidad al país, aunque fue observada con recelo por diversos sectores debido a la influencia en el partido de sectores vinculados al antiguo régimen. Pese a ello, el candidato de Nidaa Tounes también triunfó en las elecciones presidenciales. En la segunda ronda de los comicios celebrada en diciembre (la primera se realizó en noviembre) Baji Casi Essebsi, de 88 años –ministro del Interior durante el régimen de Habib Bourguiba y portavoz parlamentario en la época de Zine el-Abidine Ben Alí–, consiguió un 55,6% de los votos frente a su contrincante, Moncef Marzouki, presidente durante la transición y reconocido detractor del régimen de Ben Alí. Ennahda, en tanto, cumplió con su anuncio y no presentó candidato a los comicios presidenciales. En este contexto, a finales de año diversos análisis advertían sobre la necesidad de que el Gobierno estableciera una relación de cooperación con los islamistas. En su discurso de investidura el 31 de diciembre, Essebsi subrayó también la importancia de avanzar en un proceso de reconciliación en el país.

En el ámbito securitario, en tanto, se produjeron diversos incidentes, incluyendo algunos de especial notoriedad. Uno de los que tuvo más impacto fue el **dobles ataque insurgente contra militares tunecinos, que causó la muerte de 15 soldados y al menos uno de los atacantes en julio. La ofensiva fue catalogada como la más cruenta para el Ejército desde 1956**, año de independencia del país, y fue reivindicada por la brigada Okba Ibn Nafaa, un grupo armado presuntamente vinculado a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Semanas antes, AQMI había reclamado la autoría de un atentado contra la residencia del ministro del Interior, ocurrido en mayo, que acabó con la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Tras el ataque de julio, las autoridades tunecinas impulsaron una serie de medidas, entre ellas la detención de numerosos sospechosos, el cierre de mezquitas y medios de comunicación acusados de promover un islamismo radical, y la creación de una agencia antiterrorista. Paralelamente, a lo largo del año las autoridades intensificaron su colaboración con Argelia en el control de la zona limítrofe, a través del despliegue de miles de soldados; y reforzaron los dispositivos de seguridad en el área fronteriza con Libia, ante la escalada de violencia en ese país. Cabe destacar que los ataques contra militares en julio se produjeron en el área montañosa de Monte Chaambi (región fronteriza con Argelia), un territorio donde se ha detectado una mayor actividad insurgente y que en abril fue declarado como zona cerrada para operaciones militares. Durante el año se produjeron otros hechos de violencia en Monte Chaambi, y también en zonas como El-Kelf, Kasserine, Jendouba y en la capital. En esta última ciudad, a principios de año, siete presuntos milicianos

y un policía murieron durante una operación de rastreo en el marco de la búsqueda de los asesinos de los políticos asesinados en 2013. Otros incidentes ocurridos durante 2014 incluyeron la muerte de policías, la detonación de artefactos explosivos y la muerte de personas –incluyen-

do varias mujeres— durante las operaciones de rastreo de las fuerzas de seguridad en búsqueda de sospechosos de pertenecer a grupos yihadistas. Según las autoridades, se había conseguido desbaratar varios intentos de atentados presuntamente organizados por grupos como Ansar al-Sharia. En el país y a nivel internacional, existía una creciente preocupación por el retorno al país de numerosos tunecinos que en los últimos años han estado participando en la guerra en Siria.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

Haití	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares

Síntesis:

Tras la salida del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país, fueron desplegadas consecutivamente una Fuerza Multinacional Provisional y una misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH) para auxiliar al Gobierno provisional a restablecer el orden y la seguridad. Aunque se han registrado avances hacia una mayor estabilidad política, social y económica, todavía persisten varios problemas, como las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra la MINUSTAH, las altas tasas de delincuencia, el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas, las exigencias de grupos de antiguos militares para reinstaurar las Fuerzas Armadas o los altos niveles de corrupción, pobreza y exclusión social.

Durante el año 2014 en Haití **se agudizó la crisis política y social, con continuas manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente, Michel Martelly, y del primer ministro, Laurent Lamothe, así como con una parálisis institucional fruto del enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo que culminó a mediados de diciembre con la dimisión de Lamothe y de todo el Gobierno.** El catalizador tanto de las protestas como del bloqueo institucional fue la imposibilidad de celebrar elecciones legislativas y locales (pospuestas desde 2011 y 2010 respectivamente) y el riesgo de que el vencimiento del mandato del Parlamento bicameral en enero de 2015 provocara un vacío institucional y abriera la puerta a que Martelly gobernara por decreto. Según varios analistas, esta posibilidad podría agudizar notablemente la situación de tensión política, polarización social e ingobernabilidad en Haití. Ante tal perspectiva

y la preocupación expresada reiteradamente por la comunidad internacional, se iniciaron conversaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Tras varios meses de desencuentros, en marzo de 2014 se logró un acuerdo histórico, facilitado por la Iglesia Católica, entre el Gobierno, el Parlamento y los principales partidos políticos para celebrar las elecciones y reducir la tensión política y social de los últimos años. Los aspectos más destacados de dicho acuerdo fueron la conformación de un Gobierno mucho más inclusivo, la creación de un nuevo órgano electoral en sustitución del Consejo Electoral Provisional, la ratificación de varias enmiendas de la ley electoral y la celebración, el 26 de octubre, de las elecciones pospuestas desde 2011.²² Posteriormente se implementaron algunos de los puntos del acuerdo, como una profunda remodelación del Gobierno (la quinta desde que Martelly accedió al poder en mayo de 2011), con la incorporación de 10 nuevos ministros, algunos de los cuales cercanos a sectores de la oposición. Sin embargo, en la segunda mitad del 2014 las posiciones entre las partes se fueron alejando, con la oposición acusando al Gobierno de mala gestión y corrupción y exigiendo la dimisión del presidente y con el Gobierno acusando a seis senadores opositores de bloquear la aprobación de las enmiendas a la ley electoral, necesaria para la celebración de los comicios. La oposición denunciaba que las enmiendas a la ley electoral requeridas para la celebración de los comicios, que sí habían sido aprobadas previamente por la Cámara de Representantes, eran inconstitucionales y consideraba que el diálogo entre Gobierno y oposición no debía restringirse a la simple resolución de la crisis institucional, sino que también debería abordar otras cuestiones como la liberación de personas opositoras detenidas o la propia dimisión del presidente, al que acusaban reiteradamente de negligencia y corrupción. En este sentido, la oposición señaló en varias ocasiones que las iniciativas de diálogo promovidas por el Gobierno eran puramente cosméticas y tenían la única intención de reducir la presión por parte de la comunidad internacional.

Ante el incremento de las protestas y la tensión política en la segunda mitad del año, a finales de septiembre Martelly inició un periodo de consultas de dos meses con representantes de la oposición y de varios sectores de la sociedad haitiana. Al finalizar el mes de noviembre, sin embargo, no se había llegado a ningún acuerdo significativo y ni siquiera se habían acercado posiciones, en parte por el boicot de parte de la oposición a este periodo de consultas. Entonces, Martelly designó a una comisión consultiva de 11 personalidades para que propusieran recomendaciones con vistas a reconducir la situación y solventar la crisis. A principios de diciembre, la comisión hizo públicas sus recomendaciones, entre las que incluía la dimisión del primer ministro y las del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y los miembros del Consejo Electoral Provisional. Pocos días después, Martelly aceptó dichas recomendaciones e inmediatamente

22. Poco después de la firma del acuerdo, el Gobierno hizo público que las elecciones locales se celebrarían el 28 de diciembre, mientras que la máxima autoridad electoral debería fijar la fecha de la segunda vuelta de las elecciones legislativas.

Laurent Lamothe presentó su dimisión y la de su Gobierno en bloque. La hasta entonces ministras de Salud, Florence Duperval Guillaume, fue designada primera ministra interina, y pocos días después Martelly propuso para el cargo al antiguo alcalde de Puerto Príncipe Evans Paul, un veterano político opositor pero cercano a Martelly. Tras estos hechos, **los últimos días del año Martelly alcanzó un acuerdo político con los líderes de ambas cámaras del Parlamento y con el jefe de la Corte Suprema por el que se prolongaba el mandato del Parlamento (el de la Cámara de Representantes hasta el 24 de abril y el del Senado hasta el 9 de septiembre) a cambio de que éste aprobara las enmiendas a la ley electoral necesarias para poder llevar a cabo los comicios en 2015.** Sin embargo, a principios de enero de 2015 el Parlamento no había ratificado a Evans Paul en el cargo y buena parte de la oposición había criticado el mencionado acuerdo por considerar que podría agudizar la crisis política y social del país e incluso había hecho llamamientos para reanudar las protestas.

En este sentido, la crisis actual acerca del vacío institucional que se podría producir a partir de mediados de enero era solamente uno de los ejes de tensión más visible que existe en el país, pero no el único, y de hecho algunos analistas consideran que puede haberse convertido en un catalizador para expresar un malestar más profundo por parte sectores importantes de la sociedad haitiana. Durante el 2014, se han producido numerosas protestas vinculadas, por ejemplo, a la mala prestación de servicios, la precaria situación económica o la situación de vulnerabilidad en la que todavía se encuentran decenas de miles de víctimas del terremoto que asoló a Haití en enero del 2010 y que provocó la muerte de más de 300.000 personas y dejó sin hogar a más de 1,5 millones de personas. A principios de año, por ejemplo, se produjeron protestas para exigir mejores condiciones socio-sanitarias o el realojo de población en algunos de los 271 campamentos en los que, según OCHA, seguían viviendo más de 146.000 personas. Otro de los ejes que últimamente ha generado tensión en el país fueron las movilizaciones protagonizadas por simpatizantes del ex presidente Jean Bertrand Aristide a principios de 2014 para conmemorar el décimo aniversario de su salida del país, que él y sus simpatizantes consideran forzosa, o bien para protestar contra una orden de arresto dictaminada por un juez a mediados de agosto después de que Aristide no compareciera a testificar en el marco de una investigación por un caso de corrupción y blanqueo de capitales acontecido durante su presidencia. A pesar de que a finales de septiembre la orden de arresto no había sido ejecutada, el juez sí ordenó la vigilancia de la residencia de Aristide para asegurarse que éste no podía abandonar su hogar, de modo que *de facto* el ex mandatario se halla en arresto domiciliario. Esta situación provocó importantes movilizaciones por parte simpatizantes de Aristide e incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y policías en varios momentos del año.

En Haití se incrementaron las manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente y del primer ministro y se agudizó la crisis política y la parálisis institucional fruto del enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo

América del Sur

Bolivia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)

Síntesis:

A finales de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exilió en EEUU después de que la represión de varias protestas antigubernamentales provocara, en los meses de febrero y octubre, más de 100 muertes. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, especialmente la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos o la aprobación de una nueva Constitución, se vio obstaculizada por la férrea oposición por parte de varios partidos políticos y de las regiones orientales del país que, lideradas por el departamento de Santa Cruz, exigen mayor autonomía. En paralelo a la lucha política entre el Gobierno y la oposición, en los últimos años Bolivia ha enfrentado uno de los mayores índices de conflictividad social de todo el continente, con movilizaciones de distinto signo vinculadas a demandas laborales sectoriales, a la actividad de las empresas extractivas o a los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque no se produjeron las movilizaciones masivas o los episodios de polarización e incluso violencia que habían tenido lugar en años anteriores, durante el año se registraron tres ejes de tensión diferenciados. En primer lugar, a finales de marzo se produjeron importantes enfrentamientos entre la Policía y grupos de mineros que se oponían a la tramitación de una nueva ley que consideraban perjudicial para las cooperativas mineras. Tres personas murieron y cerca de 130 más resultaron heridas durante las protestas, que también incluyeron el corte de varias carreteras en las regiones orientales del país. Como consecuencia de estos hechos, el Gobierno decidió suspender la promulgación de la nueva ley de minería, que se oponía a que las cooperativas mineras puedan suscribir contratos directos con empresas privadas por considerar que ello podría provocar la enajenación de determinados recursos naturales (algo que prohíbe la Constitución) y que algunas empresas privadas o inversores extranjeros se podrían beneficiar directamente del trato preferencial que se dispensa a las cooperativas mineras. Además de suspender el proyecto de ley, La Paz forzó la dimisión del ministro responsable de la materia y convocó a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia a iniciar un diálogo para incorporar sus demandas en la nueva legislación, lo que

provocó la práctica finalización de los enfrentamientos y los cortes de carretera. En segundo lugar, cabe destacar el **incremento de la tensión entre Bolivia y Chile por el contencioso que mantienen desde hace décadas por la reivindicación de Bolivia de una salida soberana al mar**. A finales de marzo el Gobierno boliviano anunció su intención de entregar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una memoria con argumentos históricos y jurídicos que sustente la demanda presentada ante la CIJ en abril de 2013, cuyo objetivo es conseguir un fallo de la CIJ que fuerce a Chile a negociar de buena fe esta cuestión. La Paz señaló que su petición cuenta con el apoyo técnico de expertos internacionales y de buena parte de la población boliviana. Asimismo, manifestó su predisposición a reanudar el diálogo bilateral con Chile y a retomar la agenda de 13 puntos acordada durante el primer mandato de la actual presidenta chilena, Michel Bachelet, entre 2006 y 2010. Por su parte, el Gobierno chileno afirmó su intención de cuestionar e impugnar la competencia de la CIJ para resolver el contencioso, posicionamiento que contó con la aprobación de todos los presidentes del país desde la recuperación de la democracia. Tras la Guerra del Pacífico de 1879, Bolivia perdió 400 km de costa y 120.000 km² de territorio.

El tercer eje de tensión fue el **enfrentamiento entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas después de que más de 700 militares fueran dados de baja**. En el mes de abril, varias facciones de las Fuerzas Armadas denunciaron situaciones de discriminación e intimidación que afectarían principalmente a personas indígenas y exigieron la “descolonización” de las Fuerzas Armadas y un trato igualitario en el ámbito castrense, además de mayores oportunidades de sueldo, promoción en el escalafón militar y de acceso a los estudios, la vivienda o la salud. Las protestas, protagonizadas principalmente por suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, se prolongaron durante todo el mes de abril e incluyeron marchas por La Paz, el repliegue en sus respectivas unidades o huelgas de hambre por parte de las esposas de numerosos militares. El presidente, Evo Morales, de origen aymara, hizo un llamamiento a la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, mientras que el jefe de las Fuerzas Armadas negó las denuncias de discriminación y consideró que se trataba de una excusa para actos de sedición y para orquestar un golpe de Estado. A finales de abril, 715 militares fueron destituidos tras ser acusados, entre otras cuestiones, de amotinamiento, desacato y sedición. Tras las protestas que provocó dicha decisión, en el mes de mayo 660 de las más de 700 personas afectadas fueron readmitidas en la institución castrense y, en paralelo, se inició un diálogo para reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Además de estas protestas, durante el año también se produjeron numerosas movilizaciones por parte de varios colectivos en exigencia de distintas demandas sectoriales. A principios de junio, por ejemplo, se registraron incidentes y bloqueos de carreteras en cinco departamentos distintos (La Paz, Beni, Oruro, Potosí y Chuquisaca). Cabe destacar las movilizaciones por parte de campesinos en La Paz en contra del nuevo mapa electoral diseñado por el Tribunal Supremo Electoral; de transportistas de Potosí

para exigir mejoras en las carreteras; de mineros en Potosí y Oruro o de trabajadores del transporte de carga en Chuquisaca.

Perú	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

No se registraron enfrentamientos significativos entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, pero el Estado mantuvo su presión militar, política y judicial contra el grupo y contra organizaciones que considera que mantienen vínculos con Sendero Luminoso. En la dimensión militar, alrededor de 10 personas murieron y muchas otras resultaron heridas por enfrentamientos entre el grupo y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en el marco de la operación contrainsurgente Cunshireni –que se desplegó a mediados de junio en el Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)–, así como en el período anterior y posterior a las elecciones del 5 de octubre, en el que se registraron unos 95 episodios de violencia y en el que Sendero Luminoso incrementó sus ataques. Como consecuencia de la presión militar, durante el año también fueron descubiertos varios arsenales de Sendero Luminoso y detenidos numerosos de sus líderes, como por ejemplo el “camarada Rodrigo” o el “camarada Percy”, que según el Gobierno estaba tratando de rearticular al grupo en el Valle del Huallaga. Sin embargo, **después de haber declarado neutralizada a la facción del grupo que operaba en el Alto Huallaga, el Gobierno concentró sus actividades de contrainsurgencia en la región**

de VRAEM. Tras haber detenido a algunos de los principales líderes políticos y militares del grupo en la región en 2013, el Gobierno incrementó sus esfuerzos militares para derrotar definitivamente a Sendero Luminoso y, en tanto en cuanto vincula la presencia del grupo en VRAEM a la existencia de cultivos de coca y al paso de rutas de narcotráfico, Lima anunció su intención de erradicar el 75% de los cultivos ilícitos y de destruir las pistas de aterrizaje ilegales. Si en 2013 ya se destruyeron 22.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, el objetivo hecho público para el 2014 fue de 30.000 hectáreas. Algunos analistas estiman que al menos 10.000 campesinos cultivan hoja de coca en VRAEM, una región en la que según estas mismas fuentes se produce al menos la mitad de las 300 toneladas de cocaína que Naciones Unidas calcula que son producidas anualmente en Perú (una cifra que según fuentes de inteligencia podría ser mucho mayor). A principios de marzo, el Ministerio de Defensa declaró que ya se había empezado a notar un cierto descenso en el número de actores armados en las regiones en las que se había empezado a implantar la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. En diciembre, el Gobierno anunció la destrucción de varias pistas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico en la región.

En el plano político y judicial, cabe destacar la operación puesta en marcha a principios de abril en la que fueron detenidas 28 personas y se dictaron órdenes de arresto contra otras seis personas residentes en el extranjero por sus presuntos vínculos con el grupo, así como el inicio en enero de un juicio contra las 12 personas de la cúpula de Sendero Luminoso por su presunta participación en un atentado en Miraflores en 1992 en el que 25 personas murieron y 150 resultaron heridas. En el mes de diciembre, el líder y fundador del grupo, Abimael Guzmán, afirmó que Movadef es una formación política independiente de Sendero Luminoso y afirmó que existe intencionalidad política en los intentos de vincular a ambas organizaciones. También declaró que Sendero Luminoso firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en 1992 y que desde entonces el grupo no ha llevado a cabo ni una sola acción armada. En distintos momentos del año, el Gobierno declaró que Movadef depende claramente de Sendero Luminoso y alertó sobre la infiltración del grupo en el colectivo docente y en las universidades, tal y como sucedió en los años setenta y principios de los ochenta en los orígenes del grupo. Por su parte, Eleuterio Flores, alias "Artemio", que como Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua, negó los delitos de narcotráfico y lavado de activos que se le imputan (además del de terrorismo) y rechazó haber financiado a Movadef con fondos provenientes del narcotráfico. En este sentido, también cabe destacar la presentación de cargos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas contra los tres líderes más destacados de las facciones remanentes de Sendero Luminoso, Eleuterio Flores y los hermanos Jorge y Víctor Quispe Palomino por parte de un tribunal en EEUU, país en el que Sendero Luminoso es considerado una organización terrorista. Finalmente, cabe señalar que a mediados de junio fue hallada en la provincia de Satipo una fosa común con restos de unas 800 presuntas víctimas de Sendero Luminoso

entre 1984 y 1990, en su mayoría indígenas asháninkas y machiguengas.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 se produjeron numerosas movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno y de la llamada Revolución Bolivariana, especialmente durante periodos electorales y durante el intento golpe de Estado del año 2002. Sin embargo, la actual crisis política y social que atraviesa el país se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 por cáncer. Tras hacer pública su enfermedad en 2011, Chávez tuvo que abandonar sus funciones en varias ocasiones para recibir tratamiento médico, provocando según algunos analistas un claro debilitamiento del Gobierno. A pesar de ello, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 2012. Tras la muerte de Chávez, la oposición calificó de fraude constitucional la toma de posesión del cargo del hasta entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, por considerar que el puesto correspondía al presidente del Parlamento. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. Tras la validación de resultados por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición impugnó las elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la segunda mitad del 2013 se produjeron numerosas movilizaciones de partidarios y detractores del Gobierno y se produjeron varios episodios de violencia. La dinámica de polarización social continuó a principios de 2014 y la violencia se incrementó tras unas protestas estudiantiles iniciadas en el mes de febrero.

Durante el año **se vivieron las protestas más importantes de los últimos años, con un balance de más de 40 personas fallecidas, alrededor de 850 de personas heridas y más de 3.000 detenciones.** La mayor parte de las movilizaciones y los hechos de violencia se concentraron en el primer trimestre, aunque durante todo el año se registraron protestas, denuncias de violaciones de los derechos humanos, altos niveles de polarización política y social y una creciente fragmentación en el seno del oficialismo. Las protestas, protagonizadas en buena medida por estudiantes, se iniciaron a mediados de febrero en Caracas y progresivamente se extendieron a varias ciudades del país. El 12 de febrero, cientos de personas se manifestaron ante la sede central de la Fiscalía General para protestar por la precaria situación económica (hiperinflación, escasez de bienes básicos, etc.) y por las altas tasas de criminalidad, así como para acompañar a un grupo de estudiantes que pretendían entregar al Ministerio Público una carta en la que pedían la liberación de 14 personas

detenidas durante unas protestas que se habían producido a principios de febrero en los estados de Táchira y Mérida. Esta movilización, que desató los primeros episodios de violencia, estuvo convocada y liderada por un grupo de parlamentarios opositores que en los días previos habían anunciado una serie de movilizaciones pacíficas (que denominaron “La salida”) para forzar un cambio de régimen. A mediados de febrero fue detenido y trasladado a una prisión militar uno de los principales líderes de este movimiento Leopoldo López, fundador de la organización política Voluntad Popular, acusado de incitar a la violencia y de propiciar las primeras víctimas mortales de las protestas. Ante la continuación de las protestas durante todo el mes de febrero, el Gobierno envió al Ejército a Táchira y desplegó fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acompañados de grupos de civiles armados. A pesar de las declaraciones del presidente, Nicolás Maduro, y otros miembros del Gobierno sobre la derrota o debilitamiento de la oposición, en el mes de marzo siguieron produciéndose movilizaciones sociales, episodios de violencia y detenciones significativas, entre las que cabe destacar las de los alcaldes de San Cristóbal y Valencia o la de tres generales de la Fuerza Aérea acusados de conspirar para derrocar al Gobierno. Tanto Maduro como destacados miembros del Gobierno declararon en varias ocasiones que las protestas eran un golpe de Estado por cuanto intentaban derrocar a un Gobierno democráticamente elegido y seguían un modus operandi muy parecido al del golpe de Estado fracasado de 2002. Maduro también declaró que buena parte de las personas habían estado involucradas en el golpe de Estado de 2002 y acusó a EEUU de estar detrás de las protestas para desestabilizar el país. A mediados de febrero, el Gobierno dio un plazo de 48 horas para abandonar el país a tres diplomáticos estadounidenses acusados de conspiración. El Gobierno de EEUU negó cualquier implicación en la crisis y a la vez instó a Caracas a garantizar la estabilidad del país y los derechos de la ciudadanía, expresó su preocupación por la detención de López y otros líderes políticos e instó a Maduro a atender las demandas de la oposición.

Numerosas formaciones políticas opositoras y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales denunciaron torturas, abusos, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos.

En el mes de septiembre, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos alertaron que en 2014 Venezuela vivió las mayores protestas y tasas de represión de los últimos 15 años y publicaron un informe en el que señalan que durante el año se registraron unas 6.000 protestas, se produjeron más de 200 ataques a zonas residenciales y más de 50 ataques a universidades. A mediados de año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que desde principios de 2014 se habían registrado 231 agresiones a periodistas, el 65% por parte de funcionarios del Estado, el 21% por parte de manifestantes y el 13% por parte de civiles armados. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay,

denunció violaciones de derechos humanos, entre las que destacó la detención (y la falta de garantías procesales) de numerosas personas o los ataques contra universidades por parte de fuerzas de seguridad y de grupos de civiles armados. En el mismo sentido, la organización de derechos humanos HRW denunció que la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de distintos estados en los últimos meses habían estado aplicando fuerza ilegítima de manera rutinaria contra manifestantes, y puso en duda la credibilidad de las investigaciones iniciadas por el Gobierno y la Fiscalía General. Por su parte, el Gobierno desmintió buena parte de las mencionadas acusaciones, señaló que su respuesta ante las protestas se había ajustado a la ley, declaró haber colaborado con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acusó a Naciones Unidas y varios gobiernos de hacerse eco de la información y las cifras de organizaciones de dudosa credibilidad, y responsabilizó a la oposición de numerosos episodios de violencia y de haber provocado la mayor parte de las víctimas mortales que se registraron durante el trimestre por no poder recibir atención médica a causa de las barricadas utilizadas por la oposición para bloquear varias ciudades. Sin embargo, Caracas también reconoció que 21 policías habían sido detenidos y enjuiciados, mientras que el comandante de la Guardia Nacional, uno de los cuerpos que recibió mayores críticas, reconoció excesos por parte de algunos de sus miembros y se comprometió a investigar agresiones contra más de 50 periodistas. Asimismo, a principios de año la Fiscalía General reconoció estar investigando 60 presuntos abusos, aunque también señaló que éstos no formaban parte de una política o estrategia de represión por parte del Estado. En el mes de diciembre, el Gobierno de EEUU aprobó sanciones contra determinados funcionarios del Estado por violaciones de los derechos humanos, mientras que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenaba la persecución política en Venezuela y solicitaba la liberación de presos políticos.

En Venezuela se vivieron las protestas más importantes de los últimos años, con un saldo de más de 40 personas fallecidas, alrededor de 850 de personas heridas y más de 3.000 detenciones

A medida que la espiral de violencia se fue intensificando, se fueron gestando varias iniciativas para tratar de contener y resolver la crisis. Ya a finales de febrero, el Gobierno estableció la Conferencia Nacional de Paz y Convivencia y a mediados de marzo el Parlamento creó una Comisión de la Verdad sobre los hechos de violencia acontecidos hasta el momento, aunque la oposición declinó participar en ambas iniciativas por considerar

que no incluía a sectores clave de la oposición y que eran simples instrumentos del Gobierno para ganar tiempo, sortear la presión de la comunidad internacional y desactivar la movilización ciudadana sin hacer ninguna concesión ni acometer ninguna reforma. Si bien al principio el Gobierno venezolano rechazó cualquier tipo de facilitación o mediación internacional en la crisis (cabe destacar los ofrecimientos rechazados por parte de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, o de Uruguay, José Mujica), a finales de marzo una delegación de ministros de Exteriores de UNASUR visitó el país, se reunió con

representantes del Gobierno y de la oposición, y realizó una serie de recomendaciones. Ante el escepticismo de la oposición a que fuera UNASUR quien facilitara el diálogo (principalmente por considerar que las relaciones económicas y políticas entre los países que lo conforman impiden la neutralidad y que una institución política no es la adecuada para abordar cuestiones de derechos humanos), ambas partes finalmente decidieron que el Vaticano (a través del actual secretario de Estado y antiguo nuncio apostólico en Venezuela, el cardenal Pietro Parolin) también ejerciera tareas de facilitación, conjuntamente con los ministros de Exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador. Así, el 10 de abril, poco después de que una delegación de ministros de Exteriores de países de UNASUR llevara a cabo una segunda visita al país, se inició el proceso de diálogo sin agenda ni condiciones previas, abierto y retransmitido en público. Tras las dos primeras sesiones de diálogo se alcanzaron algunos acuerdos como la ampliación de la Comisión de la Verdad aprobada por el Parlamento en marzo; elección de cargos en el Consejo Nacional Electoral; Tribunal Supremo de Justicia; reconsideración de la situación de los presos políticos e inclusión de las zonas gobernadas por la oposición en el plan del Gobierno para combatir la criminalidad. Sin embargo, a mediados de mayo la negociación llegó a su fin después de que la oposición abandonara las conversaciones alegando estancamiento y falta de resultados. Tras este bloqueo, que no pudo ser solventado por las gestiones diplomáticas que llevó a cabo la delegación de UNASUR, se agudizaron la división y la fragmentación tanto en el seno de la oposición como del oficialismo.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Kirguistán	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán

Síntesis:

Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la ex república soviética de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador, derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de presidencialismo autoritario, corrupto y nepotista, especialmente a partir de finales de 2007. Todo ello en un contexto de dificultades económicas

para la población, tensiones latentes entre el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de heridos, a la que siguió un junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 400 víctimas mortales. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.

Se mantuvo la tensión en Kirguistán vinculada a varios ejes, como cuestiones políticas y sociales internas y tensiones fronterizas en torno a recursos, delimitaciones territoriales e insurgencias regionales.

En clave interna política, el Gobierno central colapsó en marzo, por críticas internas contra el primer ministro, Jantoro Satybaldiev, quien acabó dejando el cargo. Se creó una nueva coalición gubernamental, que replicaba a la anterior, con Ata-Meken, el Partido Socialdemócrata y Ar-Namys. Se mantuvieron las pugnas entre el entorno gubernamental y focos rivales de poder. El ex alcalde de Osh (sur) Melis Myrzakmatov –uno de los focos de poder contrarios al Gobierno central y antiguo aliado del presidente derrocado en 2010, Kurmanbek Bakiyev– no resultó elegido alcalde en las elecciones de enero, llevadas a cabo por el pleno municipal en voto secreto, y descalificó el proceso. Miles de simpatizantes llevaron a cabo protestas e intentaron tomar la sede del gobierno regional. Myrzakmatov, el partido Ata-Jurt y otros actores formaron una nueva coalición opositora, con el objetivo de desbancar al presidente, Almazbek Atambayev. Por otra parte, hubo movilizaciones sociales de diverso signo y con variadas demandas durante el año, incluyendo de dimensión medioambientalista, como protestas contra la exploración minera de depósitos de oro por una compañía kazaja, que derivaron en choques y cerca de una treintena de heridos; movilizaciones contra las actividades de minería de la compañía RedMet en la región Chui (norte), con bloqueos de carreteras a Bishkek; y protestas en agosto y septiembre en Tokmok (norte) contra la construcción de una refinería de petróleo. También hubo protestas en Osh (sur) contra la subida de los precios de la energía. Por su parte, el Gobierno anunció en marzo la creación de milicias locales como nueva fuerza para lidiar con situaciones de desórdenes públicos. En paralelo, la situación interna continuó influida por las tensas relaciones entre el Estado y la minoría uzbeka (14% de población, mayoritariamente residente en el sur del país, escenario de los hechos de violencia de 2010, en que la mayoría de víctimas fueron población uzbeka) y la situación de discriminación de esta última. En ese contexto, el Gobierno eliminó el derecho a realizar los exámenes de graduación de educación secundaria en lengua uzbeka, alegando que esa opción apenas era usada.

Durante el año las tensiones de carácter fronterizo fueron numerosas y elevadas, con diversas víctimas mortales y heridos en incidentes interestatales entre fuerzas

fronterizas, incidentes intercomunitarios y episodios vinculados supuestamente a insurgencias regionales. Así, hubo **choques en tramos en disputa de la frontera con Tayikistán en disputa, especialmente en torno al enclave de Vorukh** (territorio de Tayikistán en Kirguistán), ubicado en el Valle de Ferghana, área de delimitaciones territoriales en disputa, con gran presión demográfica y competencia por las escasas zonas fértiles. Así, incidentes en enero entre guardias fronterizos respectivos causaron cerca de una decena de heridos, por conflictos en torno a unas obras para una carretera de Kirguistán que permitiría evitar el enclave de Vorukh. Según la población tayika, las obras tomaban territorio del enclave de Tayikistán. El incidente desencadenó acusaciones estatales mutuas y el envío de tropas adicionales a la zona, así como el cierre de frontera y la retirada del embajador por parte de Kirguistán. Se abrieron negociaciones para resolver la crisis, que llevaron a cierta reducción de la tensión, a la pronta retirada de tropas y a la reapertura de frontera dos meses después. No obstante, Vorukh fue escenario de nuevas tensiones e incidentes durante el resto del año. Entre los episodios, varias decenas de personas (entre 25 y 60, según las fuentes) resultaron heridas en enfrentamientos entre población kirguiza y tayika en torno a ese enclave en mayo y se produjeron cortes de carreteras. En julio hubo nuevos tiroteos entre guardias fronterizos, con un balance de una víctima mortal y varios heridos. En reacción, Kirguistán activó el entrenamiento militar de reservistas. Finalmente, tras nuevas negociaciones Kirguistán anunció acuerdo sobre el uso de la carretera a través del enclave, aunque las partes apuntaron a dificultades en las negociaciones. Asimismo, hubo otros incidentes, con víctimas en otras zonas de la frontera entre ambos países. Los presidentes de ambos países se reunieron en septiembre, para diluir tensiones, aunque sin acuerdos sobre la delimitación fronteriza de zonas en disputa. Por otra parte, hubo también tensiones con Uzbekistán, en torno al gas y al agua.

Asimismo, **la frontera con China fue también escenario de tensión. Choques a finales de enero entre guardias fronterizos kirguizos y hombres armados que habían cruzado la frontera desde la región de Xinjiang** (región en China escenario de conflicto armado entre insurgencia uigur y las fuerzas estatales) causaron más de una decena de bajas, mayoritariamente uigures. Kirguistán anunció una investigación sobre supuestas amenazas de muerte contra la guardia fronteriza kirguiza emitidas por el grupo armado uigur ETIM en represalia por la muerte de 11 uigures.²³ Por otra parte, el Gobierno afirmó que se habían incrementado los crímenes vinculados al extremismo religioso. Durante el año se produjeron nuevas detenciones de personas acusadas de pertenecer a organizaciones ilegales, como Hizb ut-Tahrir.

Aumentaron las tensiones fronterizas entre Kirguistán y Tayikistán con choques en torno a enclaves territoriales y zonas con delimitación de frontera en disputa, con varias decenas de heridos

Tayikistán	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política (Partido del Renacimiento islámico) y social (grupos regionales: gharimis, pamiris), antiguos señores de la guerra, grupos islamistas ilegales (Hizb-ut-Tahrir, Movimiento Islámico de Uzbekistán [IMU]), Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con creciente descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el creciente autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con su vecina Uzbekistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados islamistas.

Se mantuvo la situación de tensión de baja intensidad vinculada a diversos ejes, como la represión interna a sectores opositores y activistas; las tensiones entre el Gobierno y el principal partido opositor, el Partido del Renacimiento Islámico (PRI); la supuesta mayor amenaza de grupos extremistas; y tensiones fronterizas. Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron la situación de vulnerabilidad que afrontan las coaliciones anti-tortura y otros grupos defensores de derechos humanos en Tayikistán, sin garantías legales suficientes para ejercer la libertad de expresión. También el relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, instó a las autoridades tayikas a implementar plenamente políticas de erradicación y prevención de tortura y malos tratos, aunque dio la bienvenida al plan de acción nacional aprobado. La máxima autoridad musulmana, el muftí Saidmukarram Abdulkodirzoda, emitió una fatwa en septiembre que prohíbe a la población musulmana criticar al Gobierno o cooperar con medios de comunicación, grupos políticos u organizaciones locales o internacionales que pretendan desestabili-

23. Véase el resumen sobre China (Turquestán oriental) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

zar el país. El PRI criticó la medida, alegando que había sido dictada por las autoridades. A su vez, el Gobierno activó fuertes medidas disuasorias contra la convocatoria de protestas opositoras en octubre por parte del llamado Grupo 24, liderado por Umarali Quvvatov, en el exilio desde 2012. Así, se bloqueó el acceso días antes a páginas web opositoras y de medios de comunicación y a redes sociales (y bloqueo total a internet en el norte del país, según medios locales). Además, el Tribunal Supremo declaró a Grupo 24 como organización extremista y prohibió sus actividades y el Gobierno desplegó vehículos blindados y policía en la capital, Dushanbe. Grupos opositores políticos, como el PRI, y sociales instaron a sus bases a no participar –en un contexto de efectos aún duraderos de la guerra civil de los noventa y de falta de claridad sobre la plataforma Grupo 24. Finalmente las movilizaciones previstas no se llevaron a cabo. Por otra parte, el líder de la rama local del PRI en la región de Gorno-Badakhshan, Saodatsho Adolatov, fue sentenciado a cinco años de cárcel por cargos de incitación al odio religioso y étnico. El partido apuntó a motivaciones políticas.

El presidente tayiko, Emomali Rakhmon, definió en septiembre la lucha contra el extremismo como una de las prioridades del Gobierno y afirmó que el país hacía frente a una creciente amenaza de grupos extremistas religiosos. En el contexto de restricciones a las libertades de expresión y de vulneración de derechos humanos, el foco contra el llamado extremismo religioso podría llevar a amparar abusos de las autoridades. Las autoridades persiguieron activamente sectores considerados como una amenaza para la seguridad y la estabilidad. Entre enero y agosto, 88 personas fueron detenidas con cargos de terrorismo, según cifras de International Crisis Group. Hubo una creciente presión sobre círculos supuestamente vinculados o simpatizantes del grupo islamista ISIS, con detenciones de supuestos militantes retornados de Siria para llevar a cabo atentados en Tayikistán, según el Gobierno; o de personas supuestamente encargadas de reclutar militantes para ISIS; así como detenciones de decenas de supuestos nuevos reclutas tayikos. Las autoridades cifran en unos 300 los ciudadanos tayikos que combaten en Siria junto a ISIS. Asimismo, se produjeron algunos incidentes de seguridad en torno a la frontera con Afganistán. Por otra parte, durante todo el año se mantuvo elevada la tensión entre Tayikistán y Kirguistán en torno a incidentes en zonas sin delimitación fronteriza clara en el Valle de Ferghana, área densamente poblada y con disputas en torno a recursos escasos, como las zonas fértiles. Así, durante el año se produjeron diversas víctimas mortales y decenas de heridos en diversos incidentes.²⁴

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (Awami League), Oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a Gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

La situación en Bangladesh fue de enorme gravedad durante todo el año, aunque **se rebajaron considerablemente los niveles de violencia con respecto a los últimos meses del año anterior. 2014 se inició con la celebración de las elecciones parlamentarias el 5 de enero, que habían motivado la escalada de la crisis política en el país en los meses que las precedieron.** El principal partido de la oposición, el BNP, boicoteó los comicios en los que resultó vencedor el partido gobernante AL, que obtuvo 233 de 300 escaños, con una participación oficial del 48% del electorado, aunque algunos medios de comunicación señalaron que ésta había sido solo del 22%. Las elecciones, que fueron precedidas por una gravísima oleada de violencia, también transcurrieron en medio de una enorme tensión. Más de 20 personas murieron y más de 100 colegios electorales fueron incendiados durante la jornada electoral. Tras los comicios, Sheikh Hasina, líder de la AL fue nombrada primera ministra en su segundo mandato consecutivo. Tras la conformación del nuevo Gobierno y Parlamento, sin la presencia del principal partido de la oposición, se celebraron elecciones locales en las que también resultó vencedor el partido AL, frente a la coalición integrada por los opositores BNP y JI. Los niveles de violencia electoral se redujeron notablemente, aunque sí se registraron algunas

24. Véase el resumen sobre Kirguistán en este capítulo.

irregularidades durante el proceso electoral que fueron denunciadas por la oposición. El nuevo Gobierno llevó a cabo varias medidas que fueron criticadas duramente por la oposición, como las modificaciones legislativas encaminadas a la reforma de la Constitución para otorgar al Parlamento la prerrogativa de destituir a miembros del Tribunal Supremo. También se aprobaron medidas muy controvertidas relativas a las emisiones de los medios de comunicación puesto que impedían la difusión de noticias, fotos o vídeos que pudieran dañar la imagen de las fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas. En paralelo, la líder del BNP, Khaleda Zia, estuvo sometida a un proceso judicial durante todo el año con cargos de corrupción y acusada de haberse apropiado de centenares de miles de euros destinados a varias obras benéficas en memoria de su esposo, antiguo presidente de Bangladesh asesinado en 1981. El Tribunal Supremo desestimó los diferentes recursos presentados por Zia, que podría enfrentarse a cadena perpetua acusada de malversación de fondos. La celebración del juicio estuvo acompañada de numerosas protestas protagonizadas por simpatizantes de la antigua mandataria y del partido opositor y numerosas voces advirtieron de los riesgos de estallido de la violencia que se derivaban del juicio.

En paralelo, el trabajo del Tribunal para Crímenes Internacionales siguió siendo un foco de inestabilidad en el país. Establecido en 2010 como tribunal nacional (a pesar de la denominación) para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971 que derivó en la división de Pakistán y la creación de Bangladesh como Estado independiente, las condenas a muerte de varios líderes islamistas del Jamaat-e-Islami, derivaron en protestas sociales y huelgas, especialmente en los meses de noviembre y diciembre.

India (Nagalandia)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (Khole-Kitovi), NNC, ZUF

Síntesis:

El conflicto que afecta al estado de Nagalandia se originó tras el proceso de descolonización británico de la India (1947), cuando surgió un movimiento naga que reclama el reconocimiento de derechos colectivos para esta población, mayoritariamente cristiana, frente a la mayoría hindú india. La creación de la organización naga NCC en 1946 marcó el inicio de las reclamaciones políticas de independencia para el pueblo naga, que a lo largo de las décadas posteriores evolucionaron tanto en contenido (independencia de Nagalandia o creación de la Gran Nagalandia, incorporando territorios de los estados vecinos habitados por nagas) como en formas de oposición, iniciándose la lucha armada en 1955. En 1980 se formó el grupo armado de oposición NSCN como resultado de desacuerdos con sectores políticos más moderados, que a su vez ocho años después se dividirá en dos facciones, Isaac-

Muivah y Khaplang. Desde 1997 el NSCN-IM mantiene un acuerdo de alto el fuego y negociaciones con el Gobierno indio, y el NSCN-K alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el año 2000. Desde entonces los enfrentamientos entre las dos facciones se han producido en paralelo a los esfuerzos de acercamiento y reconciliación entre toda la insurgencia naga. En los últimos años se ha constatado una notable reducción de la violencia.

La situación en Nagalandia fue de relativa tranquilidad durante todo el año, aunque con algunos episodios de violencia esporádica. Se redujeron las muertes por la violencia vinculada a la tensión con respecto al año anterior, registrándose 15 muertes de acuerdo con los datos recopilados por el South Asia Terrorism Portal. Según estos datos, la mayoría de las personas fallecidas eran civiles, 11. En enero tuvo lugar uno de los hechos más graves del año, cuando se encontró en el distrito de Dimapur una fosa común en la que se habían enterrado los cuerpos de nueve personas ejecutadas a principios de enero. Una de las personas fallecidas fue identificada como un joven del distrito de Karbi Anglong en Assam, desaparecido una semana antes.

El grupo armado de oposición NSCN-IM fue acusado de las ejecuciones y el grupo de monitoreo del alto el fuego pidió al NSCN-IM que entregara a las autoridades a los insurgentes supuestamente involucrados en la masacre, a lo que el grupo se negó señalando que no estaba obligado a hacerlo dada la vigencia del acuerdo de alto el fuego con el Gobierno indio, teniendo en cuenta las condiciones estipuladas en este pacto. Para evitar enfrentamientos en Karbi Anglong se llevó a cabo un despliegue adicional de fuerzas de seguridad. En diferentes momentos del año se registraron incidentes de seguridad de carácter esporádico, como el enfrentamiento entre el NSCN-IM y las fuerzas de seguridad indias en el estado de Arunachal Pradesh en el que resultaron muertas cuatro personas, dos de ellas integrantes del grupo armado y otras dos civiles que trataban de huir del lugar de los enfrentamientos. En otro incidente en el distrito de Phek, un civil murió tiroteado a manos del grupo insurgente NNC-NA, que posteriormente expulsó de sus filas al responsable del asesinato señalando que en ningún momento había ordenado el ataque. En agosto, en el distrito de Golaghat del estado de Assam, fronterizo con Nagalandia, al menos 14 personas murieron y 10.000 tuvieron que desplazarse a centros de acogida después de que se registraran ataques por parte de población armada naga, que también incendió centenares de casas. Esta zona ha sido escenario de enfrentamientos violentos en las últimas décadas en varias ocasiones por las disputas que se dan por la posesión de las tierras y la demarcación del territorio, ya que zonas integradas dentro del estado de Assam son reivindicadas como parte de la "Gran Nagalandia" reclamada por la insurgencia naga. Por otra parte, cabe destacar que los acuerdos alcanzados en marzo y abril entre diferentes facciones insurgentes – GPRN/NSCN (Khole Khitovi), NSCN/GPRN (IM) y NNC/FGN– contribuyeron a la mejora de la situación en el estado.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión casi derivó en un nuevo conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

La tensión entre India y Pakistán fue muy elevada durante todo el año, con numerosas violaciones al acuerdo de alto el fuego que ocasionaron la muerte a cerca de 50 personas a lo largo del año a ambos lados de la frontera. Ambos países se acusaron mutuamente de manera reiterada de las violaciones a este acuerdo, y en varios momentos del año hubo una elevada tensión diplomática, sin que se lograra reactivar el diálogo formal entre los dos Gobiernos.²⁵ Aunque con motivo de la toma de posesión del nuevo primer ministro indio, Narendra Modi, se produjo un cierto acercamiento entre ambos gobiernos, esto no conllevó una mejora sustancial en las relaciones ni impidió que se repitiera el intercambio de fuego entre los dos ejércitos en diferentes momentos del año. A principios de 2014 el Gobierno pakistaní consideró una provocación las afirmaciones del jefe de las Fuerzas Armadas indias en las que justificaba la violación del acuerdo de alto el fuego si Pakistán también lo hacía. Además, la detención de un camionero pakistaní acusado de tráfico de drogas llevó al cierre de la frontera al comercio durante varios días, convirtiendo la cuestión del comercio bilateral en uno de los focos de tensión más importantes. En junio se produjo otro importante episodio de tensión aunque no causó víctimas, cuando la India acusó a Pakistán de un ataque en el distrito de Poonch que afectó a varias zonas

civiles y que además conllevó la pérdida de ganado. Las Fuerzas Armadas indias señalaron que habían devuelto el ataque utilizando el mismo tipo de armamento. Durante los meses de julio y agosto se repitieron los enfrenamientos y cerca de 20 personas, soldados y civiles, murieron como consecuencia de la violencia, que también provocó el desplazamiento de miles de personas, que se refugiaron en centros de acogida temporales tras varias semanas de enfrentamientos. La violencia tuvo un importante impacto en los medios de vida de la población local, afectando sobre todo a las actividades agrícolas y ganaderas. Diferentes intentos para rebajar la tensión fracasaron, entre los que cabe destacar un encuentro de comandantes de las fuerzas fronterizas de ambos países en agosto, tras el que se produjeron nuevos tiroteos pocas horas después de su conclusión. En octubre se produjo un incremento de la violencia entre los dos Ejércitos a lo largo de la Línea de Control –al menos 19 civiles murieron–, con enfrentamientos constantes, que en algunos momentos alcanzaron una frecuencia diaria, lo que podría haber supuesto la situación más grave en términos de enfrentamientos de la última década. El Gobierno pakistaní señaló que los ataques del Ejército indio habían causado la muerte a 13 civiles y herido a 53, aunque fuentes periodísticas apuntaban a 11 civiles fallecidos del lado pakistaní y ocho del lado indio. Las autoridades militares de los dos países mantuvieron contacto por medio de una línea directa en medio de la crisis, pero no sirvió para rebajar la tensión. En noviembre y diciembre prosiguió el intercambio de fuego que causó la muerte de al menos siete personas.

Nepal	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema Interna
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos –UCPN(M), CPN(UML)–, antiguo grupo armado de oposición maoísta PLA

Síntesis:

En 1996 se inició un conflicto armado que durante una década enfrentó al Gobierno nepalí con el brazo armado del partido maoísta CPN-M, el People's Liberation Army (PLA), que buscaba derrocar la monarquía e instaurar una república maoísta, en un país afectado por la ausencia de democracia, la pobreza, el feudalismo y la desigualdad. Tras diez años de conflicto armado y un autogolpe de Estado por el que el rey asumió todos los poderes del Estado en 2005, a finales de abril de 2006 el rey Gyanendra decretó la reapertura del Parlamento después de varias semanas de intensas protestas sociales que costaron la vida a una veintena de personas. Las protestas que llevaron al derrocamiento del rey fueron organizadas por una coalición de los siete principales partidos democráticos de oposición y los maoístas. Tras la caída de la monarquía éstos declararon unilateralmente un alto el fuego secundado por el Gobierno provisional. En noviembre

25. Véase el resumen sobre India y Pakistán en el capítulo 3 (Procesos de paz).

de 2006 se firmó un acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado y posteriormente se proclamó la república. En el año 2008 se estableció una Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna nepalí, aunque las sucesivas crisis políticas y la falta de acuerdo sobre aspectos clave del proceso de paz como la descentralización territorial han desembocado en un estancamiento de este proceso.

La situación política mejoró en Nepal a lo largo del año pero, si bien se fortaleció el proceso encaminado a la redacción de una nueva Constitución tras la formación de la nueva Asamblea Constituyente en 2013, en diciembre los partidos políticos nepalíes admitían que no sería posible alcanzar el consenso político para cumplir con la fecha del 22 de enero de 2015 para tener redactada la nueva Constitución. A principios de 2014, los diputados elegidos en las elecciones de 2013 tomaron posesión de sus escaños y alcanzaron el compromiso de redactar la nueva Carta Magna para el país durante 2014. Tras la elección del nuevo primer ministro en febrero, Sushil Koirala, del Partido del Congreso Nepalí, con el apoyo de 405 de los 601 diputados, los líderes de los tres principales partidos políticos, Congreso Nepalí, CPN-UML y UCPN(M) alcanzaron un acuerdo para el establecimiento de un Comité Político de alto nivel encargado de la redacción de la nueva Constitución y se comprometieron con diferentes aspectos para el éxito de este proceso y a trabajar conjuntamente para resolver los problemas del proceso de transición. Sin embargo, el acuerdo no fue posible, y se produjeron numerosas diferencias entre las distintas facciones políticas. La cuestión de la futura organización territorial del país fue uno de los asuntos centrales en el desacuerdo. El partido maoísta UCPN(M) anunció la formación de una alianza de cinco partidos de izquierdas para hacer propuestas al redactado de la nueva Constitución y garantizar que respeta lo contemplado por los acuerdos de paz de 2006. En abril se aprobó en el Parlamento la ley para el establecimiento de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación y la Comisión sobre los Desaparecidos, que recibió críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos, ya que contempla la amnistía para los responsables de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, aunque esta amnistía debería contar con la aprobación por parte de las víctimas.

Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos)

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, acusando a este Gobierno y a los previos de mala gestión y corrupción. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convierte en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución a al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los intentos de poner fin a la independencia del poder judicial o la creciente fuerza de las milicias talibán en las zonas tribales del país fronterizas con Afganistán son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras su derrota en las elecciones legislativas, siendo sustituido en el cargo por Asif Ali Zardari. No obstante, el país ha continuado experimentando alarmantes niveles de violencia.

Pakistán vivió una seria crisis política durante todo el año, agravada por los elevadísimos niveles de violencia que afectaron a todo el país en paralelo a los conflictos armados que enfrentan al Gobierno con las insurgencias talibán y baluchi.²⁶ La ciudad de Karachi fue nuevamente escenario de fuerte tensión y en torno a 2.000 personas podrían haber muerto como consecuencia de la violencia, en su mayor parte víctimas de asesinatos selectivos. Según el Center for Research and Security Studies de Pakistán la mayor parte de las víctimas de esta violencia eran civiles. Además, también se produjeron víctimas como consecuencia de las operaciones que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo en la ciudad, así como a causa de los atentados de las organizaciones insurgentes. Cabe destacar que la zona de Lyari continuó siendo el epicentro de la violencia en la ciudad de Karachi y fue el lugar en el que se produjeron la mayoría de los incidentes protagonizados por las bandas armadas –algunas de ellas vinculadas a los diferentes partidos políticos– que operan en la ciudad. Aunque en marzo dos de las principales bandas de la urbe, las lideradas por Uzair Baloch y Baba Ladla respectivamente, alcanzaron una tregua, ésta no sirvió para que se produjera una reducción significativa de la violencia y se continuaron registrando niveles muy elevados. Se repitieron las críticas sobre la falta de efectividad de las fuerzas de seguridad para poner fin a la violencia y la inseguridad ya que las diferentes operaciones no han logrado una reducción significativa, aunque las fuerzas de seguridad anunciaron que más de 20.000 personas habían sido detenidas durante la operación iniciada en septiembre de 2013, y que al menos 350 criminales y terroristas habían muerto en el marco de esta operación. Un momento crítico del año se produjo tras la detención en Londres de Altaf Hussain, líder del partido MQM –uno de las principales fuerzas políticas en la ciudad y segunda en importancia en la provincia de Sindh, que representa a la comunidad mohajir, descendientes de los musulmanes

26. Véase los resúmenes de Pakistán y Pakistán (Baluchistán) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

urdu hablantes que emigraron de la India a Pakistán tras la partición—. Su detención hizo saltar las alarmas ante un posible incremento de violencia en la ciudad y llevó a la paralización del transporte público y el cierre de comercios, tras el incendio de varios autobuses. Hussain, que reside en el Reino Unido desde 1992, desde donde dirige el partido, fue puesto en libertad bajo fianza tras haber sido acusado de blanqueo de dinero.

En paralelo a la violencia en la ciudad de Karachi, también **cabe destacar la grave crisis política que atravesó el país especialmente durante los meses de agosto y septiembre. Los líderes opositores Imran Khan, líder del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), y el clérigo Tahirul Qadri, líder del partido Pakistan Awami Tehreek, convocaron protestas reclamando la dimisión del primer ministro Nawaz Sharif en las que participaron miles de personas.** Aunque inicialmente tuvieron un carácter pacífico, fueron derivando en enfrentamientos con la Policía en los que murieron varias personas y centenares resultaron heridas y detenidas. La entrada de los manifestantes a las zonas de acceso restringido en la capital en las que se ubican los principales edificios gubernamentales y administrativos, protegidos por el Ejército, llevó a una escalada de la violencia y a que la Policía respondiera reprimiendo a los manifestantes. La crisis se inició como consecuencia de las acusaciones de Imran Khan a Sharif de fraude electoral así como su exigencia de convocatoria de nuevas elecciones, mientras que Qadri demandó la formación de un Gobierno de unidad nacional. Ambos líderes se aliaron en la convocatoria de las protestas a pesar de sus diferentes planteamientos. El Ejecutivo solicitó ayuda a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo negociaciones con los opositores, pero el fracaso de las negociaciones llevó a la persistencia de las protestas. No obstante, en el mes de septiembre, las protestas perdieron fuerza y los manifestantes abandonaron las zonas que habían ocupado en Islamabad. En los meses posteriores las protestas persistieron en otras zonas del país, aunque se enfriaron notablemente en Islamabad. En diciembre, la Corte Suprema rechazó las diferentes peticiones de destitución del primer ministro Sharif, incluyendo la que había sido presentada por el PTI.

Sri Lanka (nordeste)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social tamil

Síntesis:

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamen-

talmente por las elites cingalesas, tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de un acuerdo de alto el fuego, el fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde entonces miles de tamiiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de guerra del conflicto armado, negando la comisión de este tipo de delitos.

La situación en Sri Lanka se agravó durante el año con diferentes hechos de violencia y un clima especialmente tenso previo a la celebración de las elecciones presidenciales en enero de 2015. La convocatoria de elecciones adelantada a enero vino acompañada de numerosas denuncias de intimidación y ataques violentos contra activistas y llevó incluso a diferentes analistas a advertir de los riesgos de golpe de Estado en caso de victoria por parte de la oposición.

Miles de personas participaron en Pakistán en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Nawaz Sharif encabezadas por los líderes opositores Imran Khan y el clérigo Tahirul Qadri

La candidatura opositora encabezada por Maithripala Sirisena, ministro de Salud hasta que en noviembre anunció su disposición a concurrir a las elecciones, supuso un importante reto para Mahinda Rajapaksa, al aglutinar a una parte importante de la oposición política, incluyendo el principal partido de la oposición UNP, miembros del propio Gobierno de Rajapaksa y contar con los apoyos del principal partido tamil, el TNA, y del musulmán Sri Lanka Muslim Congress (SLMC). **Con respecto a la cuestión de los crímenes de guerra cometidos durante la fase final del conflicto armado que enfrentó al Gobierno con el LTTE y que finalizó en 2009, el Gobierno continuó obstruyendo cualquier investigación independiente de los hechos.** Cabe destacar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para dar inicio a una investigación sobre estos posibles crímenes de guerra a partir del previo reconocimiento de que 40.000 civiles tamiiles pudieron haber muerto durante los últimos meses del conflicto armado como consecuencia fundamentalmente de los bombardeos gubernamentales. La resolución fue promovida por los Gobiernos estadounidense y británico, entre otros, y recibió el voto favorable de 23 de los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos. El Gobierno criticó duramente la resolución y se negó a cooperar con Naciones Unidas en la investigación de lo sucedido. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, destacó que el Ejecutivo cingalés no había llevado a cabo ninguna investigación fiable, a pesar de la presentación internacional de algunos de los avances en la implementación de las recomendaciones

efectuadas por la Comisión sobre Lecciones Aprendidas y Reconciliación, establecida por el presidente Mahinda Rajapakse. Durante todo el año se obstruyó la labor de investigación de Naciones Unidas, con intimidaciones y arrestos de personas tamilyes que colaboraban con la ONU, así como con trabas burocráticas y administrativas al personal de la ONU. En mayo el Gobierno realizó un desfile militar en conmemoración de la victoria sobre el LTTE cinco años después del fin del conflicto armado, pero fueron prohibidos los actos en memoria de los fallecidos tamilyes durante la guerra.

En paralelo, cabe destacar que **el Gobierno incrementó las operaciones de seguridad en el norte y el este del país aduciendo a una posible rearticulación del grupo armado de oposición tamil LTTE, que tras el fin del conflicto armado quedó aniquilado.** Las Fuerzas Armadas afirmaron haber matado en abril a tres supuestos integrantes del grupo que estarían intentado su rearticulación, a partir de las instrucciones de supuestos dirigentes del LTTE en Europa. La organización Women's Action Network denunció las detenciones de mujeres familiares de los sospechosos de reactivar el LTTE, aunque la policía señaló que se las había arrestado bajo los supuestos contemplados por la legislación antiterrorista. Unas 60 personas resultaron detenidas como consecuencia de las redadas en el norte del país y en la capital, Colombo, y el Gobierno malasio también reconoció el arresto de tres supuestos integrantes del LTTE que residían en este país como refugiados. Además, en el mes de marzo dos destacados defensores de los derechos humanos fueron detenidos y puestos en libertad pocos días después como consecuencia de la presión internacional para su liberación. Éstos denunciaron que otras activistas permanecían privadas de libertad por el Gobierno. Por otra parte, en junio se produjo una oleada de violencia contra la comunidad musulmana en las ciudades de Alutgama y Beruwala y tres personas que profesaban esta religión murieron como consecuencia de los ataques llevados a cabo por el grupo budista extremista Bodu Bala Sena. Este grupo también incendió varias casas y causó daños materiales en mezquitas. Su líder había sido detenido en mayo por proferir insultos al Corán e intimidar a los abogados defensores de denunciantes musulmanes. El Gobierno impuso el toque de queda de varios días para hacer frente a la violencia y el ministro de Justicia, Rauf Hakeem, amenazó con dimitir después de que el Gobierno autorizara la manifestación del grupo budista que derivó en los ataques violentos contra la población musulmana. Además, un monje budista líder de una iniciativa de diálogo entre las diferentes comunidades religiosas y crítico con las organizaciones budistas extremistas fue detenido.

Asia Oriental

China (Tíbet)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna internacionalizada

Actores:	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes
-----------------	--

Síntesis:

En 1950, un año después de haber vencido en la guerra civil china, el Gobierno comunista de Mao Tse-tung invade el Tíbet y durante la década siguiente incrementa su presión militar, cultural y demográfica sobre la región y sofoca varios intentos de rebelión en los que murieron miles de personas. Ante la brutalidad de la ocupación, en 1959 el Dalai Lama y decenas de miles de personas huyeron del Tíbet y se exiliaron en varios países, especialmente en Nepal o el norte de India, donde tiene sede el Gobierno en el exilio. En las últimas décadas, tanto el Dalai Lama como numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión, la colonización demográfica y los intentos de aculturación que sufre la población tibetana, una parte de cuyo territorio tiene el estatus de región autónoma. El diálogo entre el Dalai Lama y Beijing se ha visto interrumpido en varias ocasiones por las acusaciones del Gobierno chino sobre los presuntos objetivos secesionistas del Dalai Lama. El estallido de violencia que se produjo en 2008, el más virulento de las últimas décadas, interrumpió el diálogo nuevamente y erosionó significativamente la confianza entre las partes. La oleada de autoinmolaciones con fuego que se inició en 2009 en varias provincias chinas con presencia tibetana provocó una contundente reacción por parte de Beijing, así como un alejamiento entre el Gobierno chino y las autoridades tibetanas en el exilio, a las que se acusa de auspiciar las protestas.

Durante el año no se registraron episodios de violencia significativos, pero prosiguieron las denuncias sobre la situación de los derechos humanos por parte de organizaciones internacionales, así como las protestas y las autoinmolaciones con fuego en contra del Gobierno y a favor del regreso del Dalai Lama al Tíbet. Con los casos registrados en 2014, desde el año 2009 se han contabilizado 134 autoinmolaciones, 128 de las cuales en China (principalmente en las provincias de Sichuan, Qinghai y Gansu, mientras que casi no se ha registrado ningún caso en la Región Autónoma del Tíbet) y otras seis en India y Nepal. La gran mayoría de las autoinmolaciones han provocado la muerte de las personas que protagonizaron la protesta. En cuanto a la situación de derechos humanos, el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, con sede en Dharamsala (localidad india en la que está ubicado el Gobierno tibetano en el exilio), denunció un incremento de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura e incluso los disparos contra población desarmada por parte de las autoridades chinas. Otras organizaciones de derechos humanos hicieron denuncias parecidas en varios momentos del año. Radio Free Asia denunció la muerte de un monje en la prefectura de Chamdo (Región Autónoma del Tíbet) presuntamente por las agresiones sufridas mientras se hallaba bajo custodia policial, así como la condena a penas de entre 10 y 18 años de cárcel contra tres personas que habían sido acusadas de participar en varias protestas en el condado de Driru, también en la Región Autónoma del Tíbet. Por su parte,

la organización Human Rights Watch publicó un informe en el que advierte sobre un notable incremento en las restricciones y hostigamiento contra la población tibetana residente en Nepal por presiones de las autoridades chinas. A mediados de año, coincidiendo con el 25º aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, HRW y otras organizaciones de derechos humanos exigieron al Gobierno chino el fin del hostigamiento y la represión contra activistas de distintas causas, así como la liberación de algunos de ellos.

En cuanto a las protestas, **uno de los elementos más novedosos del año fue el incremento de las movilizaciones vinculadas a factores medioambientales y a la actividad de empresas mineras en el Tíbet.** En el mes de mayo, un joven tibetano se apuñaló y se lanzó desde un tejado para llamar la atención sobre esta cuestión. Poco después, en el mes de junio, en la localidad de Gewar (condado de Chamdo) fueron detenidas unas 60 personas que protestaban contra la actividad minera y contra la muerte de una persona durante las protestas que se habían producido semanas antes en la ciudad de Tongbar. A principios de agosto, 13 personas resultaron heridas en la prefectura de Shigatse (Rizake en chino), en la Región Autónoma del Tíbet después de que, según algunas fuentes, la Policía disparara contra una multitud de gente que había rodeado algunos edificios públicos para protestar contra la actividad de empresas mineras en la región. A finales de septiembre, más de 1.000 personas también llevaron a cabo una movilización en el condado de Maldro Gongkar para protestar contra los efectos medioambientales de las actividades mineras. En el mes de noviembre, la organización Free Tíbet denunció que el Gobierno chino estaba forzando a población nómada a abandonar sus tierras con el objetivo de facilitar la implantación de grandes infraestructuras (como presas) y la actividad de empresas mineras. Según esta organización, la mayor parte de esta población nómada que se ve forzada a desplazarse hacia áreas urbanas padece altos niveles de desempleo y exclusión socioeconómica. Free Tíbet también recordó que en 2012 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación ya instó a Beijing a poner fin a estos programas de reasentamiento y relocalización forzosa de población nómada, que normalmente se dedica a actividades agropecuarias.

En el plano político, cabe destacar tres cuestiones. En primer lugar, la campaña iniciada por el gobierno tibetano en el exilio en el mes de junio para dar a conocer su política de “vía intermedia” y para contrarrestar las informaciones difundidas desde Beijing, algunas de las cuales ponen el acento en que el objetivo final del gobierno tibetano en el exilio es la independencia o en las presuntas diferencias de enfoque entre el Dalai Lama y el actual primer ministro tibetano, Lobsang Sangay. En el mes de diciembre, el propio Sangay declaró que cada vez más son los gobiernos que consideran que esta estrategia, consistente en renunciar a la independencia del Tíbet pero exigir la concesión de una autonomía genuina en las cuestiones que son de vital importancia para el mantenimiento de la identidad tibetana, puede ser la

adecuada para resolver el conflicto histórico en el Tíbet. En este sentido, cabe destacar el encuentro privado que mantuvieron en la Casa Blanca a finales de febrero el Dalai Lama y el presidente estadounidense Barack Obama, el tercero de este tipo desde que este último accedió al cargo en 2009. El Gobierno de China expresó su malestar por el encuentro e incluso solicitó formalmente la cancelación del encuentro. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca al finalizar la reunión, Obama expresó su oposición a la independencia del Tíbet y trasladó su apoyo a la estrategia denominada “vía intermedia” que lidera el Dalai Lama desde hace muchos años. Por otra parte, en septiembre el propio Dalai Lama reconoció haber participado en conversaciones informales y no oficiales (el diálogo formal se halla interrumpido desde el año 2010) con representantes del Gobierno para abordar su peregrinaje al lugar sagrado Wuntai Shan (Región Autónoma del Tíbet). El Dalai Lama también señaló que el actual presidente, Xi Jinping, tenía una mentalidad mucho más abierta y una aproximación mucho más realista en la resolución de los problemas que sus antecesores en el cargo y, además, celebró las declaraciones de Xi Jinping en las que enfatizaba la importancia del budismo en la sociedad china.

China – Japón	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Japón

Síntesis:

La disputa entre China y Japón (y, en menor medida, Taiwán) por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. La declaración unilateral en 2013 por parte de China de una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluía a las islas en disputa, así como las acciones unilaterales de ambas partes que antecedieron y siguieron a dicha declaración por parte de Beijing, incrementaron significativamente la tensión bilateral y regional en torno a un contencioso histórico que se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta pero que, según varios analistas, contiene el potencial para provocar algún incidente militar entre ambos países e incluso para desestabilizar la región.

Se mantuvo la tensión militar y diplomática entre China y Japón por su contencioso acerca de las islas Senkaku/Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente), aunque también cabe destacar que ésta fue menor que en 2013 y que a finales de año ambos países firmaron un impor-

tante acuerdo y que se produjo una reunión entre el presidente chino y el primer ministro japonés. **Aunque no se registraron enfrentamientos directos ni incidentes bélicos deliberados o fortuitos en las inmediaciones de las islas Senkaku/Diaoyu, el Gobierno japonés declaró que barcos y aviones chinos se adentran de manera frecuente en sus aguas territoriales y espacio aéreo en las mencionadas islas, acusó a China de realizar maniobras militares peligrosas en la zona** y denunció públicamente que cazas chinos se habían acercado demasiado a aviones japoneses en tareas de control y vigilancia cerca de las islas Senkaku/Diaoyu. Según informaciones hechas públicas a finales de septiembre por Tokyo, el número de incursiones de patrulleras chinas en los alrededores de dichas islas ha disminuido en los últimos años (216 en 2012, 101 en 2013 y 23 hasta finales de septiembre de 2014), pero en el mismo periodo se incrementó el número de denuncias por presencia de barcos pesqueros chinos en la misma zona (39 en 2012, 88 en 2013, 207 hasta finales de septiembre de 2014). Algunas fuentes consideran que dicha disminución responde principalmente al hecho de que el Gobierno chino ha centrado su atención y sus esfuerzos en el Mar de la China Meridional, mientras que otras creen que responde a una mejora de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Cabe destacar que a finales de junio cinco pescadores desaparecieron tras el hundimiento de un barco chino cerca de las islas en disputa. Por otra parte, en el mes de abril Beijing criticó las decisiones por parte del Gobierno japonés de empezar a construir una base militar en la isla de Yonaguni (prefectura de Okinawa, la más occidental de Japón, a unos 150 kilómetros al suroeste de las islas Senkaku/Diaoyu), de desplegar de manera permanente a una unidad de vigilancia marítima compuesta por 150 miembros de las Fuerzas de Auto Defensa, y de poner nombre a más de 150 islas, incluyendo cinco islotes de Senkaku/Diaoyu. A principios de año Beijing también criticó duramente unas declaraciones del primer ministro japonés, Shinzo Abe, en las que comparaba la anexión de Crimea por parte de Rusia con la política de China hacia las islas Senkaku/Diaoyu.

Además de la crisis política y diplomática por su desacuerdo sobre la soberanía de las islas y de la tensión militar por la presencia de embarcaciones y aviones de ambos países en la zona en disputa, las relaciones bilaterales también estuvieron afectadas por otros tres factores. En primer lugar, por la **decisión del Ejecutivo japonés de reinterpretar (que no reformar, pues ello requeriría una mayoría cualificada en el Parlamento) el artículo 9 de la Constitución japonesa (aprobada tras la Segunda Guerra Mundial), que circunscribía la actividad de las Fuerzas Armadas japonesas a la auto-defensa e impedía a Tokio su despliegue fuera del territorio nacional.** El propio primer ministro, Shinzo Abe, declaró que su Gobierno no tiene intención de participar en alianzas militares, ni de desplegar tropas de manera estable en el extranjero, ni de participar en la defensa de terceros países, y que la mencionada interpretación pretende proteger a ciudadanos japoneses que se en-

cuentren en situaciones de inseguridad. Sin embargo, un alto cargo del Gobierno sostuvo posteriormente que la reinterpretación de la Constitución permitiría, entre otras cuestiones, socorrer a EEUU en caso de ataque o amenaza, mientras que la actual alianza militar que mantienen ambos países no lo permitía. Tanto el Gobierno chino como varios analistas vincularon esta reinterpretación del artículo 9, así como otros cambios en la estrategia de seguridad nacional japonesa, con el contencioso territorial que mantienen China y Japón en las islas Senkaku/Diaoyu. Beijing declaró que la nueva estrategia de seguridad japonesa atenta contra la paz y la estabilidad de la región. Esta posición fue secundada por un informe lanzado en el mes de julio por uno de los principales think tank chinos en el que advertía sobre un notable incremento en 2013 de los ejercicios militares japoneses (en solitario o conjuntamente con terceros países como EEUU) y en el que señalaba que las capacidades bélicas de Japón se dirigían fundamentalmente contra los intereses de China y se estaban orientando hacia la preparación de la guerra.

Por otra parte, también se incrementó la tensión entre el Gobierno chino y los Gobiernos de EEUU y Filipinas por las alianzas políticas y militares de estos países con Japón y por apoyar tácitamente sus reclamaciones territoriales. En este sentido, el presidente estadounidense, Barack Obama, declaró a finales de abril que la alianza de seguridad que mantiene con Japón le compromete a defender todo el territorio japonés, incluyendo las islas Senkakau/Diaoyu. Con motivo de estas declaraciones, durante una visita del secretario de defensa estadounidense a China, el Gobierno instó a Washington a no inmiscuirse en sus contenciosos territoriales. Posteriormente, a finales de septiembre el subsecretario de Defensa de EEUU reiteró que, en virtud del tratado de defensa bilateral que mantiene con Japón, EEUU defenderá a Japón ante una eventual agresión a su integridad territorial en el Mar de China Oriental mientras las mencionadas islas sigan formando parte de Japón. A la vez, sin embargo, dejó claro que su Gobierno no tiene una posición definida respecto del contencioso entre China y Japón sobre la soberanía de las islas. Igualmente, Beijing también criticó el apoyo que Filipinas, país con el que también mantiene contenciosos territoriales, habría prestado a la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución japonesa. El tercer elemento que agravó el estado de las relaciones bilaterales entre China y Japón fueron algunas declaraciones y gestos simbólicos. En agosto, por ejemplo, con motivo del aniversario de la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, varios miembros del Gobierno japonés visitaron el templo de Yasukuni, un templo en el que yacen algunos de los principales responsables de los crímenes de guerra cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, calificados de mártires por un alto cargo del Gobierno nipón. Posteriormente, en octubre, Abe envió ofrendas al mencionado templo y 110 parlamentarios llevaron a cabo oraciones en él. Por su parte, a principios de julio el presidente chino fue el primero en participar en la conmemoración del incidente que, en 1937, dio inicio a la segunda guerra sino-japonesa.

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera *de facto* en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

A pesar de que durante el año se llevaron a cabo las primeras conversaciones de alto nivel en los últimos siete años y de que en el mes de febrero se produjeron algunas reuniones de familias divididas por la Guerra de Corea (1950-53), las relaciones entre ambos países estuvieron regidas por altos niveles de confrontación militar y constantes intercambios de fuego, así como por las acusaciones a Corea del Norte de violaciones masivas de los derechos humanos. En el terreno militar, algunos analistas señalaron que aunque Corea del Norte suele lanzar disparos de artillería y misiles de distinto alcance de manera rutinaria, en 2014 lo hizo con una frecuencia e intensidad muy superior a la de años anteriores. Por su parte, Corea del Sur llevó a cabo ejercicios militares en distintos momentos del año (en solitario o con otros países), provocando las protestas enérgicas y las amenazas de su país vecino. Así, además de los ejercicios anuales que lleva a cabo con EEUU entre los meses de febrero y abril (que tanto Corea del Sur como EEUU consideran rutinarios y defensivos), también realizó ejercicios navales conjuntos con EEUU a mediados de julio, pocos días más tarde los llevó a cabo con EEUU y Japón cerca de la isla de Jeju y, finalmente, a mediados de agosto, volvió a realizar unos ejercicios militares conjuntos con EEUU en los que participaron aproximadamente 50.000 tropas surcoreanas y unas 30.000 tropas estadounidenses. En cuanto al intercambio de fuego entre ambos países, durante todo el año se produjeron enfrentamientos, escaramuzas y advertencias, pero el momento de máxima

confrontación se produjo entre finales de marzo y abril, especialmente cerca de su frontera marítima en el Mar Amarillo –denominada Línea Limítrofe del Norte (LLN)–, que no es reconocida por Corea del Norte. En dichas fechas, el Gobierno norcoreano llevó a cabo unos 500 disparos de artillería, buena parte de los cuales cayeron al sur de la LLN, provocando la evacuación de la población de las islas surcoreanas cercanas a la LLN. A su vez, Corea del Sur realizó unas 300 rondas de disparos en las aguas territoriales en disputa. Algunos medios consideraron este intercambio de fuego el más grave desde el año 2010. En los días anteriores al mencionado incidente en la frontera la tensión entre ambos países ya se había incrementado notablemente por el lanzamiento por parte de Corea del Norte de más de 70 cohetes a aguas internacionales del Mar de Japón, que Corea del Norte defendió como ejercicios militares defensivos pero que fue duramente criticado por su país vecino. Además, el lanzamiento por parte de Pyongyang el 26 de marzo de dos misiles Nodong de medio alcance por primera vez desde el año 2009 provocó la condena unánime de la comunidad internacional y el incremento de la tensión en la península coreana. Dicho lanzamiento coincidió con el cuarto aniversario del hundimiento de una nave surcoreana que provocó la muerte de sus 46 tripulantes y que varios países atribuyeron a un proyectil por parte de Corea del Norte.

Otro de los aspectos que generó desconfianza y tensión entre ambos países fue la situación de derechos humanos en Corea del Norte. En este sentido, cabe destacar la ejecución en el mes de enero de la familia más cercana a Jang Song-Thaek –tío de Kim Jong Un y persona de máxima confianza de su padre, Kim Jong Il–, que fue ejecutado junto con otros dos colaboradores cercanos el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la cuestión que generó mayor preocupación en Corea del Sur y entre la comunidad internacional fue la **publicación a mediados de febrero del informe de la Comisión de Investigación internacional, según el cual cientos de miles de personas han muerto en los últimos 50 años en campos de concentración y entre 80.000 y 120.000 personas todavía permanecen recluidas en cuatro grandes prisiones del país.** El informe considera que en las últimas décadas se han perpetrado crímenes comparables a los que llevaron a cabo los nazis durante los años treinta y cuarenta. En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que instaba al Consejo de Seguridad a tomar en consideración el informe de la Comisión de Investigación y a adoptar las medidas oportunas, incluyendo la transferencia del caso a la Corte Penal Internacional por posibles crímenes contra la humanidad, la activación de mecanismos de justicia penal internacional o el establecimiento de sanciones contra aquellas personas responsables de los presuntos crímenes. Previamente, el Consejo de Derechos Humanos había decidido extender un año más el mandato del máximo responsable de la Comisión de Investigación y establecer una oficina en el terreno para seguir recabando información y pruebas sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte. En los últimos

años, varias organizaciones de derechos humanos habían venido insistiendo en la necesidad de que la comunidad internacional mostrara un mayor interés por la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, una situación que a su entender quedaba eclipsada por la preocupación que genera el programa nuclear norcoreano. Sin embargo, varios analistas consideran que existen escasas posibilidades de que el Consejo de Seguridad tome decisiones al respecto por el veto de China y de Rusia, que rechazan algunas de las conclusiones de dicho informe y por el rechazo de Pyongyang a las mencionadas acusaciones. En este sentido, el Gobierno de Corea del Norte instó a la comunidad internacional a no inmiscuirse en sus asuntos internos y, en el mes de septiembre, presentó un informe en el que no solamente rechaza las acusaciones de la mencionada comisión de investigación (que considera están motivadas políticamente) y niega la existencia de campos de concentración, sino que afirma que la situación de los derechos humanos es buena y que, entre otras cuestiones, están garantizados los derechos de libertad de expresión y religión y existen plenas garantías de protección frente a la tortura o la esclavitud.

A pesar de la tensión política y militar entre ambos países, durante el año también se produjeron algunos de los acercamientos más importantes de los últimos años. A finales de febrero, en el complejo turístico de Monte Kumgang (Corea del Norte) se llevó a cabo el primer encuentro entre familias separadas por la guerra en los últimos tres años. Desde 1985, se han producido 19 reuniones de este tipo. En el período de mayor aproximación entre ambos países, tras la cumbre del año 2000, unas 18.000 personas pudieron encontrarse brevemente con sus familiares, y otras 4.000 pudieron comunicarse a través de videoconferencias. Actualmente, existen unas 70.000 personas en Corea del Sur que están inscritas para participar en encuentros de este tipo, siendo seleccionadas por sorteo. Antes del encuentro de finales de febrero, el Gobierno surcoreano había aprobado una partida de ayuda humanitaria de unos 400.000 dólares destinados a su país vecino, mientras que Corea del Norte había enviado una carta a Seúl instando a la reconciliación y a la finalización de los actos de hostilidad y aceptando la propuesta surcoreana de recalendarizar las reuniones de familias separadas por la Guerra de Corea, que habían sido canceladas meses atrás. Tras estas reuniones, el diálogo intercoreano quedó relativamente interrumpido hasta el último trimestre del año, cuando una delegación con una cuarentena de representantes gubernamentales y empresarios surcoreanos visitó Corea del Norte para evaluar el posible interés inversor en una línea férrea que pretende unir Rusia con la ciudad portuaria de Rajin. También en estas fechas ambos Gobiernos mantuvieron varias conversaciones sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Asiáticos que se celebraron en la ciudad surcoreana de Incheon del 19 de septiembre

al 4 de octubre, percibidas por ambas partes como una magnífica oportunidad para la mejora de las relaciones bilaterales y la reconciliación entre ambos países. Finalmente, de manera relativamente sorprendente, el Gobierno norcoreano envió una delegación de tres personas muy cercanas al líder norcoreano Kim Jong Un con motivo de la ceremonia de clausura de los mencionados Juegos. Dicha delegación, la más alta que jamás Corea del Norte había enviado a su país vecino, se comprometió a reanudar el diálogo político al más alto nivel para mejorar las relaciones bilaterales. Pocos días después, a mediados de octubre, se produjo el primer encuentro militar de alto nivel entre los dos países desde el año 2007, pero el diálogo quedó interrumpido de facto después de que Corea del Norte acusara al Gobierno surcoreano de rigidez. A pesar de que la presidenta surcoreana aprovechó su presencia en la Cumbre Asia-Europa para instar a Pyongyang a reanudar el diálogo y que alentó a los 50 países presentes en la reunión a que cooperaran con Corea del Norte, no volvieron a producirse encuentros de alto nivel entre ambos países.

A pesar de que durante el año se llevaron a cabo conversaciones de alto nivel y algunas reuniones de familias divididas por la Guerra de Corea, las relaciones entre Corea del Norte y del Sur estuvieron regidas por altos niveles de confrontación militar y constantes intercambios de fuego

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea

Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión intencional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron unas conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

A pesar de que durante el año se registraron importantes avances hacia la reanudación de las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana, **la tensión entre el Gobierno de Corea del Norte y varios países se incrementó notablemente por el lanzamiento de varios cohetes, la amenaza de llevar a cabo**

un nuevo ensayo nuclear, la presunta reactivación de importantes instalaciones nucleares y el perfeccionamiento o construcción de infraestructuras para lanzar cohetes y satélites. En el primer trimestre del año Corea del Norte lanzó dos cohetes Rodong de medio alcance –considerados de los más avanzados del arsenal norcoreano– después de que durante el mes de marzo hubiera lanzado decenas de cohetes de corto alcance al Mar de Japón, de que EEUU y Corea del Sur hubieran iniciado sus ejercicios militares conjuntos anuales y de que la presidenta surcoreana hubiera advertido sobre el riesgo de que parte del armamento nuclear de Corea del Norte pudiera acabar en manos de organizaciones terroristas y que un accidente en el complejo nuclear de Yongbyon, el mayor del país, pudiera provocar una catástrofe mayor que la de Chernobyl en los años ochenta. Teniendo en cuenta los antecedentes –en 2006 y 2009, el lanzamiento por parte de Pyongyang de misiles Rodong antecedió a otros ensayos armamentísticos que generaron una gran preocupación entre la comunidad internacional–, el Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general de la organización, Ban Ki Moon, condenaron este lanzamiento por considerar que el uso de tecnología de misiles balísticos violaba varias resoluciones de Naciones Unidas, y algunos medios incluso especularon con la posibilidad de que se impusieran nuevas sanciones. Corea del Norte respondió a estas condenas advirtiendo sobre la posibilidad de llevar a cabo un nuevo tipo de ensayo nuclear, que sería el cuarto tras los ensayos llevados a cabo en 2006, 2009 y 2013. Aunque el comunicado de Corea del Norte no concretaba el tipo de ensayo nuclear al que aludía, varios analistas consideraron que Pyongyang está trabajando en la miniaturización de cabezas nucleares para adosarlas a misiles nucleares de largo alcance. A pesar de que este anuncio por parte de Corea del Norte provocó advertencias sobre nuevas sanciones por parte de países como Corea del Sur o EEUU o un endurecimiento del discurso por parte del Gobierno chino (que declaró que el programa nuclear supone una amenaza a la paz y la estabilidad de la región y advirtió al Gobierno surcoreano que un ensayo de este tipo le comportaría aún un mayor aislamiento internacional), en los meses de junio y noviembre Pyongyang volvió a amenazar con un nuevo ensayo atómico.

Siguiendo con la preocupación internacional por el programa atómico de Corea del Norte, **a finales de septiembre la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) aprobó durante su conferencia anual una condena por unanimidad contra el Gobierno norcoreano por sus esfuerzos para incrementar su capacidad nuclear, incluyendo la reanudación de un importante reactor nuclear y de una planta de procesamiento de uranio.** Semanas antes, un informe de la misma OIEA señaló que varias imágenes obtenidas por satélite (la OIEA fue expulsada del país en 2009) sugerían una reanudación de la actividad en dos reactores del complejo nuclear de Yongbyon, cerrado desde el año 2008. Según el informe, el primero permitiría producir en un año el plutonio necesario para fabricar una bomba atómica, mientras que el segundo tendría la capacidad de enriquecer uranio, también necesario para construir armamento atómico. Pocos

días después de la condena unánime de la OIEA a Corea del Norte, un informe del US-Korean Institute, de la John Hopkins University, advirtió que imágenes por satélite sugerían una mejora sustancial en la principal estación norcoreana de lanzamiento de cohetes, en el nordeste del país, lo que, según el mencionado instituto, es clave para el programa norcoreano de ensayo de misiles balísticos intercontinentales. A finales de año, nuevas imágenes por satélite parecieron confirmar la reanudación de la actividad en el reactor de Yongbyon, mientras que Corea del Sur advirtió sobre la puesta en funcionamiento de submarinos con capacidad para disparar misiles balísticos. En el mes de diciembre, el Gobierno estadounidense acusó a Pyongyang de estar detrás del ciberataque contra la compañía Sony, presuntamente por el estreno de una película sobre el líder norcoreano. Corea del Norte negó tales acusaciones y a su vez acusó a EEUU de provocar el bloqueo temporal de internet.

A pesar de estos episodios de tensión, **durante el año los seis países involucrados en las conversaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de la península coreana, interrumpidas desde 2009, llevaron a cabo una intensa actividad diplomática para reanudar el diálogo.** Cabe destacar especialmente las numerosas visitas a terceros países llevadas a cabo por el ministro de Exteriores norcoreano o bien por altos cargos norcoreanos. Fueron especialmente relevantes las declaraciones del ministro chino de Asuntos Exteriores en las que llamaba a la reanudación de las conversaciones y en la que presionaba públicamente a Corea del Norte, país del que tradicionalmente ha sido su principal aliado en la esfera internacional. En el mes de noviembre, tras un encuentro en Moscú entre un enviado especial del líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Exteriores, el Gobierno norcoreano habría expresado su disposición a reanudar las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de Corea sin condiciones previas y sobre la base de un comunicado conjunto emitidos en 2005 por los países participantes en estas conversaciones (EEUU, Corea del Sur, Japón, China, Rusia y Corea del Norte). Esta era la primera visita de un alto mandatario norcoreano a Rusia en varios años. Algunos analistas consideraron esta reunión como un intento del Gobierno norcoreano de acercarse a Rusia ante el creciente distanciamiento con Beijing. A pesar de que esta presunta predisposición al diálogo por parte de Pyongyang abrió nuevas expectativas e intensificó la actividad diplomática de los seis países mencionados, algunos de éstos discrepan sobre el momento y las condiciones para la reanudación de las conversaciones. En este sentido, EEUU, Corea del Sur y Japón exigen a Corea del Sur algunos gestos verificables que evidencien su compromiso hacia su desnuclearización y hacia el diálogo multilateral.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (Mindanao-MILF)

Intensidad: 3

Evolución: =

Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, MILF, BIFF

Síntesis:

El conflicto armado en Mindanao se remonta a finales de los años sesenta, fecha en la que Nur Misuari fundó el MNLF para exigir a Manila la autodeterminación del pueblo moro, un conjunto de grupos etnolingüísticos islamizados y organizados políticamente en sultanatos independientes desde el siglo XV. El MILF, por razones estratégicas, ideológicas y de liderazgo, se escindió del MNLF a finales de los años setenta. Mientras que el MNLF firmó un acuerdo de paz en 1996 en el que se preveía cierta autonomía para las áreas de Mindanao de mayoría musulmana (Región Autónoma del Mindanao Musulmán), el MILF prosiguió la lucha armada, a pesar de que en 1997 ambas partes iniciaron conversaciones de paz, facilitadas por Malasia, y de que en el año 2003 firmaron un acuerdo de alto el fuego supervisado por una misión internacional. La firma de un acuerdo de paz preliminar en octubre de 2012 y la reducción sustancial y sostenida de los enfrentamientos entre el MILF y las Fuerzas Armadas hasta niveles prácticamente irrelevantes hizo que el conflicto armado dejara de ser considerado como tal en el año 2012. Sin embargo, los niveles de violencia en Mindanao continuaron siendo elevados por los enfrentamientos entre el Gobierno y el BIFF (una escisión del MILF que se opone al proceso de paz), así como por los incidentes armados esporádicos entre el MILF y otros grupos armados que operan en la región.

En plena sintonía con la firma del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF el 27 de marzo y con los avances en su implementación, durante el año **no se registraron episodios de violencia significativos entre el Gobierno y el MILF, pero en cambio sí se produjeron numerosos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el BIFF –una facción escindida del MILF opuesta al proceso de paz–, que habrían provocado la muerte de más de 100 personas.** A pesar de las buenas relaciones que en general hubo entre el Gobierno y el MILF, en algunos momentos del año se incrementó significativamente la tensión entre ambas partes. A mediados de abril el MILF acusó al Gobierno de haber matado a cuatro de sus combatientes en el marco de una operación contrainsurgente contra Abu Sayyaf en la isla de Basilan. El Gobierno declaró posteriormente que las personas fallecidas no formaban parte del objetivo del operativo antiterrorista. A finales de junio volvió a incrementarse notablemente la tensión entre el MILF y el Gobierno después de que autoridades locales de la región de Lanao del Norte advirtieran sobre un ataque inminente de unos 700 miembros del MILF al servicio del comandante Bravo (Abdullah Macapaar), uno de los comandantes del MILF más activos en la espiral de violencia que se vivió en Mindanao en 2008 tras el colapso del acuerdo sobre territorios ancestrales. Según las autoridades locales, el plan del comandante Bravo era rescatar a un miembro del MILF detenido por haber secuestrado a dos personas. El Gobierno desplegó contingentes policiales y militares adicionales en la región, aunque finalmente no se produjeron episodios de violencia de importancia. Además de estos momentos esporádicos de tensión, durante el año el MILF

también protagonizó otros actos de violencia, como enfrentamientos contra facciones del MNLF, contra milicias comunitarias o incluso entre facciones rivales del MILF. Sin embargo, buena parte de los enfrentamientos que se han registrado en los últimos años entre el MILF y el MNLF o entre facciones del MILF responden más a litigios personales y familiares o de tierras que no a divergencias ideológicas o estratégicas. Este tipo de enfrentamientos, denominado “rido”, también estuvo protagonizado por otros actores armados de la región. A modo de ejemplo, a principios de agosto siete personas murieron en la localidad de Tuburan (provincia de Basilan) y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares después de que miembros del BIFF y de Abu Sayyaf se enfrentaran por cuestiones de tierras, mientras que a finales de junio un destacado líder del BIFF (comandante Basir) murió y otro destacado miembro de Abu Sayyaf (Misuari Jamiri) resultó herido en el marco de unos enfrentamientos entre una facción del MNLF leal al Gobierno y un contingente combinado del BIFF y Abu Sayyaf en la provincia de Basilan.

Los hechos de violencia más importantes del año fueron protagonizados por las Fuerzas Armadas y el BIFF, cuyos enfrentamientos provocaron la muerte de más de 100 personas. Durante todo el 2014 el BIFF mostró su oposición al proceso de paz y a finales de año rechazó firmar un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas, como sí suele hacer el NPA. En febrero, el Gobierno señaló que 53 combatientes del BIFF murieron (varios de ellos menores), decenas de personas resultaron heridas y más de 35.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en Maguindanao y Cotobato Norte como consecuencia de la operación contrainsurgente que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo entre finales de enero y principios de febrero. Según Manila, dicha operación provocó la toma de algunos de los principales campamentos del grupo y el debilitamiento y fragmentación del BIFF, que contaría con unos 460 combatientes. Uno de los argumentos que utilizó el Gobierno para justificar esta ofensiva en Maguindanao fue que el líder del BIFF, Ameril Umbrá Kato, se escondía en feudos del MILF en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden operar en virtud del acuerdo de cese de hostilidades y del proceso de paz entre ambas partes. En otro de los principales enfrentamientos entre el BIFF y las Fuerzas Armadas, 17 combatientes del BIFF y un soldado murieron en un choque entre ambas partes en Cotobato el 21 de julio. A mediados de septiembre, un día después de que el presidente, Benigno Aquino, enviara al Congreso para su discusión y aprobación el borrador de la Ley Fundamental de Bangsamoro, 12 personas murieron y varios centenares se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras un ataque perpetrado por el BIFF en la localidad de Midsayap (provincia de Cotobato). Al día siguiente de dicho enfrentamiento, el Gobierno puso en alerta roja a las Fuerzas Armadas, después de que algunos informes de inteligencia alertaran sobre la posibilidad de que grupos como el BIFF o Abu Sayyaf incrementaran sus ataques en Mindanao si proseguían las operaciones armadas contra el grupo Estado Islámico (ISIS) en Iraq o Siria. Sin em-

bargo, las Fuerzas Armadas dejaron claro que no existía ninguna coordinación entre las acciones de los mencionados grupos.

En los meses de noviembre y diciembre se incrementaron los enfrentamientos después de que el Gobierno declarara que sus operativos contra el BIFF le habían obligado a abandonar sus posiciones estratégicas en las regiones de Pikit y Datu Piang y además las Fuerzas Armadas incrementaron sus niveles de alerta por la presunta relación del BIFF con el estallido de varios artefactos explosivos. El más importante de ellos se produjo a mediados de diciembre, cuando 10 personas murieron y otras 41 resultaron heridas tras detonar una bomba en un autobús en la localidad de Maramag, provincia de Bukidnon. Previamente, en noviembre, el Gobierno había acusado al BIFF de estar detrás del estallido de un artefacto explosivo en la localidad de M'lang (provincia de Cotobato Norte) en el que tres personas murieron y otras 22 resultaron heridas. Días antes, en la misma provincia, una persona murió y otras 17 resultaron heridas por el estallido de un artefacto en una escuela. La Policía identificó otros dos artefactos explosivos sin detonar cerca de la mencionada escuela. En meses anteriores, el Gobierno ya había acusado al BIFF de orquestar el estallido de dos artefactos en la ciudad de General Santos, que hirieron a seis personas. Finalmente, a finales de junio el Gobierno declaró que durante una operación especial contra el grupo habría resultado herido Abdul Basit Usman, un experto en explosivos miembro de la red regional Yemaah Islamiyah que según fuentes gubernamentales se hallaba en la región para formar a cuadros del BIFF en la construcción de artefactos explosivos.

Filipinas (Mindanao-MNLF)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, facciones del grupo armado MNLF

Síntesis:

Aunque activo durante todo el siglo XX, el independentismo en Mindanao se articula políticamente durante los años sesenta e inicia la lucha armada a principios de los años setenta, de la mano del MNLF. Buena parte de las 120.000 personas que se estima que han muerto en Mindanao a causa del conflicto lo hicieron durante los años setenta, en plena dictadura de Ferdinand Marcos. Una facción del MNLF, el MILF, se escinde del grupo poco después de que, en 1976, éste firme un acuerdo de paz con el Gobierno que prevé la autonomía (y no la independencia) de Mindanao. A pesar del acuerdo, el conflicto armado se prolonga hasta 1996, fecha en la que se firma otro acuerdo de paz con contenidos parecidos al de 1976. Sin embargo, desde entonces algunas facciones no desarmadas del MNLF han protagonizado algunos episodios de violencia para exigir la plena implementación del acuerdo de paz y la liberación del fundador del MNLF, Nur Misuari, detenido en 2001 tras ser acusado de rebelión. A pesar de que la tensión se redujo por el acuerdo entre las

partes de revisar e implementar el acuerdo de paz de 1996, con la facilitación de la Organización de la Conferencia Islámica, y por la autorización a que Misuari lleve a cabo actividades políticas, siguieron produciéndose enfrentamientos esporádicos en varias regiones de Mindanao. En el año 2012, algunas facciones del MNLF se mostraron dispuestas a retomar la acción armada si el acuerdo de paz firmado ese año entre el Gobierno filipino y el MILF invalidaba algunos de los contenidos del acuerdo de paz de 1996.

Durante el año el MNLF no participó en hechos de violencia significativos, de modo que los elementos que generaron mayor preocupación en el Gobierno fueron la oposición expresada por algunas facciones y líderes del grupo al acuerdo de paz firmado a finales de marzo entre el Gobierno y el MILF; el temor a que alguna de estas facciones decida reanudar las hostilidades armadas; la falta de noticias sobre el paradero del fundador del MNLF Nur Misuari (fugitivo tras su presunta participación en el ataque a la ciudad de Zamboanga en septiembre de 2013) y, sobre todo, la confusión política y mediática que provocó el anuncio sobre una reorganización interna del grupo y la expulsión de Nur Misuari de la presidencia del mismo. **La oposición expresada por algunos líderes del MNLF a la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF a finales de marzo también generó signos de preocupación entre sectores del Gobierno y del propio MILF.** Si bien ninguno de estos líderes amenazó con retomar las armas, sí constataron que la frustración que podría provocar en muchos simpatizantes del MNLF la falta de reconocimiento del MNLF como actor político o el menosprecio al acuerdo de paz firmado entre el MNLF y el Gobierno en 1996 podrían tener consecuencias imprevisibles. En cuanto a los hechos de violencia en los que participó el MNLF, cabe destacar los enfrentamientos entre miembros del MNLF y el MILF a finales de febrero en la provincia de Cotobato Norte por un litigio de tierras, que provocaron la huida de cientos de personas en la región. A mediados de julio, volvieron a registrarse enfrentamientos por cuestiones de tierras entre facciones del MILF y el MNLF en Cotobato Norte. La tensión entre ambos grupos también se hizo patente cuando un destacado comandante del MNLF en Mindanao central declaró que cuatro comandantes del MILF y unos 4.000 combatientes del MILF habían abandonado la disciplina del grupo y habían ingresado en el MNLF. Tanto el Gobierno como el MILF negaron dichas informaciones y las calificaron de propaganda.

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

En plena consonancia con lo ocurrido en los últimos años, en Papúa Occidental se registraron incidentes de violencia esporádicos, movilizaciones a favor de la autodeterminación de la región y denuncias y protestas sobre la situación de los derechos humanos. En cuanto a los incidentes de violencia, cabe destacar la muerte de cuatro personas a finales de enero en la región de Puncak Jaya durante una operación de contrainsurgencia. En la misma región, a mediados de marzo, una persona murió y otras cuatro resultaron detenidas durante un ataque a una patrulla policial y militar que, según el gobernador de Papúa, no tenía motivaciones políticas, sino puramente criminal y delincuenciales. Pocas semanas más tarde, un policía y un militar resultaron heridos en un episodio de violencia ocurrido en una región fronteriza con Papúa Nueva Guinea. En el mes de abril volvieron a producirse varios enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y presuntos miembros del OPM a ambos lados de la frontera en los que varias personas resultaron heridas y que provocaron varias incursiones de las Fuerzas Armadas indonesias en territorio de Papúa Nueva Guinea –con la consiguiente tensión diplomática entre ambos países– y el cierre temporal de algunas escuelas y de un paso fronterizo, lo cual impidió a cientos de personas que accedieran a sus tierras o puestos de trabajo. Tras los enfrentamientos, las Fuerzas Armadas de Papúa Nueva Guinea declararon haber iniciado un operativo de persecución contra el OPM y haber destruido algunos de sus campamentos. Estos episodios de violencia se produjeron coincidiendo con la celebración de elecciones legislativas en Indonesia, que en términos generales transcurrieron pacíficamente. En este sentido, el Comité Nacional para Papúa Occidental (KNPB, una coalición de organizaciones que aboga por la autodeterminación de Papúa Occidental) hizo un llamamiento a boicotear dichas elecciones por considerar que el futuro de la región debe decidirse en un referéndum de autodeterminación. Finalmente, cabe destacar que cuatro o cinco personas (según las fuentes) murieron y otras 21 resultaron heridas en un episodio de violencia que se produjo en el mes de diciembre en la localidad de Ebarotali, en el distrito montañoso de Paniai. Aunque el Gobierno inició una investigación sobre el incidente, declaró que

éste se produjo después de que unas 200 personas atacaran un puesto policial y militar e hizo públicas sus sospechas de que el OPM podría haber orquestado dicho ataque. Sin embargo, organizaciones como HRW señalaron que las fuerzas de seguridad del Estado dispararon contra una multitud de personas que se congregaron ante dicho puesto para protestar por los abusos policiales contra un menor.

A raíz de este último incidente y de las declaraciones del nuevo presidente, Joko Widodo, sobre su intención de establecer un nuevo comando militar en la provincia de Papúa, varias organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos de incrementar la presencia militar y policial en la región. Según estas organizaciones, las Fuerzas Armadas ya tienen desplegados a unos 16.000 efectivos en la región. Si se añaden los efectivos policiales, **el número de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la región es superior al de la población indígena en Papúa y sitúa la presencia militar del Estado en niveles comparables con los que existían entre 1990 y 1998 en la provincia de Aceh cuando ésta era una zona especial de operaciones militares y regía la ley marcial.** Las mismas organizaciones de derechos humanos también criticaron el nombramiento como ministro de Defensa de una persona que habría liderado las operaciones militares en Aceh y Papúa Occidental en las que se habrían producido violaciones masivas de los derechos humanos. También en materia de derechos humanos, cabe destacar la manifestación convocada en el primer trimestre ante la embajada indonesia en Londres por Tapol, Amnistía Internacional, Survival y la Free West Papua Campaign para exigir la liberación de los 76 presos políticos que según dichas organizaciones hay en Indonesia. Según estas mismas organizaciones, en 2013 se dobló el número de detenciones por motivos políticos y se incrementaron los casos de torturas y malos tratos a personas presas o detenidas. El mismo día también se llevaron a cabo manifestaciones con el mismo objetivo en Nueva Zelanda, Australia, Holanda o Jayapura, la capital de la provincia de Papúa. En esta última manifestación se produjeron algunos incidentes y algunas personas fueron detenidas. Otra de las movilizaciones más importantes del año se produjo el 1 de diciembre con motivo del 53º aniversario de la proclamación de independencia de Papúa Occidental respecto de los Países Bajos.

En clave política, en el mes de enero trascendió que **el Gobierno estaba ultimando la revisión de la ley de autonomía especial para Papúa Occidental que se aprobó en 2001.** Sin embargo, ante las numerosas críticas que en los últimos años ha recibido dicha ley por no solucionar o encauzar la situación de conflictividad en Papúa, en 2013 el Gobierno inició una serie de conversaciones, entre ellas con los gobernadores de las provincias de Papúa y de Papúa Occidental, para reformar la mencionada ley. En el mes de agosto, Joko Widodo se reunió con varios líderes papús y les trasladó su intención de centrar en la región buena parte de su acción de gobierno. En el mes de diciembre, por ejemplo, anunció un nuevo plan para

incrementar y mejorar la red de ferrocarril en toda Papúa Occidental. En el terreno internacional, cabe destacar el discurso que realizó en el mes de marzo el primer ministro de Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que instó a la comunidad internacional a preocuparse de las continuas violaciones de derechos humanos que ha padecido el pueblo de Papúa Occidental desde 1969. En otras ocasiones, Moana Carcasses Kalosil se había distinguido por su apoyo a los procesos de autodeterminación y descolonización en Nueva Caledonia, Papúa Occidental o Tahití. En este sentido, uno de los hechos más destacados del año fue la decisión adoptada por el Melanesian Spearhead Group (MSG), una organización que agrupa a varias naciones del Pacífico, en su cumbre celebrada a finales de junio en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea), de no aceptar, momentáneamente, la petición de membresía al grupo formalizada en 2013 por la Coalición Nacional de Papúa Occidental para la Liberación (CNPOL). En su momento, el MSG decidió posponer la decisión a la espera de que una delegación del grupo llevara a cabo una visita a Indonesia y Papúa Occidental para conocer la situación de primera mano. Esta visita se llevó a cabo en el mes de enero, pero fue boicoteada por el Gobierno de Vanuatu por considerar que el programa de la visita no incluía reuniones con instituciones o personalidades representativas que pudieran expresar el sentir mayoritario de la población de Papúa Occidental y, por tanto, no permitía obtener la información suficiente como para poder cumplir con su cometido. A pesar de que más de 70 organizaciones de Papúa Occidental apoyaron abiertamente una representación directa de Papúa en el MSG, éste decidió que la CNPOL deberá volver a postularse para ingresar en el grupo, previa consulta con el Gobierno de Indonesia, que tiene el estatus de observador en la organización regional. Algunos de los jefes del Estado del MSG también pusieron el acento en la unidad y la representatividad del grupo de Papúa que aspire a ingresar en la organización regional, en clara alusión al hecho de que existe otra organización papúa, la República Federal de Papúa Occidental, que también dice representar al pueblo de Papúa y que sostiene que la CNPOL forma parte de su organización. Finalmente, cabe destacar que el comunicado final emitido por el MSG al finalizar su cumbre se compromete a prestar mayor atención a la ley de autonomía especial y a los progresos en materia de autogobierno, así como a promover, conjuntamente con el Gobierno indonesio, el desarrollo de Papúa Occidental.

Myanmar	
Intensidad:	2
Evolución trimestral:	=
Tipología:	Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (partido opositor NLD), grupo 969

Síntesis:

Un golpe de Estado en 1962 dio comienzo al Gobierno de la Junta Militar que desde entonces se ha mantenido en el poder. El Gobierno militar abolió el sistema federal e impuso una férrea dictadura, conocida como "vía birmana al socialismo". En 1988, la crisis económica llevó a miles de personas a manifestar su descontento en la calle, protestas que fueron duramente reprimidas por el régimen militar dejando un saldo de 3.000 muertos. No obstante, el Gobierno convocó unas elecciones cuyo resultado nunca reconoció, tras haber resultado vencedora la líder de la oposición democrática Aung San Suu Kyi, quien posteriormente fue arrestada, situación en la que permaneció de manera hasta 2010. En el año 2004, el Gobierno dio inicio a un proceso de reforma de la Constitución en un intento de ofrecer una imagen aperturista del régimen, proceso desacreditado por la oposición política a la dictadura. En el año 2007 la oposición política y numerosos monjes budistas lideraron intensas protestas sociales contra el régimen militar que fueron duramente reprimidas. En el año 2010 se celebraron elecciones generales que fueron calificadas de fraudulentas por la comunidad internacional y la oposición interna pero el Gobierno inició un proceso de reformas encaminadas a la democratización del país.

Myanmar vivió una situación de tensión política con diferentes focos durante todo el año. **La violencia intercomunitaria en el estado de Rakhine se repitió de nuevo en varias ocasiones, agravada por uno de los asuntos políticos más controvertidos del año, la elaboración de un censo en el país enormemente criticado por las clasificaciones étnicas establecidas.** En enero

se produjo uno de los hechos de violencia más graves, cuando un grupo de personas budistas acompañado por integrantes de las fuerzas de seguridad birmanas ocasionaron la muerte a 48 personas al atacar una población rohingya, causando también el desplazamiento de cientos de personas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se hizo eco de los hechos y reclamó que se investigaran, a lo que el Gobierno respondió negando que la masacre hubiera tenido lugar. Tras criticar que tanto Naciones Unidas como los medios de comunicación internacionales hubieran recurrido a fuentes locales, en su informe final sobre lo ocurrido el Gobierno negaba que la violencia hubiera tenido lugar. Además, el Ejecutivo birmano suspendió la actividad de Médicos Sin Fronteras, señalando que esta organización estaba actuando de manera sesgada a favor de la población rohingya. El relator especial de Naciones Unidas para el país hizo un llamamiento a que se llevara a cabo una investigación independiente criticando la falta de credibilidad de la investigación gubernamental. En marzo dio comienzo la elaboración del controvertido censo llevado a cabo por el Gobierno con el apoyo de la agencia de Naciones Unidas UNFPA, duramente criticado por organizaciones internacionales como International Crisis Group, Transnational Institute o Human Rights Watch, que señalaron que podría contribuir a exacerbar la tensión y la violencia. De hecho, fruto de su elaboración se produjeron algunos brotes de

violencia en el estado Kachín y en el estado de Rakhine. La población rohingya no fue finalmente autorizada a identificarse como tal en el censo, y gran parte de ella fue excluida del recuento censal. Esto se produjo a pesar de los compromisos iniciales del Gobierno con que toda la población de Myanmar pudiera identificar su etnicidad de manera libre. Los grupos políticos rakhines, e incluso de la propia comunidad rakhine (mayoritaria numéricamente en el estado), llevaron a cabo una fuerte presión sobre el proceso de elaboración del censo y tuvieron lugar manifestaciones de protesta, una campaña de boicot a la elaboración del censo, y finalmente ataques violentos contra organizaciones humanitarias internacionales, que causaron la muerte de una persona y la evacuación de 300 trabajadores humanitarios.²⁷ En septiembre el Gobierno publicó algunos resultados preliminares del censo, pero señaló que los datos relativos a la etnicidad no se harían públicos hasta 2016, después de las elecciones previstas para finales del año 2015. Durante el año se produjeron también otros brotes de violencia, como el que tuvo lugar en julio en Mandalay cuando dos personas, una budista y otra musulmana, murieron después de que se propagara un rumor sobre la violación de una mujer budista por un hombre musulmán. Además, 14 personas resultaron heridas y los disturbios se repitieron durante varios días con la quema de diferentes edificios –entre ellos un orfanato– fundamentalmente en las zonas de Mandalay habitadas por población de confesión musulmana. Como consecuencia de los disturbios y la violencia se impuso el toque de queda que estuvo vigente hasta el mes de agosto, y además se arrestó a unas 200 personas.

En el ámbito político, continuaron las reformas en el país, aunque diferentes analistas advirtieron del estancamiento que se estaba produciendo en el proceso de democratización. Entre las cuestiones políticas más remarcables cabe destacar la negativa del Gobierno a reformar la Constitución para permitir la concurrencia de la líder opositora Aung San Suu Kyi como candidata presidencial a las próximas elecciones, ya que la Carta Magna veta a cualquier persona cuyo cónyuge o descendientes sean extranjeros a ocupar este cargo, y sus hijos son de nacionalidad británica. En octubre el Gobierno mantuvo un encuentro con representantes militares, parlamentarios y representantes de los partidos políticos para discutir sobre la transición, después de que Aung San Suu Kyi hubiera hecho un llamamiento a que se celebraran negociaciones. El principal partido de la oposición, la NLD, liderado por Aung San Suu Kyi, afirmó que había recogido cinco millones de firmas para promover una reforma de la Constitución con el objetivo de reducir los enormes poderes que actualmente detenta el Ejército en la política birmana y permitir que su líder pueda ser candidata en los próximos comicios.

Tailandia	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social en el país. Así, un partido leal a Thaksin Shinawatra ganó los comicios de diciembre de 2007. Sin embargo, durante el año 2008 los numerosos actos de violencia y las movilizaciones masivas en contra del Gobierno convocadas por la Alianza Popular para la Democracias (movimiento conocido como “camisas amarillas”) provocaron la renuncia de dos primeros ministros y la llegada al poder en diciembre de 2008 de Abhisit Vejjajiva, opositor a Thaksin Shinawatra. Desde entonces, se producen de forma periódica manifestaciones multitudinarias del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Tras varios meses de crisis política y protestas masivas, en las que una treintena de personas habían muerto y más de 700 habían resultado heridas, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 22 de mayo, dos días después de haber decretado la ley marcial en todo el país. En los meses previos al golpe, la crisis política en el país se había agudizado por el incremento de las protestas en todo el país, por la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las elecciones anticipadas celebradas el 2 de febrero y por la dimisión de la primera ministra Yingluck Shinawatra. En cuanto a las protestas, cabe destacar la campaña de la oposición de bloquear y paralizar Bangkok, que se extendió desde mediados de enero y hasta finales de febrero. Desde el inicio de las protestas masivas a finales de 2013 hasta ese momento, más de 20 personas habían muerto y más de 720 habían resultado heridas. A finales de enero el Gobierno impuso el estado de emergencia en Bangkok y en varias provincias colindantes y durante el mes de febrero se incrementaron sustancialmente los niveles de violencia, bien sea por enfrentamientos entre partidarios y detractores de las elecciones, por choques entre manifestantes

27. International Crisis Group, *Counting the Costs: Myanmar's Problematic Census*, International Crisis Group, Asia Briefing no. 144, Yangon/Bruselas, 15 de mayo de 2014, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/b144-counting-the-costs-myanmar-s-problematic-census.aspx>.

y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bien por ataques contra líderes o protestas de la oposición. Estos hechos fueron condenados tanto por el Gobierno, que se comprometió a perseguir a los responsables, como por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ofreció sus oficios para tratar de solventar la actual situación. Las protestas remitieron sensiblemente a principios de marzo por la finalización de la campaña para paralizar la capital y por el consiguiente levantamiento del estado de excepción decretado en el mes de enero. En cuanto a los comicios, la Corte Constitucional anuló las elecciones anticipadas celebradas el 2 de febrero por no haberse podido celebrar en todo el país simultáneamente, ya que las protestas de la oposición impidieron total o parcialmente la votación en aproximadamente un 10% de las mesas de todo el país, en unas 18 provincias. Buena parte de la oposición había boicoteado los comicios y la Comisión Electoral había llamado reiteradamente a posponerlos por la situación de tensión política y social, pero la primera ministra, Yingluck Shinawatra, decidió llevar a cabo las elecciones en la fecha prevista como mecanismo para poner fin a las protestas. El fallo del Tribunal Constitucional no solamente impidió la conformación de un nuevo Gobierno electo y perpetuó la interinidad del Ejecutivo, sino que se reanudaron nuevamente las protestas, tanto por parte de la oposición como por parte de los “camisas rojas”, que movilizaron a miles de personas en el norte del país. A finales de abril, tras varias reuniones con el Gobierno, la Comisión Electoral anunció que la celebración de elecciones anuladas se llevaría a cabo en el mes de julio, pero la oposición, tanto el Partido Demócrata como el Consejo Popular para la Reforma Democrática, se negó a participar en unos nuevos comicios y siguió exigiendo la conformación de un consejo popular no electo que acometiera determinadas reformas estructurales antes de la convocatoria de nuevas elecciones. El tercer factor que precipitó los acontecimientos en Tailandia fue la dimisión a principios de mayo de Yingluck Shinawatra (y de otros nueve miembros del gobierno interino) tras ser sentenciada por abuso de poder por parte del Tribunal Constitucional. A mediados de febrero, Yingluck Shinawatra había sido acusada por parte de la Comisión Nacional de Anticorrupción de malversación de fondos y abuso de poder en la concesión de subsidios al sector del arroz. Este hecho propició de nuevo un incremento de las protestas y de la polarización social, como así lo denotan la formación de milicias progubernamentales por parte de los “camisas rojas” (miles de voluntarios formaron parte del entrenamiento en artes marciales en la provincia norteña de Nakorn Ratchasima y su líder advirtió que la población tailandesa dispone de 10 millones de armas, en una clara amenaza a las actuaciones y objetivos de la oposición), así como la formación de grupos pro monárquicos para identificar a personas que presuntamente hubieran cometido crímenes de lesa majestad.

En este contexto, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 22 de mayo, dos días después de haber decretado la ley marcial en todo el país, suspendieron la Constitución y arrestaron a cientos de personas, incluida Yingluck Shinawatra. El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prayuth Chan-ocha, declaró públicamente que el

Rey le había reconocido como jefe del Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO), nombre oficial de la Junta Militar, y estimó necesitar unos 15 meses para llevar a cabo los procesos de reforma y reconciliación necesarios para celebrar unas elecciones generales. **En las semanas posteriores al golpe, y bajo el amparo del toque de queda vigente hasta mediados de junio, se incrementó notablemente la represión social y política, con la detención de cientos de personas, la prohibición de manifestaciones públicas o el cierre de cientos de emisoras de radio o canales de televisión.** La ex primera ministra Yingluck Shinawatra, que inicialmente había sido detenida, fue puesta en libertad bajo custodia militar. Los comúnmente denominados como “camisas rojas” fueron uno de los colectivos más afectados por la mencionada represión. La Organización Internacional de Migraciones estimó a mediados de junio que unas 200.000 personas camboyanas habrían regresado a su país de origen tras propagarse algunas informaciones que apuntaban a una posible campaña de las nuevas autoridades militares contra la inmigración indocumentada. Aunque la represión fue mayor en las semanas inmediatamente posteriores al golpe, durante todo el año prosiguieron las denuncias por violaciones de los derechos humanos, por la aplicación de la tortura contra determinadas personas y por la represión y persecución contra colectivos opositores y determinados periodistas y académicos. También cabe destacar la suspensión de las elecciones locales a mediados de julio o el impulso de medidas para controlar y censurar a la prensa. A finales de diciembre, por ejemplo, el Gobierno anunció el bloqueo a contenidos críticos con el Gobierno o la Monarquía (en páginas web o redes sociales), así como el cierre de cientos de páginas web. Por su parte, el presidente del partido de Yingluck Shinawatra, el Pheu Thai, anunció desde el exilio la formación de Tailandeses Libres para los Derechos Humanos y la Democracia con el objetivo de organizar y coordinar la oposición al golpe y a la Junta Militar. A pesar de que las nuevas autoridades tailandesas declararon que países como China, Vietnam o Myanmar habían dado su apoyo explícito al CNPO, en términos generales la comunidad internacional condenó el golpe de estado y la UE o países como EEUU impusieron sanciones políticas, económicas y militares e instaron a Bangkok a retomar la senda democrática. En este sentido, el primer ministro vinculó la convocatoria de una asamblea constituyente y la celebración de unas elecciones legislativas al cumplimiento de unas determinadas condiciones políticas y sociales necesarias, y algunos analistas consideraron que ambas cuestiones podrían llevarse a cabo en 2016.

Como consecuencia de la aplicación de la ley marcial, no se produjeron manifestaciones significativas durante la segunda mitad del año, pero el CNPO tuvo que hacer frente a algunas acciones clandestinas de rechazo a la Junta Militar, a numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos y a dos aspectos que elevaron la tensión. En primer lugar, a finales de septiembre el colectivo de productores de caucho anunció su intención de llevar a cabo protestas en todo el país para denunciar la falta de apoyo del Gobierno ante la disminución de

precios que ha experimentado el caucho en los últimos años. Cabe señalar que las movilizaciones masivas de dicho colectivo contra el anterior Gobierno de Yingluck Shinawatra fueron uno de los factores que contribuyeron al debilitamiento del anterior Ejecutivo, a la creciente polarización social y a la intervención de las Fuerzas Armadas. En aquella ocasión, los productores de caucho acusaban al Gobierno de discriminación frente a la política de subsidios a los productores de arroz, que territorialmente estaban concentrados en el norte del país, uno de los bastiones del partido de Shinawatra. En segundo lugar, en noviembre, la nueva Asamblea Legislativa aprobó impulsar una moción para imputar a Yingluck Shinawatra y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, tal y como había sugerido la Comisión Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que en el mes de septiembre el Fiscal General del Estado, contra la opinión de la Comisión Nacional Anticorrupción, rechazó el procesamiento de la ex primera ministra por presuntas irregularidades en su política de subvenciones al sector del arroz. Esta decisión de la Asamblea Legislativa provocó las amenazas por parte del Consejo Popular para la Reforma Democrática y de los “camisas rojas” de reanudar movilizaciones masivas a favor y en contra respectivamente de los mencionados procesamientos.

En Tailandia, tras varios meses de crisis política y protestas masivas en las que una treintena de personas habían muerto y más de 700 habían resultado heridas, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 22 de mayo

A pesar de que no se produjeron enfrentamientos de alta intensidad en la región fronteriza en disputa y de que ambos Gobiernos mantuvieron relaciones cordiales y cooperativas, incluso después del golpe de Estado en Tailandia en mayo, **se registraron algunos episodios de violencia durante el año y la tensión militar y política se incrementó significativamente en diciembre.** Aunque no trascendió la cifra de víctimas por enfrentamientos en la frontera, a mediados de diciembre el Gobierno camboyano señaló que durante el 2014 cinco personas de nacionalidad camboyana habían muerto por disparos de las Fuerzas Armadas tailandesas. A pesar de las buenas relaciones que mantenían el Ejecutivo camboyano y el Gobierno liderado por Yingluck Shinawatra, el Gobierno de Hun Sen también mantuvo unas relaciones fluidas con la nueva junta militar tailandesa tras el golpe de Estado del mes de mayo.

De hecho, en el mes de julio el ministro de Defensa camboyano viajó a Bangkok y se reunió con el líder de la junta y primer ministro de Tailandia, el general Prayuth Chan-ocha, para abordar, entre otras cuestiones, la disputa fronteriza. En este sentido, el Gobierno camboyano se mostró comprensivo sobre la falta de avances en la implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia y sobre el proceso de demarcación fronteriza por la situación política que vivía Tailandia antes y después del golpe de Estado. A pesar de esas buenas relaciones bilaterales se produjo, a finales de septiembre, un intercambio de fuego entre las Fuerzas Armadas de Tailandia y Camboya en la provincia de Preah Vihear, precisamente en la que se ubica el templo y la región en disputa, en la que dos soldados resultaron heridos. Sin embargo, ambos Gobiernos señalaron que el intercambio de artillería había respondido a una confusión y que se había recuperado la normalidad y la calma tras el incidente armado, el primero tras el golpe de Estado en Tailandia. El mismo ministro de Defensa camboyano se dirigió personalmente a las tropas desplegadas en la región fronteriza para transmitirles que no había ningún problema con las nuevas autoridades tailandesas.

Sin embargo, en diciembre se produjeron dos episodios que elevaron nuevamente la tensión. A mediados de mes, el Gobierno de Camboya envió una carta a Tailandia protestando enérgicamente contra los disparos por parte de las Fuerzas Armadas tailandesas contra cinco mujeres civiles en la frontera, y que provocaron la muerte de una de ellas. Ambos Gobiernos decidieron crear un panel conjunto para investigar los hechos, pero el primer ministro tailandés negó que sus tropas hubieran disparado contra población civil y en cambio señaló que el incidente armado se había producido entre soldados tailandeses y redes criminales de tala de árboles. Pocos días después, durante la reunión anual del Comité General de Frontera, ambos Gobiernos firmaron un acuerdo para mantener la paz, mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en la región fronteriza e incrementar su cooperación para luchar conjuntamente contra el terrorismo, el tráfico

Tailandia – Camboya	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	Tailandia, Camboya

Síntesis:

El origen de la disputa entre ambos países es la soberanía de una porción de tierra de aproximadamente 4,6 km² que rodea al templo budista de Preah Vihear, del siglo XI, situado en la frontera entre Tailandia y Camboya. Tras varios siglos de litigio, en 1962 el Tribunal Internacional de Justicia declaró que el templo pertenecía a Camboya, pero no se pronunció respecto al territorio anexo al templo. Sin embargo, el mejor acceso al templo desde la parte tailandesa, así como el desacuerdo de Tailandia acerca de los mapas históricos que fundamentaron la resolución por parte del Tribunal Internacional de Justicia, han alimentado las reivindicaciones por parte de Tailandia en las últimas décadas. La región fronteriza en disputa concentra un alto número de tropas desplegadas y de minas terrestres. Tras alcanzarse el momento de mayor tensión militar en la primera mitad de 2010, las relaciones bilaterales mejoraron sustancialmente tras la llegada al poder en julio de 2010 de Yingluck Shinawatra, que mantenía una relación política mucho más fluida con el primer ministro camboyano, Hun Sen. En este contexto, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden que obligaba a las partes a retirar sus tropas de la región en disputa y a permitir el despliegue de observadores internacionales que supervisarán el cese de hostilidades. Desde entonces, no se han producido enfrentamientos significativos y ambos Gobiernos han reiterado su voluntad de resolver la disputa a través de métodos políticos y pacíficos.

de personas y drogas y la explotación forestal ilegal. A pesar de este acuerdo, a finales de diciembre volvió a incrementarse la tensión después de que un medio de comunicación revelara que el Ejército camboyano estaba desplegando maquinaria pesada y efectivos militares adicionales en la frontera, lo que a su vez motivó una carta de protesta, el cierre de un paso fronterizo y el envío de refuerzos militares a la frontera por parte de las autoridades tailandesas. Fuentes militares camboyanas afirmaron que algunos soldados resultaron heridos después de que tropas tailandesas dispararan en la zona en disputa, aunque otras fuentes niegan estos hechos. Según Tailandia, el intento por parte de Camboya de llevar a cabo construcciones (un hotel y un casino) viola claramente un acuerdo según el cual ambas partes se comprometen a no desarrollar unilateralmente zonas en disputa. Por su parte, Camboya negó tanto el despliegue de tropas adicionales como su intención de construir un hotel y un casino, y además señaló que la maquinaria pesada desplegada en la región era solamente para construir una carretera que, según Camboya, está suficientemente lejos de la zona en disputa como para ser considerado una violación del mencionado acuerdo bilateral. A su vez, Phnom Penh acusó a Tailandia de construir edificios solamente a uno o dos metros de la zona en disputa pendiente de demarcación.

Moldova y Transdniestria pusieron a sus fuerzas en alerta en un contexto de incremento de la tensión regional ante la crisis en Ucrania

ciado en Ucrania en 2014, país fronterizo con Transdniestria, aumentó las alarmas por los posibles impactos en Moldova y su conflicto no resuelto.

Se incrementó la tensión durante el año, en gran parte a raíz del temor sobre posibles efectos de la crisis en Ucrania y del agravamiento de la pugna internacional entre las instituciones euroatlánticas, a las que mira el

Gobierno moldavo, y Rusia, con la que se alinea la región de Transdniestria.

Se incrementaron los posicionamientos políticos favorables a Rusia por parte de sectores de Transdniestria. Así, el presidente del Parlamento de la región independiente de facto, Mikhail Burla, envió una petición a Rusia en marzo para incorporar a Transdniestria. También la portavoz del Parlamento Irina Kubanskikh se pronunció en el mismo sentido. No hubo pasos hacia la incorporación por parte de Rusia, si bien firmaron varios acuerdos de cooperación en julio, que estrechaban aún más las relaciones mutuas, incluyendo en el ámbito económico, comercial, de transporte y agricultura. Además, el pacto permitía el incremento de la presencia rusa en Transdniestria. Asimismo, el representante especial ruso para Transdniestria, Dmitry Rogozin, afirmó que Rusia garantizaría la seguridad de la región. Rogozin visitó Transdniestria en mayo, viaje que generó tensiones con Moldova. El Gobierno moldavo, por su parte, advirtió a Rusia contra cualquier paso en la dirección de integrar a Transdniestria. En el marco de la crisis ucraniana, la OTAN mostró preocupación durante el año por el fuerte despliegue de tropas rusas junto a la frontera este de Ucrania, que –según la OTAN– serían suficientes para invadir Transdniestria. Así, **el Gobierno moldavo puso a sus fuerzas fronterizas en alerta en mayo, alegando el deterioro de la situación en Ucrania. También las autoridades de Transdniestria pusieron a sus fuerzas en alerta**, mientras Rusia denunció bloqueo de Moldova y Ucrania a Rusia en el acceso a sus tropas presentes en Transdniestria –tropas con mandato de mantenimiento de la paz, desde el fin del conflicto armado en los años noventa. Por otra parte, la firma en junio entre Moldova y la UE de un acuerdo de asociación política fue otro elemento presente en la tensión, con críticas de Rusia y Transdniestria al pacto y denuncias de presiones previas de Rusia para que no se firmase. Tras la rúbrica, Rusia impuso sanciones a Moldova, incluyendo a la importación de diversos productos. Pese al incremento de la tensión, continuó activo el proceso de paz, bajo mediación de la OSCE, aunque durante el año se retrasaron varias rondas negociadoras. A su vez, Moldova celebró elecciones en noviembre. Los partidos pro-UE consiguieron retener el poder y renovar el gobierno de coalición, si bien el pro-ruso Partido de los Socialistas –que en marzo inició una campaña para la celebración de un referéndum para que el país se una al proyecto de unión aduanera que promueve Rusia– fueron la formación con más votos (20,51%), por delante del pro-UE Partido Liberal Democrático (20,16%) y de los pro-rusos Partido Comunista (17,48%).

2.3.4. Europa

Europa Oriental

Moldova (Transdniestria)

Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdniestria, Rusia
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

Transdniestria, un territorio de 4,000 km² y medio millón de habitantes, de mayoría de población eslava, legalmente bajo soberanía de Moldova y en la práctica independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transdniestria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía. La región se declaró independiente de Moldova, que a su vez proclamó su independencia en 1991. Hubo escalada de incidentes que derivaron en un conflicto armado en 1992. Se alcanzó un acuerdo de alto el fuego ese mismo año, que puso fin a la guerra de varios meses. Las tropas rusas presentes en Transdniestria desde la etapa soviética pasaron a ser tropas de mantenimiento de la paz, mientras Moldova reclamó en años sucesivos su salida. Dese el fin de la guerra las partes negocian de manera intermitente para resolver el conflicto. El conflicto armado ini-

Rusia y Cáucaso

Azerbaiyán	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno de Azerbaiyán, oposición social y política

Síntesis:

La ex república soviética de Azerbaiyán obtuvo su independencia en 1991. Tras ésta, su riqueza energética (petróleo y gas) y su ubicación estratégica en el sur del Cáucaso (región que ha sido encrucijada de antiguos imperios y nuevas potencias y con una función histórica de fuente y corredor de materias primas) le han convertido en un país clave en las políticas exteriores de seguridad energética y en las rivalidades geoestratégicas internacionales. No obstante, el boom económico asociado al petróleo y gas no ha supuesto mejoras significativas en el bienestar global de su población. Ilham Aliyev preside Azerbaiyán desde 2003, cuando sucedió a su padre, Heydar Aliyev, líder soviético transformado en dirigente nacionalista azerí, que gobernó el Azerbaiyán independiente entre 1993 y 2003, entre críticas por su autoritarismo. La etapa de Ilham Aliyev también ha estado caracterizada por prácticas de represión política, corrupción y vulneración de los derechos humanos, incluyendo presión sobre los medios de comunicación independientes. La inestabilidad política, la represión policial de manifestaciones antigubernamentales y las acusaciones de fraude electoral han acompañado su etapa postsoviética en diversos momentos.

Se agravó la situación con una ola de detenciones y represión de las autoridades contra personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el periodismo, la oposición política y activismo civil y de construcción de vínculos con la sociedad civil armenia. Numerosas figuras reconocidas fueron detenidas, mantenidas en prisión preventiva o condenadas a penas de cárcel, con cargos que incluían vandalismo, espionaje, evasión de impuestos, negocios ilegales, posesión de armas, entre muchos otros, y que fueron considerados presos políticos por ONG locales e internacionales. Entre las muchas personalidades, la activista de derechos humanos Leyla Yunus, involucrada, entre otros proyectos, en iniciativas de diplomacia ciudadana entre Azerbaiyán, Armenia y Nagorno-Karabaj, fue detenida en julio junto a su marido y activista Arif Yunus. La detención preventiva de Leyla Yunus se extendió en octubre hasta febrero y numerosas organizaciones expresaron alerta por su deteriorado estado de salud. Otras figuras detenidas o perseguidas incluyeron el líder de la rama juvenil del partido opositor Musavay; el activista opositor Omar Mamedov; el fundador del Club de Derechos Humanos, Rasul Jafarov; el defensor de derechos humanos Intigam Aliyev; el activista político Murad Adilov; el periodista Seymour Hazi; la periodista Khadija Ismayilova; el activista de derechos humanos Elcin Namazov, entre muchas otras figuras destacadas. También hubo ataques contra activistas, como el sufrido en agosto por Il-

Se agravó la persecución de las autoridades contra defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y opositores políticos en Azerbaiyán

gar Nasibov, defensor de derechos humanos. Entre octubre y diciembre, se produjeron manifestaciones de varios miles de personas en protesta contra el régimen del presidente Ilham Aliyev y en demanda de la liberación de las personas presas políticas. Diversos organismos internacionales, como el Consejo de Europa o la OSCE expresaron preocupación por el deterioro de la situación interna en materia de derechos humanos e instaron a las autoridades a poner fin a la persecución de los activistas, así como a iniciar un diálogo entre autoridades, actores políticos y sociedad civil. En la manifestación del 12 de octubre, el opositor Consejo Nacional de las Fuerzas Democráticas reclamó la dimisión del Gobierno. Un decreto presidencial de finales de diciembre puso en libertad a más de 80 personas, de las cuales algunas eran consideradas presas políticas por organizaciones de derechos humanos, que cifraban en cerca de un centenar los prisioneros políticos en el país.

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)

Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente *de facto*– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

El conflicto no resuelto de Nagorno-Karabaj afrontó varias escaladas durante el año, evidenciando la fragilidad crónica del contexto de alto el fuego dada la elevada militarización. Hubo incidentes a lo largo de todo el año y, como en periodos anteriores, las fuerzas armenias (de Armenia y de Nagorno-Karabaj) y las azerbaiyanas se acusaron de centenares de violaciones del alto el fuego. Hubo un aumento de incidentes en diversos momentos, como en enero, con varias víctimas mortales ese mes, denuncias de incursiones militares o de intentos de entrada de la parte contraria en las zonas bajo control respectivo, lo que llevó al Grupo de Minsk de la OSCE a expresar gran preocupación sobre la situación en la región y advertir de los riesgos. Los incidentes durante el año alcanzaron también a civiles,

que murieron o resultaron heridos, como dos mujeres y una menor azerbaiyanas, heridas por fuego armenio en el segundo trimestre en el distrito de Tovuz, junto a Nagorno-Karabaj. Entre julio y agosto hubo una nueva escalada, con un nuevo cúmulo de incidentes. Así, entre otros hechos, una quincena de soldados azerbaiyanos y otros cinco armenios murieron por violaciones del alto el fuego en los primeros días de agosto, aunque algunas fuentes señalaron que el balance podría ser más elevado que el admitido públicamente. **Entre enero y agosto murieron una treintena de personas, cifras que solían corresponder al balance total anual en periodos anteriores.** Además, las autoridades de Nagorno-Karabaj denunciaron en julio acciones de “saboteadores” que causaron la muerte de un militar armenio y heridas a la esposa de otro así como el secuestro y asesinato de un adolescente armenio por comandos azerbaiyanos. También un alcalde armenio resultó herido a causa de la explosión de una mina al paso de su vehículo por Nagorno-Karabaj. Asimismo, un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja fue tiroteado mientras asistía a población local en la zona fronteriza. Varios civiles se vieron afectados por explosiones de minas durante el resto del año. De nuevo a finales de año hubo otro incremento de tensión, a causa del **derribo por Azerbaiyán de un helicóptero militar de Nagorno-Karabaj y la muerte de sus tres ocupantes.** Azerbaiyán alegó que el vehículo había intentado atacar posiciones azerbaiyanas, por lo que respondieron en defensa, mientras que Armenia calificó de provocación sin precedentes el incidente y rechazó que hubiera habido intento de ataque previo de Nagorno-Karabaj. Pese al incremento de tensiones durante el año, el proceso de diálogo siguió activo, con diversas reuniones durante el año, incluyendo cumbres presidenciales, si bien no se produjeron avances.²⁸

Se incrementaron las violaciones del alto el fuego entre las fuerzas de Armenia y Nagorno-Karabaj y las de Azerbaiyán, con varias decenas de víctimas mortales durante el año

Georgia (Abjasia)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia

Síntesis:

La precaria situación de seguridad en la región responde a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que se enfrentaron en conflicto armado (1992-1994) los líderes locales abjasios, apoyados por Rusia, con el Gobierno georgiano, defendiendo, respectivamente, la independencia de la región y la integridad territorial del país, en el contexto de descomposición de la URSS. Tras el fin de esa guerra, que desplazó a unos 200.000 georgianos, el territorio de Abjasia ha funcionado como un Estado de facto. Pese a la existencia

de un acuerdo de alto el fuego, un proceso negociador y presencia internacional en esos años (observadores de la ONU y fuerzas de paz rusas), la tensión se mantuvo, alimentada por las tensiones geoestratégicas y de balance de poderes en el Cáucaso entre Georgia y Rusia. Éstas escalaron hasta devenir en una guerra internacional en agosto de 2008, iniciada en Osetia del Sur, tras la cual las fuerzas abjasias consolidaron su control sobre Abjasia y vieron formalmente reconocida su independencia por parte de Rusia. Los incidentes frecuentes de seguridad, el estatus incierto del territorio, el papel de Rusia y el impacto acumulado de ambas guerras son fuente continua de tensión.

Fue un año convulso para Abjasia, con una crisis política y social interna que derivó en protestas y en cambio de gobierno, el cual a su vez profundizó aún más las relaciones con Rusia a través de un nuevo tratado bilateral considerado por Georgia como una anexión. Así, durante el año tuvieron relevancia tanto dinámicas internas de Abjasia como la disputa crónica entre Georgia y Abjasia por el estatus de esta última. La situación de seguridad militar vinculada al conflicto no resuelto se mantuvo mayoritariamente en calma y estable, en línea con periodos anteriores. Así lo destacaron también los co-mediadores del proceso internacional de diálogo. Aun así, se produjeron algunos incidentes, en parte vinculados a

las medidas de seguridad adoptadas por Rusia en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero en Sochi (sur). En ese sentido, Georgia expresó preocupación por lo que consideró un desplazamiento de la zona de frontera con Rusia 11 kilómetros al interior de Abjasia. El Gobierno georgiano también mostró preocupación por vuelos de reconocimiento ruso en zona área de Georgia, que calificó de provocaciones y que cifró en un millar desde el fin de la guerra con Rusia en 2008. Asimismo, la construcción de vallas y otros obstáculos a lo largo de la línea de frontera administrativa por parte de fuerzas rusas y abjasias continuó siendo objeto de preocupación, por el impacto que tiene sobre la población de ambos lados de la frontera en sus movimientos.

El segundo eje de tensión, el vinculado a la dimensión interna en Abjasia, cobró relevancia por la crisis política y social desencadenada en el segundo trimestre. La entonces **coalición opositora Consejo de Coordinación presentó en abril una serie de demandas que incluían la exigencia de dimisión del primer ministro y su gabinete,** cambios constitucionales para reducir los poderes presidenciales y, finalmente, también la petición de renuncia del presidente, Alexander Ankvab. La plataforma había sido creada un año antes como reacción crítica a las políticas de concesión de documentación abjasia a la población georgiana de Abjasia –críticas que alegaban que la minoría georgiana incumplía el requisito

29. Véase el resumen sobre Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

impuesto por Abjasia de renunciar a su pasaporte georgiano para acceder a la documentación abjasia. El grupo amplió en 2014 su agenda a cuestiones de política general interna y de gobernanza. La presión de la plataforma fue aumentando y en mayo sus seguidores **tomaron la Presidencia, provocando la huida de Ankvab, quien denunció intento de golpe de Estado.** Se sucedieron protestas anti y pro-Ankvab, Rusia desplegó en la región a su responsable de relaciones con Abjasia y Osetia del Sur, Vladislav Surkov. El Consejo de Coordinación endureció sus exigencias. Finalmente, el Parlamento local aprobó una moción de censura contra Ankvab –sin la presencia de los diputados pro-Ankvab– y le declaró incapacitado para seguir en sus funciones. Ankvab acabó dimitiendo en los primeros días de julio pero denunció un golpe de Estado. También abandonó su cargo el primer ministro y diputados leales fueron expulsados o dimitieron. Rusia calificó de positiva la salida de la crisis.

Rusia y Abjasia firmaron un acuerdo que aumenta sus relaciones en materia de defensa, comercio y aduanas, entre otros ámbitos, y Georgia lo denunció como una anexión de la región por Rusia, todo ello en un año con una crisis política interna en Abjasia

Tras las elecciones presidenciales anticipadas de agosto, en que ganó Raul Khajimba –uno de los líderes de las protestas del Consejo de Coordinación– con un 50,57% de los votos (70% de participación), en comicios sin reconocimiento internacional, se dio paso a una profundización de las relaciones con Rusia y nuevas incertezas para la minoría georgiana de Abjasia. Así, **las autoridades en funciones habían retirado los pasaportes abjasios a 22.787 ciudadanos de los distritos de Gali, Tkvarcheli y Ochamchire, que aglutinan a la minoría georgiana, y se les retiró también del registro electoral.** Las medidas coincidían en el tiempo con intentos de las delegaciones abjasia, osetia y rusa de sacar de la agenda negociadora de paz la cuestión de la población desplazada y refugiada –que en relación a Abjasia, son en su mayoría civiles georgianos originarios de Abjasia desplazados por la guerra. No obstante, en la ronda negociadora de diciembre sí se mantuvo el tema.²⁹ El mayor acercamiento a Rusia reclamado por las nuevas autoridades y favorecido por el Gobierno ruso se materializó en la firma a finales de noviembre de **un nuevo tratado entre Rusia y Abjasia, que profundiza sustantivamente las relaciones entre ambas,** ya estrechas desde el reconocimiento formal y la firma de tratados en diversos ámbitos en 2008 tras la guerra ruso-georgiana. La propuesta de borrador del tratado generó tensión y críticas internas en Abjasia, por la supuesta pérdida de soberanía. Al tratado final se incorporaron diversas propuestas abjasias si bien no se disiparon todas las preocupaciones de parte de la población. El texto incluía elementos como la creación de un espacio de defensa y seguridad común, cláusulas de defensa colectiva y creación de un grupo de fuerzas combinadas y abordaba múltiples ámbitos como el comercio, aduanas, ciudadanía, seguridad y defensa. El

Gobierno georgiano criticó fuertemente la medida, que calificó como un paso hacia la anexión “de facto” de Abjasia por Rusia. Por su parte, Rusia señaló que el acuerdo no ponía en riesgo el proceso de diálogo de Ginebra, que reúne a Georgia, Abjasia, Osetia del Sur y Rusia con la mediación de la ONU, OSCE y UE. Así, las relaciones entre Georgia y Rusia continuaron marcadas por el antagonismo, en parte acrecentado por la firma de dicho tratado y mayores recelos de los países pro-UE, y pro-OTAN hacia Rusia en el marco de la crisis ucraniana. Georgia firmó un acuerdo de asociación con la UE y la OTAN concedió a Georgia un “paquete sustantivo” durante la cumbre de la OTAN de septiembre, que incluye la creación de un centro de entrenamiento de la OTAN en Georgia, ejercicios ocasionales de la alianza en suelo georgiano y apoyo al desarrollo de capacidades de defensa, entre otros elementos. El anuncio fue muy criticado por Rusia y por las regiones independentistas.

Georgia (Osetia del Sur)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia

Síntesis:

La tensión en la región está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que las fuerzas osetias y Georgia se enfrentaron en una guerra entre 1991 y 1992. Desde entonces, las partes mantuvieron sus posiciones respectivas de defensa de independencia o unificación con Rusia y de la integridad territorial de Georgia, sin lograr resolver por la vía de la negociación el *impasse* de la región, independiente *de facto*. A su vez, el conflicto interno se ha visto alimentado por las tensiones entre Georgia y Rusia –vinculadas a cuestiones de geoestrategia y balance de poderes en la región del sur del Cáucaso–, que en 2008 escalaron hasta derivar en una breve guerra iniciada en Osetia del Sur y extendida después a Abjasia y zonas bajo control georgiano. Tras esa última guerra y el desplazamiento forzado de la mayoría de población georgiana de Osetia del Sur, la posición osetia quedó reforzada. Rusia reconoció su independencia y mantuvo presencia militar en la región. La cuestión de los desplazados de los años noventa y de la segunda guerra, el estatus del territorio y las violaciones periódicas del alto el fuego siguen siendo fuente de tensión.

La situación en la región se mantuvo mayoritariamente estable y en calma, con algunos incidentes de baja intensidad, si bien las relaciones entre Georgia y Osetia del Sur se deterioraron a finales de año con el anuncio de una próxima profundización de las relaciones entre

30. Véase el resumen sobre Georgia (Abjasia) en el capítulo 3 (Procesos de paz).

la región y Rusia. Los incidentes durante 2014 abarcaron diversas detenciones de ciudadanos georgianos, como tres periodistas de origen georgiano detenidos por tropas rusas en Osetia del Sur en abril, liberados posteriormente; o una veintena de residentes georgianos detenidos en diversos episodios en mayo mientras llevaban a cabo tareas de recolección, acusados de cruce ilegal de frontera. En ese sentido, cuestiones como el acceso a campos agrícolas o el suministro de energía a localidades a ambos lados de la frontera estuvieron en la agenda de las reuniones del llamado Mecanismo de Prevención y Resolución de Incidentes, que reúne periódicamente a todas las partes del conflicto en torno a Osetia del Sur y que forma parte del proceso de paz. Entre los incidentes, también hubo denuncias por parte de Georgia de vuelos de reconocimiento ruso sobre su espacio aéreo, incluyendo denuncias del vuelo de un helicóptero militar ruso sobre puestos policiales georgianos en 19 localidades en torno a la línea fronteriza con Osetia del Sur. El Gobierno georgiano también denunció la construcción de vallas y otros obstáculos en tramos de la frontera, con impacto sobre las condiciones de vida de la población de ambos lados, acciones sobre las que los co-mediadores internacionales también expresaron preocupación.

En clave interna, el presidente osetio, Leonid Tibilov, destituyó a finales de enero al Gobierno osetio, alegando ineficiencia. **Las elecciones parlamentarias anticipadas de principios de junio llevaron al Gobierno al opositor Osetia Unida, partido que ya en enero había reclamado un referéndum sobre la unión a Rusia.** Su líder, Anatoly Bibilov, fue nombrado presidente del Parlamento. A finales de año Osetia del Sur y Rusia anunciaron que preparaban un nuevo tratado de alianza, para profundizar en sus relaciones. El anuncio se producía poco después de la firma en noviembre de un tratado de alianza e integración entre Rusia y Abjasia, y en un contexto de antagonismo crónico entre Rusia y Georgia, acrecentado por la crisis continental e internacional entre Occidente y Rusia sobre Ucrania. Así, mientras Abjasia y Osetia del Sur optaron por reforzar sus relaciones con Rusia, incluyendo en materia de defensa y seguridad, Georgia firmó un acuerdo de asociación con la UE y la OTAN aprobó un paquete de medidas para Georgia, que le acerca a la organización, y que incluye la creación de un centro de entrenamiento de la OTAN en Georgia, entre otros aspectos. Rusia y Osetia del Sur contemplaban firmar el nuevo tratado a comienzos de 2015 y el borrador de propuesta, según información en prensa, abarcaba la integración de diversas estructuras osetias –ej. de defensa, seguridad y aduanas, entre otras– bajo el paraguas de ministerios y agencias rusas. Asimismo, el presidente osetio, Leonid Tibilov, afirmó en diciembre haber planteado a Moscú que considere la posibilidad de una adhesión total de Osetia del Sur a Rusia. Pese a las difíciles relaciones entre Georgia, Osetia del Sur y Rusia, el proceso de paz –en el que participa también Abjasia– se mantuvo activo, con diversas rondas durante el año, bajo mediación de la ONU, OSCE y la UE, aunque sin avances significativos.

Rusia	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados del Norte del Cáucaso

Síntesis:

Rusia, el país con mayor superficie del mundo y de vastos recursos naturales –principalmente gas y petróleo–, sucedió a la URSS en 1991 tras la caída del bloque soviético. Desde entonces ha atravesado etapas complejas, incluyendo un proceso de reformas económicas y políticas, privatización y liberalización en los primeros años, de la mano del presidente Boris Yeltsin en los años noventa, que reforzó a núcleos de poder empresarial; y de tránsito hacia un estado autoritario, principalmente en la etapa de las presidencias de Vladimir Putin (2000-2008 y 2012 en adelante). Ante la inconstitucionalidad de un tercer mandato, su aliado Dimitry Medvedev le sucedió en la presidencia entre 2008 y 2012, generando expectativas de mayor apertura democrática, que no llegaron a consolidarse. Medvedev fue nombrado primer ministro en 2012 tras la vuelta de Putin a la presidencia. En clave interna, desde su llegada al poder, Putin reforzó el control político vertical de las instituciones y los medios de comunicación y desmanteló el poder adquirido por oligarcas en la etapa Yeltsin, algunos simpatizantes de la oposición liberal. En paralelo, las restricciones en materia de derechos y libertades han reducido el margen de contestación política. Aún así, en 2012 se asistió a numerosas movilizaciones contra supuestas irregularidades en las elecciones y en demanda de apertura política. Otros ejes de tensión interna incluyen la violencia de corte islamista que afecta al norte del Cáucaso –derivada de la transformación y regionalización de la violencia que afectó a Chechenia en las guerras de los noventa– y que ha resultado también en atentados y violencia en otros puntos de Rusia.

Se mantuvo la tensión en Rusia vinculada a diversos ejes, entre ellos la extensión de la violencia relativa a grupos vinculados a la insurgencia del norte del Cáucaso y llevada a cabo en zonas de Rusia fuera de esa región, pero se redujeron los niveles de violencia en comparación con el año anterior. En 2014 **Rusia desplegó medidas de seguridad sin precedentes con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno (7-23 de febrero), celebrados en la localidad de Sochi (sur). La insurgencia norcaucásica había amenazado con atentar contra las olimpiadas**, si bien las advertencias no se materializaron. Sí hubo protestas limitadas, y perseguidas por las autoridades, por parte de activistas de derechos humanos, medioambientalistas y población circasiana. Estos últimos llevaron a cabo protestas también en otras zonas del norte del Cáucaso, en un intento por dar visibilidad a las críticas a la celebración de los Juegos Olímpicos en territorio ancestral circasiano, cuya población fue masacrada en el siglo XIX, sin que haya habido ningún proceso de memoria histórica. Sí hubo algunos incidentes durante el año. **Seis civiles murieron tiroteados en la región de Stavropol (sur) en dos días de comienzo de enero.** La insurgencia de Kabardino-Balkaria reivindicó los ataques. Por otra parte, **se agravó la repre-**

sión del régimen contra las organizaciones y activistas de derechos humanos, deteriorada desde la aprobación en 2012 de una ley que obliga a las ONG a registrarse como “agentes extranjeros” –termino con gran connotación negativa similar a “espía” o “traidor” en Rusia– si estaban involucradas en actividades políticas –definido de manera excesivamente vaga– y recibían financiación internacional. Desde entonces, las ONG afectadas –de múltiples ámbitos, desde supervisión electoral, a derechos humanos en general, defensa de derechos de la población LGTBI abogacía, desarrollo, entre muchos otros– rechazaron conjuntamente la ley y muchas de ellas se embarcaron en juicios. En junio de 2014 las autoridades rusas aprobaron las enmiendas parlamentarias a la ley autorizando al Ministerio de Justicia a registrarlas unilateralmente como agentes extranjeros sin necesidad de consentimiento de las organizaciones. Así, en 2014 varias fueron unilateralmente codificadas como tales. Algunas decidieron cerrar antes que recibir esa etiqueta. El registro oficial incluye ahora organizaciones como Memorial (la sección de Moscú, mientras el centro en San Petersburgo cerró), JURIX, Golos, Comité de Madres de Soldados de Rusia y la agencia de noticias Memo.ru, hasta un total de 28 registradas forzosamente y dos de manera voluntaria, según alertó un informe de Human Rights Watch.³⁰ Activistas locales advirtieron del grave impacto sobre su trabajo, por la estigmatización asociada. Así, por ejemplo el Comité de Madres de Soldados de Rusia señaló a Amnistía Internacional que se habían reducido las llamadas a su línea de teléfono directo, lo que asociaban a miedo de los usuarios a que sus consultas sean vigiladas.³¹ Además, las sedes de algunas organizaciones sufrieron actos vandálicos. Como otro eje de potencial tensión interna, analistas señalaron la crisis económica que atraviesa Rusia y el impacto de las sanciones internacionales sobre su economía.

Rusia (Chechenia)	
Inicio:	1999
Tipología:	Sistema, Identidad, Autogobierno Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Chechenia, grupos armados de oposición
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y

atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

La tensión en Chechenia escaló en el último trimestre de 2014, con ataques sin precedentes en los últimos años, en que la situación había permanecido mayoritariamente estable en términos de seguridad militar. El balance del año fueron 52 víctimas mortales y 62 heridos, según el portal independiente Caucasian Knot. En paralelo, continuó la tendencia de graves violaciones de derechos humanos y de autoritarismo por el régimen presidido por Ramzan Kadyrov, con impactos de género específicos. Los primeros nueve meses fueron escenario de incidentes de baja intensidad, con varias víctimas, enmarcados en el conflicto que enfrenta a la insurgencia islamista –adscrita a la insurgencia del conjunto del norte del Cáucaso– y a las fuerzas de seguridad. **La insurgencia anunció en marzo la muerte –acontecida en septiembre de 2013– del máximo líder rebelde del norte del Cáucaso, el checheno Dokku Umarov, y su sucesión por Ali Abu-Muhammad (Aliaskhab Kebekov), procedente de Daguestán y de etnia ávara. Por primera vez, el máximo liderazgo se desplazaba de Chechenia a otro territorio norcaucásico**, reflejando las dinámicas de los últimos años, en que Daguestán se ha convertido en el epicentro de la violencia en la región –con varios centenares de muertes al año. No obstante, lejos de suponer la desactivación de la insurgencia chechena, la violencia se incrementó en los últimos meses del año en la república. En paralelo, se produjeron divisiones dentro de la insurgencia en Chechenia y en el conjunto del norte del Cáucaso, en relación a lealtades hacia liderazgos diferentes. Así, comandantes chechenos y de otras repúblicas anunciaron a final de año su adhesión al líder del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi, mientras Ali Abu-Muhammad se reivindicó como la única autoridad en el norte del Cáucaso, generando incertidumbre sobre las próximas etapas. Además, trascendió información sobre la presencia relativamente numerosa de combatientes de origen checheno en las filas de diversas facciones de ISIS en Siria e Iraq, muchos de ellos refugiados chechenos en Europa. Uno de los líderes de esas facciones, Abu-Omar al-Shishani, anunció en septiembre una recompensa económica para quien asesinasen al

30. Human Rights Watch, “Russia: Government against Rights Groups”, *HRW*, 18 de enero de 2015, <http://www.hrw.org/news/2015/01/18/russia-government-against-rights-groups>.

31. Amnistía Internacional, “Lawfare to destroy ‘enemies within’ – Russian NGO tagged as ‘foreign agents’”, *Amnistía Internacional*, 9 de octubre de 2014, <http://www.amnesty.org/en/news/lawfare-destroy-enemies-within-russian-ngos-tagged-foreign-agents-2014-10-09>.

presidente checheno, si bien Kadyrov dio por muerto al líder combatiente en noviembre.

En relación al incremento de violencia dentro de Chechenia, la capital chechena, Grozny, fue escenario del propio Día de la Ciudad, el 5 de octubre, de un atentado suicida, cerca de una sala de conciertos donde se conmemoraba la jornada. El ataque mató a cinco policías y causó heridas a otras 12 personas. A su vez, **se produjo un ataque de gran escala en Grozny a principios de diciembre, que resultó en la muerte de 14 policías, 11 insurgentes y un civil, y en el que otros 36 agentes resultaron heridos.** Los insurgentes abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad después de que éstas intentasen detener los vehículos en que viajaban, y se refugiaron después en la Casa de la Prensa, donde continuaron los enfrentamientos, así como en un colegio. Se impusieron medidas de excepción de “operación antiterrorista”. Según Caucasian Knot, fue el quinto ataque más grave en el conjunto del norte del Cáucaso desde 2004. El ataque fue reivindicado por la insurgencia, que alegó que el objetivo era vengar la persecución contra las mujeres que visten hijab –en un contexto de represión en Daguestán y Chechenia de las autoridades contra hombres y mujeres percibidos como seguidores de la corriente salafista del islam, con detenciones masivas. Tras los hechos, **el presidente checheno anunció castigo colectivo para los familiares de los supuestos insurgentes, incluyendo demolición de casas y expulsión de Chechenia.** Medios de comunicación informaron en diciembre del incendio de varias casas de familiares civiles. El Comité contra la Tortura, cuyo presidente, Igor Kayapin, pidió a la Fiscalía General rusa y al Comité de Investigación de la Federación Rusa que estudiaran si el castigo colectivo podría infringir la legislación rusa, sufrió represalias, con el incendio de la sede y otras acciones de intimidación a Kayapin.

Las acciones contra el Comité contra la Tortura se sumaron al clima general de violaciones de derechos humanos por parte del régimen. Las ONG internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch instaron a las autoridades rusas a poner fin a la persecución contra los defensores de los derechos humanos en Chechenia. Asimismo, se anunció en mayo la creación del Centro para el Monitoreo y Protección de los Derechos Humanos en el sur de Rusia, en un contexto en el que las organizaciones y activistas del norte del Cáucaso, y especialmente de Chechenia, afrontan graves dificultades para llevar a cabo su trabajo de denuncia y acompañamiento. Entre los hechos de 2014, el activista y presidente de la ONG Asamblea de las Naciones del Cáucaso, Ruslan Kutaev, fue condenado a cuatro años de prisión bajo cargos de posesión ilegal de drogas. Memorial y organizaciones internacionales denunciaron motivaciones políticas. Por otra parte, en marzo trascendió que unas 40.000 personas procedentes de Rusia y en su mayoría originarias de Chechenia, pidie-

Se incrementaron los incidentes violentos en Chechenia y varios comandantes de la insurgencia chechena anunciaron lealtad al grupo armado yihadista ISIS

ron asilo en 2013 en países industrializados, según AC-NUR. La cifra era un 76% superior a la del año anterior. A su vez, durante 2014 se agravó la persecución y hostigamiento de las autoridades a sectores de población salafista, como también sucedió en la vecina república de Daguestán, incluyendo la detención de mujeres percibidas como salafistas. En un contexto en que las autoridades chechenas en los últimos años han promovido políticas y medidas contra los derechos humanos de las mujeres –imponiendo códigos de vestimenta y alentando acciones contra las que los incumplían– así como en medio de una creciente persecución de civiles vinculados a ramas salafistas del islam, trascendió que el presidente checheno habría instado a las fuerzas de seguridad a detener a las mujeres con hijabs que les cubriesen

la parte inferior de la cara, a registrarlas e incluso a quitarles la ropa interior, según informaciones recibidas por una ONG local. Según esa fuente, las indicaciones de Kadyrov instaban también a la detención de población joven con apariencia de “wahabita”, en referencia a la corriente salafista. En 2007 Kadyrov impuso a las mujeres la obligatoriedad de cubrirse la cabeza con pañuelo en los edificios públicos. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió nuevas sentencias durante el año contra Rusia por violencia cometida contra civiles en Chechenia.

Rusia (Ingushetia)

Inicio: 2008

Tipología: Sistema, Gobierno, Identidad Interno

Actores: Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Ingushetia, grupos armados de oposición (Jamaat Ingush)

Intensidad: 1

Evolución: ↓

Síntesis:

La violencia de baja intensidad que experimenta Ingushetia desde comienzos del siglo XXI enfrenta a las fuerzas de seguridad locales y federales y a una red de células armadas de corte islamista, conocida como la Jamaat Ingush e integrada en el Frente del Cáucaso (movimiento que agrupa a las diferentes insurgencias del norte del Cáucaso). Con orígenes que se remontan a la participación de combatientes ingushes en la primera guerra chechena (1994-1996), a partir de 2002 la insurgencia ingush se reestructuró sobre líneas territoriales, impulsando una campaña de violencia local que, sin la pulsión nacionalista de Chechenia, perseguía la creación de un Estado islámico en el Cáucaso. El inicio de la violencia en Ingushetia se produjo en paralelo a la presidencia en la república de Murat Zyazikov, a cuyo mandato (2002-2008) se atribuyen numerosos problemas de violaciones de derechos humanos, corrupción, pobreza y un clima de desgobierno y tensión social y política. La insurgencia ingush ataca periódicamente al personal militar y civil del aparato del Estado ruso y local. Entre 2008 y 2010 la violencia se agravó y a partir de 2011 remitió de forma significativa.

A diferencia de Daguestán y Chechenia, la tensión por el conflicto entre fuerzas de seguridad e insurgencia se redujo y la situación de seguridad fue mayoritariamente estable, con escasos incidentes. Aun así **se produjeron una veintena de víctimas mortales y una quincena de heridos por enfrentamientos o ataques entre la insurgencia de tipo islamista y las fuerzas de seguridad**. Entre los incidentes, **el máximo líder de la insurgencia en Ingushetia, Arthur Getagazhev, murió en un tiroteo desencadenado en una operación especial de las fuerzas de seguridad en la localidad de Sagopshi (distrito de Malgobek)**. Otros cuatro insurgentes y otras dos personas murieron a causa de la operación “antiterrorista”. Algunos expertos apuntaron a que el cambio en el liderazgo local podía suponer una reducción de la violencia, al haber de reajustarse, si bien ello no la desactivaba como fuente de amenazas. Durante el año hubo otros incidentes, enfrentamientos y ataques.

Sudeste de Europa

Bosnia y Herzegovina	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional

Síntesis:

La ex república yugoslava Bosnia y Herzegovina, habitada por bosniacos, serbios y croatas, se vio afectada entre 1992 y 1995 y en el marco del proceso de descomposición de la Federación de Yugoslavia por una guerra en la que la élite política serbia del país, con apoyo de Serbia, así como personalidades políticas bosniacas y croatas, movilizaron a sus respectivas poblaciones y fuerzas en torno a la cuestión étnica a partir de proyectos políticos de autodeterminación de difícil equilibrio entre ellos. Los acuerdos de paz de Dayton dieron paso a un Estado frágil, dividido en dos entidades: la república Srpska (de mayoría serbia y con el 49% del territorio; y la Federación de Bosnia y Herzegovina (con población bosniaca y croata y el 51% del territorio), ambas con amplios poderes, incluyendo el militar. Las tensiones políticas entre las élites nacionalistas de las tres comunidades y entre éstas y la presencia internacional que supervisa la implementación de los acuerdos, así como el legado del impacto del conflicto en la población y el país, son ejes aún activos de conflicto.

Se incrementó la tensión social y política a principios de año, con protestas ciudadanas en la federación bosnio-croata contra la corrupción y en defensa de mejoras en la calidad de vida, si bien el resto del año la situación

se mantuvo relativamente estable. Las movilizaciones comenzaron a inicios de febrero en Tuzla contra el colapso de varias empresas estatales privatizadas. Se desencadenaron protestas en más de una treintena de ciudades de la Federación que duraron varios días, mientras en la República Srpska la situación se mantuvo estable. Algunas protestas derivaron en incidentes y choques violentos entre manifestantes y Policía y ataques a edificios de gobiernos cantonales y estatales. Varios cientos de personas resultaron heridas. Analistas señalaron el eje socioeconómico y político como motor de las protestas, y no el sectario, con las movilizaciones dirigidas contra la gestión de la clase política. Aun así, dirigentes políticos de la

República Srpska denunciaron que las protestas pretendían desestabilizar a la entidad serbia. Ante la presión de las movilizaciones, cuatro gobiernos cantonales dimitieron, incluyendo el de Tuzla. Se formaron foros de discusión pública en varias localidades, que presentaron demandas a los gobiernos. El Parlamento cantonal de Sarajevo aceptó las demandas del foro local de formar un gobierno de expertos y reducir los salarios de los gobernantes. En meses posteriores se produjeron algunas protestas, como movilizaciones reducidas en mayo ante el Parlamento de la Federación reclamando la dimisión del Gobierno y el cumplimiento de demandas planteadas por los foros ciudadanos.

No obstante, la mayor parte del año la situación permaneció estable en el conjunto del país, afectado por múltiples retos en términos de seguridad humana, equidad de género o reconciliación, entre otros desafíos. Por su parte, la UE anunció un giro en su aproximación al país hacia un mayor énfasis en cuestiones de reformas económicas y judiciales, presentándolo en parte como respuesta a las demandas ciudadanas. A su vez, el Fondo Monetario Internacional anunció en septiembre la supeditación del próximo programa a la implementación de reformas económicas, en contraste con el carácter contrario a las privatizaciones de las protestas ciudadanas de febrero. Por otra parte, Bosnia y Herzegovina celebró elecciones generales y presidenciales en octubre, que transcurrieron en calma. En la Federación bosniaco-croata, el SDA, el HDZ y el FD alcanzaron un acuerdo postelectoral para gobernar la entidad; en la entidad serbia, el oficialista SNSD obtuvo mayoría, Milorad Dodik fue reelegido presidente y su aliado Zeljka Cvijanovic fue designado primer ministro en un gobierno liderado por el SNSD e integrado por otras tres formaciones. A su vez, la presidencia tripartita estatal asumió sus funciones a mediados de noviembre.

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ³²

32. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

Actores: Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra éste último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

La situación en Kosovo se agravó durante el año tanto por el clima de tensión política interno como por los retos pendientes en normalización de relaciones con Serbia y en materia de reconciliación y justicia transicional. En clave política interna, se incrementó la tensión por disputas políticas en torno a cuestiones como la futura representación de las minorías de Kosovo en el Parlamento y las críticas de la oposición kosovar a la falta de resultados del diálogo con Serbia –con algunos sectores esgrimiendo un deterioro en la situación en el norte de Kosovo y la no disolución de estructuras paramilitares serbias, en contraste con la aseveración del Gobierno de que éstas y las estructuras paralelas de justicia estaban siendo desmanteladas y las municipales ya lo habían sido. Además, los desacuerdos e incertezas sobre el futuro de la cuota de escaños reservados a minorías, vigente desde 2008, llevó a la minoría serbia en el Parlamento kosovar a amenazar con abstenerse en la votación sobre cambios constitucionales requeridos para materializar la decisión del Gobierno kosovar de transformar la actual Fuerza de Seguridad de Kosovo en Fuerzas Armadas –planes anunciados por Pristina en marzo, muy criticados por Serbia. Así la votación sobre un futuro ejército se pospuso en mayo. Las desavenencias y la parálisis parlamentaria llevaron al oficialista PDK a convocar elecciones anticipadas en junio. El PDK obtuvo el 30,38% de los votos (37 escaños), el LDK un 25,24% (30 escaños), Vetevendosje un 13,59% (16 escaños) y AAK un 9,54% (11 escaños).

El clima postelectoral no mejoró y dio paso a una pugna entre el PDK y partidos de la oposición para formar Gobierno –el LDK, AAK y Nisma Per Kosoven se coaligaron tras los comicios, buscando también el apoyo de

Vetevendosje. **La disputa por el poder, que se trasladó también a los tribunales, alargó la parálisis hasta noviembre, en que finalmente el PDK y LDK anunciaron un acuerdo para un gobierno de coalición**, que se inició en diciembre. El líder del LDK Isa Mustafa fue nombrado nuevo primer ministro, mientras el anterior primer ministro y líder del PDK, Hashim Thaci, pasó a ocupar el cargo de viceprimer ministro y ministro de Exteriores. La parálisis política durante el año tuvo repercusiones en otros frentes, e implicó retraso en la aprobación de cambios legislativos para establecer el nuevo tribunal especial, con jueces internacionales, que juzgará supuestos crímenes de guerra cometidos por la guerrilla albanesa ELK en los noventa. El nuevo tribunal fue aprobado en abril por el Parlamento, pese a las fuertes críticas entre altos cargos albanokosovares, incluido el primer ministro y ex comandante del ELK Hashim Thaci; pero su entrada en vigor estaba pendiente de reformas legislativas. Asimismo, generó tensión y críticas el anuncio en julio del fiscal jefe del órgano Special Investigative Task Force, establecido por la UE, Clint Williamson, de que hay evidencias suficientes para presentar acusación formal contra ciertos antiguos altos cargos del ELK por crímenes contra la humanidad cometidos contra minorías y contra albaneses opositores al ELK tras el fin de la guerra en Kosovo. Los hechos documentados incluyen asesinatos, secuestros, violencia sexual, desapariciones forzadas, detención en campos ilegales en Kosovo y Albania, otras formas de tratos inhumanos, desplazamiento forzado y profanación y destrucción de iglesias y otros lugares religiosos. El fiscal jefe alertó del clima de intimidación, especialmente a testigos. Acabado el mandato de Williamson en agosto, su sustituto en funciones fue sucedido en noviembre por David Schwendiman (EEUU).

Por otra parte, durante el año continuaron haciéndose evidentes los retos en materia de relaciones intercomunitarias, especialmente en Mitrovica. Solo 5.134 de las 28.000 personas que podían votar en los comicios de Mitrovica Norte (de mayoría serbia) participaron –las elecciones locales de noviembre de 2013 en Kosovo se repitieron en Mitrovica norte en febrero tras el rechazo del alcalde electo a tomar posesión por considerar que ello conllevaba aceptar implícitamente la independencia de Kosovo. **Hubo diversos incidentes de seguridad a lo largo del año. Protestas albano-kosovares contra barricadas serbias instaladas en el puente que divide Mitrovica desembocaron en incidentes, con 13 policías y 21 manifestantes heridos.** Se produjeron también algunos asesinatos no esclarecidos. La Policía interceptó explosivos en el vehículo de un ciudadano serbio supuestamente destinados a un atentado bomba. Por otra parte, en el plano internacional trascendieron alegaciones de supuesta corrupción y sobornos en la misión de la UE en Kosovo (EULEX), a través de información en prensa local y denuncias de una fiscal de la misión, que fue retirada del cargo. La UE anunció una investigación al respecto de las denuncias. La funcionaria retirada señaló que EULEX había ignorado acusaciones previas.

2.3.5. Oriente Medio

Al Jalish

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, AQPA, ISIS

Síntesis:

Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza, sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría shií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno, que denuncia la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior.

La tensión en Arabia Saudita continuó evidenciándose en diversos hechos de violencia que involucraron a las fuerzas de seguridad, presuntos militantes vinculados a grupos armados extremistas sunníes, activistas en las áreas de mayoría shií del país, así como a guardias fronterizos. Los variados incidentes que ocurrieron a lo largo de 2014 provocaron la muerte de casi una treintena de personas, lo que supone una intensificación de la violencia respecto a 2013. Durante el año varios de los episodios violentos tuvieron lugar en el este del país, zona con una mayor presencia de población shií y tradicionalmente más contestataria hacia las autoridades. Así, a principios de año, cuatro personas murieron después de que una operación de rastreo derivara en enfrentamientos en la zona de al-Awamiya, entre ellas dos policías y dos personas vinculadas a la oposición: el hermano de uno de los dirigentes de las manifestaciones y un destacado fotógrafo que había documentado las protestas y los funerales de los activistas fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad desde 2011. A finales de año, en esta misma localidad, hombres armados tirotearon y asesinaron a un policía en al-Awamiya, mientras que días después otras cinco personas murieron –un peatón y cuatro sospechosos de estar involucrados en el ataque– du-

rante una redada policial. **Uno de los acontecimientos más destacados del año sucedió en noviembre en la zona de Dalwah, también en el este del país, cuando hombres armados atacaron a un grupo de shiíes a la salida de una conmemoración religiosa, causando la muerte de ocho personas.** Un día más tarde dos de los presuntos atacantes y dos policías murieron en el norte de la capital, Riad. Según las autoridades, el incidente habría involucrado a militantes del grupo armado yihadista Estado Islámico (ISIS). Otro tiroteo en Riad en diciembre contra un ciudadano danés, que sobrevivió a la ofensiva, fue reivindicado por seguidores de ISIS. Previamente, Estado Islámico había hecho un llamamiento a sus simpatizantes a perpetrar ataques contra funcionarios gubernamentales, occidentales y miembros de la comunidad shií en Arabia Saudita, en represalia por la participación de Riad en la coalición anti-ISIS liderada por EEUU.³³ En este contexto, a finales de año Riad anunció que había detenido a 135 personas por presuntos vínculos con actividades terroristas, entre ellas decenas de sospechosos de tener lazos con ISIS. Cabe mencionar que durante 2014, otros hechos de violencia tuvieron como escenario la zona limítrofe con Yemen y afectaron principalmente a guardias fronterizos. Se estima que al menos tres efectivos saudíes perdieron la vida en incidentes ocurridos en abril en las provincias de Asir y Jizan, tras ser víctimas de proyectiles disparados por hombres armados no identificados desde territorio yemení. Al otro lado de la frontera, varios milicianos de AQPA fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad yemeníes cuando intentaban cruzar hacia Arabia Saudita.³⁴

Paralelamente, en el transcurso del año se informó de **diversas condenas contra personas por participar en manifestaciones o por desarrollar actividades vinculadas a la oposición.** Una de las más destacadas fue la sentencia contra el prominente clérigo shií Nimr al-Nimr, condenado a muerte en octubre. El dirigente religioso, que respaldó las movilizaciones contra el Gobierno que se iniciaron en el este del país en 2011 en el marco de las revueltas árabes, fue acusado de pretender la intervención de actores foráneos en Arabia Saudita, de desobedecer a las autoridades y de incitar al uso de la violencia contra las fuerzas de seguridad. Su detención hace dos años, en la que resultó herido, ya había motivado protestas en la zona oriental del país. Otros dos manifestantes shiíes recibieron un castigo similar, mientras que otras siete personas fueron condenadas a veinte años de cárcel por protestar contra el régimen. En este contexto, grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por los indicios que apuntan a la falta de un juicio imparcial en estos casos. Organizaciones como Human Rights Watch también alertaron que las autoridades saudíes habían intensificado las medidas de acoso a los sectores disidentes, persiguiendo a numerosas personas por sus comentarios en las redes sociales.

33. Véase el resumen sobre Iraq y el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

34. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Bahrein	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las revueltas populares que se propagaron por países del Magreb y Oriente Medio durante 2011 repercutieron también en Bahrein. Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del país que es de confesión shií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las tensiones internas, que se habían incrementado en los últimos años, se convirtieron en una contestación abierta a partir de febrero de 2011. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa a EEUU, que tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago.

La tensión interna en Bahrein continuó evidenciándose en periódicas manifestaciones de la oposición contra el Gobierno, medidas de acoso a la disidencia por parte de las autoridades, y en diversos hechos de violencia que causaron la muerte a una decena de personas a lo largo de 2014. Algunos de estos episodios se materializaron en la detonación de artefactos explosivos en la capital, Manama, y sus alrededores, que causaron la muerte de al menos siete policías. Una de estas ofensivas, que supuso la muerte de tres policías a principios de año, fue reivindicada por un grupo disidente autodenominado Saraya al-Ashtar, declarado organización terrorista por las autoridades de Bahrein. Asimismo, durante 2014 varias personas resultaron heridas a causa de la represión policial o como consecuencia de enfrentamientos entre sectores de la oposición y las fuerzas de seguridad en el marco de movilizaciones contra el régimen, algunas de ellas alentadas por la muerte de opositores mientras permanecían detenidos (a principios de año, al menos dos personas perdieron la vida cuando se encontraban bajo custodia policial). Otras manifestaciones de la oposición coincidieron con fechas emblemáticas, como un nuevo aniversario de las amplias protestas contra el Gobierno en 2011, o estuvieron motivadas por el rechazo a las medidas contra dirigentes de la oposición y activistas. En el plano político, la situación se caracterizó por la falta de avances en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. A principios de año, los grupos disidentes –entre los que destaca la agrupación shií al-Wefaq– optaron por retirarse de la iniciativa de diálogo nacional ante el bloqueo de las conversaciones y la detención de altos dirigentes de la oposición. En este contexto, el Gobierno decretó el colapso del diálogo y culpó a la oposición del fracaso del proceso iniciado en

febrero de 2013. No obstante, la intervención del príncipe heredero Sheikh Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa –considerado como una figura más moderada dentro del régimen– facilitó la reanudación de los contactos y alentó la discusión de fórmulas para salvar y dar contenido al diálogo nacional. El príncipe se reunió personalmente con diversos sectores de la oposición que, a su vez, dieron a conocer una hoja de ruta para retomar los contactos. En ella reiteraron sus demandas para que Bahrein se transforme en una verdadera monarquía constitucional; pidieron cambios en la ley electoral para asegurar la celebración de comicios transparentes supervisados por una comisión neutral, que el Parlamento tenga plenos poderes legislativos y que el Gobierno sea electo. Además, solicitaron garantías para la igualdad entre los ciudadanos del país y el fin de las políticas de naturalización de extranjeros, y también reclamaron la liberación de presos de conciencia. Adicionalmente, los grupos disidentes se comprometieron a denunciar la violencia de todas las partes, se mostraron dispuestos a mantener tres reuniones semanales para acelerar el diálogo y pidieron que sus resultados fueran sometidos a un referéndum.

En septiembre, el príncipe heredero informó de los resultados de sus conversaciones bilaterales con al menos seis grupos disidentes y aseguró que las partes habían identificado cinco áreas de interés común, incluyendo la redefinición de los distritos electorales para asegurar una mejor representación, nuevos poderes al Parlamento para interpelar a los ministros por sus acciones y para aprobar el gabinete, así como reformas en el ámbito judicial y de seguridad. Sin embargo, la oposición shií aseveró que los puntos propuestos no satisfacían sus demandas y mantuvo sus manifestaciones contra el Gobierno. En este contexto, la celebración de elecciones en noviembre dejó en evidencia la distancia entre las partes. **En octubre, al-Wefaq y otros cuatro movimientos opositores anunciaron un boicot a los comicios. Poco después, las autoridades decretaron la suspensión de las actividades de al-Wefaq por un plazo de tres meses y, en vísperas de la votación, prohibieron las manifestaciones disidentes. Cientos de personas se enfrentaron con la Policía y decenas fueron detenidas acusadas de llamar a los votantes a convertir las elecciones en un referéndum sobre la legitimidad del régimen.** Según el Gobierno, la votación contó con una participación de 51,5%, pero la oposición aseguró que sólo alcanzó un 30%. A finales de año, el clima de tensión se agudizó como consecuencia del arresto del líder de al-Wefaq, Sheikh Ali Salman, bajo cargos de incitación a la violencia y de promover enfrentamientos entre opositores y las fuerzas de seguridad. Su detención y el inicio de procesos contra destacados activistas como Nabeel Rajab –encausado por unos comentarios en twitter– alentaron nuevas movilizaciones. Cabe destacar que durante 2014 las autoridades de Bahrein también expulsaron a un alto funcionario de EEUU, declarado persona *non grata* por reunirse con el líder de al-Wefaq a solas, sin la presencia de un funcionario del Gobierno de Manama. El incidente motivó un intercambio diplomático entre EEUU y Bahrein y algunas medidas sancionadoras. No obstante, la posición de Washington respecto a Manama –y su capacidad

de presión— se vio condicionada, no sólo porque Bahrein es sede de la Quinta Flota de la Armada estadounidense, clave para las operaciones en el Golfo Pérsico, sino también porque el país se sumó a la coalición anti-ISIS liderada por EEUU, participando en los ataques aéreos contra el grupo armado en Iraq y Siria.³⁵

Irán (noroeste)	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores: principales:	Gobierno, PJAK, Gobierno Autónomo del Kurdistan iraquí (KRG), Iraq

Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (KDPI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistan (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria.

Siguiendo con la tendencia de años previos, la disputa que involucra al Gobierno iraní y al grupo armado kurdo PJAK registró reducidos niveles de tensión a lo largo de 2014, en línea con la tendencia observada en este contexto desde la declaración de cese el fuego por parte del PJAK en 2011. **Entre los hechos más relevantes del año cabe mencionar el anuncio del PJAK sobre la formación de una nueva organización, que tendría entre sus principales objetivos el establecimiento de un diálogo con las autoridades de Teherán.** En una conferencia de prensa celebrada en mayo en la localidad de Khoran, en el norte de Iraq, el líder del nuevo grupo, Rizan Javid, informó que la Organización por una Sociedad Libre y Democrática en el Kurdistan Oriental (KODAR) está integrada en su mayoría por personas que han participado en las filas del PJAK. Javid reiteró la disposición a entablar conversaciones con Irán y aseguró que llamados similares previos no habían tenido respuesta por parte de Teherán. Este giro en la aproximación del PJAK estaría vinculado a las directrices planteadas por el dirigente kurdo y líder del PKK, Abdullah Öcalan, quien —según informaciones trascendidas a la prensa— a finales de 2013 planteó que el grupo armado debería intentar resolver la cuestión kurda en Irán

a través de negociaciones políticas con la república islámica. Según medios de prensa vinculados a los intereses kurdos, la posición del PJAK también estaría determinada por los cambios a nivel regional y la toma de consciencia de que la vía armada no será efectiva para la consecución de sus objetivos. En este mismo sentido, algunos analistas también han resaltado que la minoría kurda en Irán sería más partidaria de un proceso de diálogo que de una confrontación armada con Teherán, sobre todo por temor a una respuesta represiva, teniendo en cuenta que tradicionalmente el Gobierno iraní ha reaccionado ante los desafíos de etnias y minorías con una aproximación militar. Expertos también alertaron sobre cierta desconexión entre la población kurda y las organizaciones kurdas de Irán, en parte por el hecho de que estos grupos han trasladado sus bases al norte de Iraq.

Pese a la tregua vigente, en los últimos años se han producido diversos incidentes y escaramuzas entre milicianos del PJAK y las fuerzas de seguridad y 2014 no fue la excepción. Según informaciones de prensa, en junio los enfrentamientos entre miembros de la Guardia Republicana y combatientes kurdos —que presuntamente intentaban cruzar la frontera— causaron diversas víctimas mortales en las filas insurgentes, según la versión oficial iraní. A lo largo del año también se conocieron otros hechos vinculados al conflicto entre Irán y grupos kurdos, entre ellos la muerte de un dirigente de la organización Komala a manos de efectivos militares iraníes, en febrero, y periódicas denuncias sobre la situación de prisioneros kurdos, ya sea por sus condenas a muerte como por las condiciones de vida en la cárcel, que motivaron que algunos prisioneros realizaran huelgas de hambre.

Irán (Sistán Baluchistán)	
Intensidad:	2
Evolución trimestral:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores: principales:	Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran, Jaish al-Adl, Pakistán

Síntesis:

Sistán Baluchistán es una provincia iraní limítrofe con Afganistán y Pakistán —la población baluchi vive a ambos lados de la frontera— y de mayoría sunní, en contraste con el resto del país, donde predomina la rama shíí del Islam. La zona se caracteriza por altos índices de pobreza y es escenario de rutas de contrabando y de tráfico de drogas. Desde 2005 el grupo Jundollah (Soldados de Dios) ha llevado a cabo una campaña insurgente en esta región. La organización, que también se autodenomina Movimiento de Resistencia del Pueblo, fue creada en 2002 y denuncia una persecución sectaria por parte de Teherán. Jundollah asegura que su objetivo es la defensa de los derechos, la cultura y la religión de los baluchis y

35. Véase el resumen sobre Iraq y el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

niega tener una agenda separatista y vínculos con el exterior, como le acusa el Gobierno iraní, que le atribuye conexiones con EEUU, Reino Unido, Pakistán, Arabia Saudita y con la red al-Qaeda. Ante la posibilidad de desestabilización de esta zona, Teherán ha reforzado sus dispositivos de control y ha condenado a muerte a decenas de militantes de Jundollah. Las acciones del grupo insurgente se han reducido desde 2010, tras la captura y ejecución de su líder, pero nuevos grupos armados con una agenda similar a la de Jundollah han continuado operando en la zona, protagonizando esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Siguiendo una tendencia ya observada el año anterior, durante 2014 se registró una intensificación de la tensión en Sistán Baluchistán producto de una mayor actividad del grupo armado sunní Jaish al-Adl (Ejército de la Justicia) y de su repercusión en las relaciones bilaterales entre Irán y Pakistán. A lo largo del año, la organización insurgente –que vincula sus acciones con una lucha por los derechos de la población baluchi y de la minoría sunní en la república islámica– reivindicó diversos ataques contra puestos fronterizos y miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Adicionalmente, se informó de enfrentamientos que provocaron muertos y heridos en ambos bandos. Según recuentos no oficiales a partir de informaciones de prensa, más de una docena de personas habrían fallecido en diversos incidentes vinculados a esta disputa, aunque en algunos casos los balances de víctimas eran imprecisos. **Entre los hechos de violencia ocurridos durante el primer semestre de 2014 cabe destacar un ataque contra efectivos de la Guardia Republicana perpetrado por Jaish al-Adl que dejó siete soldados muertos en enero y la captura de otros cinco militares iraníes en febrero.**

Los efectivos iraníes –que cumplían el período de conscripción obligatoria–, fueron trasladados a Pakistán, donde el grupo armado tiene sus bases. A cambio de su liberación, Jaish al-Adl exigió la excarcelación de unos 300 prisioneros sunníes detenidos en Irán y Siria, entre ellos un centenar de presuntos miembros de la organización insurgente. En marzo el grupo anunció la ejecución de uno de los soldados y alertó que el resto de militares capturados correrían la misma suerte a menos que las autoridades de Teherán accedieran a sus demandas. El incidente derivó en una escalada de tensión entre Irán y Pakistán, ya que las autoridades iraníes acusaron al Gobierno de Islamabad de no controlar sus fronteras de manera efectiva y de no adoptar las medidas necesarias para conseguir la liberación de los soldados iraníes. Teherán advirtió incluso con la posibilidad de enviar tropas a Pakistán para rescatar a los militares. Pakistán, en tanto, rechazó las acusaciones de Irán y exigió respeto a los límites fronterizos. Pese al intercambio de críticas, representantes de ambos países se reunieron en Quetta (en la provincia pakistaní de Baluchistán) y pusieron en marcha una comisión conjunta con el fin de avanzar en la liberación de los soldados. Finalmente, los cuatro soldados fueron liberados por Jaish al-Adl a principios de abril. De

La provincia iraní de Sistán Baluchistán fue escenario de diversas acciones armadas protagonizadas por el grupo insurgente Jaish al-Adl, que también causaron tensiones bilaterales entre Irán y Pakistán

acuerdo a la versión oficial iraní, la entrega se produjo en el marco de una intervención de las fuerzas de seguridad pakistaníes, pero según el grupo armado fue a instancias de eminentes clérigos sunníes de Irán que intercedieron a favor de los militares.

Durante el segundo semestre, los ataques de Jaish al-Adl se intensificaron y algunos analistas atribuyeron estas ofensivas a una represalia por el asesinato de dos altos dirigentes baluchis en Pakistán en agosto, en una acción presuntamente perpetrada por fuerzas iraníes. No obstante, según otras versiones, la muerte de estos dirigentes –relacionados con el grupo armado Jundollah, que previamente lideraba la campaña contra las fuerzas iraníes en la región–, habría sido consecuencia de un ataque de Jaish al-Adl, en el marco de una disputa interna entre las facciones baluchis. Según algunos expertos, Jaish al-Adl habría integrado en sus filas a un buen número de combatientes de Jundollah, cuya actividad en la zona se redujo progresivamente tras la ejecución de su líder en 2010. En este contexto, **en septiembre se informó de enfrentamientos de miembros de la Guardia Revolucionaria apoyados por milicias baluchis pro-gubernamentales contra combatientes de Jaish al-Adl, después de un ataque insurgente a un puesto fronterizo en la localidad de Saravan.** Según la versión iraní, los militantes insurgentes fueron obligados a replegarse a sus bases en Pakistán tras combates que supusieron numerosas bajas en los combatientes sunníes. Por el contrario, Jaish al-Adl presentó la operación como un éxito y aseveró haber dado muerte a al menos diez efectivos iraníes. Nuevos incidentes ocurridos en octubre acabaron con la muerte de tres policías y un guardia fronterizo tras un ataque explosivo en Saravan y de otros dos guardias fronterizos tras un tiroteo en la frontera con Pakistán. En diciembre, otros tres militares iraníes murieron en un ataque del grupo insurgente, también en Saravan. Las tácticas de Jaish al-Adl estarían focalizadas en atentados explosivos y ataques armados a vehículos militares y puestos de control. Tras los ataques de octubre, Irán decidió reforzar su presencia militar en la zona. Diversos análisis establecieron ciertos paralelismos entre las acciones de Jaish al-Adl y el grupo Estado Islámico (ISIS), que amplió su presencia en Iraq y Siria durante 2014. Aunque no existiría evidencia de una relación directa entre ambas organizaciones,

expertos subrayaron que Jaish al-Adl había demostrado mayores capacidades en sus ataques más recientes. Las autoridades iraníes usualmente han acusado a Arabia Saudita, a EEUU y a Pakistán de dar apoyo a este tipo de grupos con el fin de desestabilizar a la república islámica. En este sentido, cabe destacar que en octubre se informó de un intercambio de fuego de mortero entre Irán y Pakistán, en el primer incidente de esta naturaleza en décadas. Según versiones de prensa, Pakistán respondió al fuego lanzado desde Irán y los hechos habrían provocado la muerte de al menos un soldado pakistaní. La información no fue confirmada ni desmentida de manera oficial por los gobiernos de ambos países y no estaba claro si la

incursión iraní en territorio pakistaní pretendía desbaratar alguna célula de Jaish al-Adl.

Irán – EEUU, Israel ³⁶	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores principales:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2015-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, ha despertado expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras la firma de un acuerdo en materia nuclear a fines de 2013.

La tensión internacional en torno al programa nuclear iraní se mantuvo encauzada a través de negociaciones diplomáticas de alto nivel entre representantes de la república islámica y del llamado G5+1 (grupo de potencias conformado por los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, también conocido como UE3+3). Tras el acuerdo alcanzado a finales de 2013, a principios de año las partes consensuaron los términos de implementación del pacto para su entrada en vigor oficial. La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) confirmó que Irán estaba cumpliendo con sus compromisos en lo relativo a suspender las actividades de enriquecimiento de uranio por encima del 5%, diluir sus reservas de uranio enriquecido al 20%, favorecer el trabajo de los inspectores internacionales, detener la instalación de nuevas centrifugadoras y frenar la construcción del reactor de agua pesada en Arak. Las diversas inspecciones realizadas por la AIEA a lo largo del año constataron que Teherán se mantenía en esta línea. Adicionalmente, Irán y la AIEA consensuaron acuerdos adicionales para despejar dudas sobre la dimensión militar del programa atómico iraní. Como contrapartida a estas medidas por parte de Irán, tanto la UE como EEUU respondieron con el levantamiento de sanciones contra

Teherán. A lo largo del primer semestre de 2014 se celebraron sucesivas rondas de negociaciones en Viena, de carácter mensual entre febrero y julio. Según informaciones trascendidas a la prensa, en este período las conversaciones se vieron afectadas por ciertas dinámicas ya observadas en negociaciones previas sobre la cuestión nuclear iraní, entre ellas posiciones maximalistas de las partes y percepciones erróneas sobre los respectivos márgenes de maniobra, además de intercambios de acusaciones. A medida que se acercaba el plazo impuesto para alcanzar un acuerdo, en julio, se hizo más evidente que Irán y el G5+1 no conseguirían llegar a un consenso y las partes decidieron ampliar el plazo para las negociaciones hasta noviembre, coincidiendo con el primer aniversario de la firma del acuerdo que dio impulso al proceso negociador. En este contexto, a mediados de año se intensificaron los contactos bilaterales entre representantes de EEUU e Irán y se celebraron reuniones de alto nivel en Ginebra y, posteriormente, en Nueva York, coincidiendo con la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en septiembre. A estas alturas, comenzó a hacerse más evidente que se mantenían los desacuerdos entre las partes en temas clave, en especial en lo relativo a las capacidades nucleares que podría mantener Irán en el marco de un acuerdo y al calendario de levantamiento de sanciones. Ante esta constatación, y **ante la evidencia de que existía disposición de las partes para mantenerse en la vía del diálogo, Irán y el G5+1 anunciaron en noviembre que extenderían otros siete meses las negociaciones.** Se fijó así un nuevo plazo límite para un acuerdo integral, julio de 2015, que en teoría debe estar precedido de un acuerdo político que debe suscribirse como muy tarde en marzo.³⁷

La decisión de extender el diálogo se adoptó después de intensas conversaciones en Viena y en Muscat (Omán), donde se reunieron el secretario de estado de EEUU, John Kerry, el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, y la entonces jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. En este contexto, hacia finales de año se reanudaron las negociaciones en Ginebra, tanto en formato bilateral –entre delegados de EEUU e Irán el 15 y 16 de diciembre–, como multilateral –Irán y G5+1, el 17 de diciembre. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo en los plazos fijados durante 2014 generó cierta decepción en algunos sectores. No obstante, también alentó valoraciones positivas de diversos expertos sobre la marcha de las conversaciones, entre ellas que en el marco del diálogo se había profundizado en el conocimiento de la contraparte, sus expectativas y límites de acción; que el proceso había logrado mantenerse a pesar de los vaivenes de la agenda internacional y de las divergentes posiciones de los actores involucrados –por ejemplo, respecto al conflicto armado en Siria–; y que, en el caso de EEUU e Irán, se mantenía la disposición a continuar el proceso a pesar del escepticismo –si no oposición– de sectores de línea dura de ambos países. En este sentido, **durante el**

36. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

37. Para más información sobre las perspectivas de la negociación sobre el programa atómico iraní, véase “Negociación sobre el dossier nuclear iraní: una renovada apuesta por el diálogo” en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2015).

año el Ayatollah Ali Khamenei no dejó de expresar cierto escepticismo sobre la marcha de las conversaciones y tras el anuncio de extensión del diálogo manifestó con tono desafiante que Occidente no había conseguido “poner de rodillas” a Irán. En el caso de EEUU, la posición del Gobierno de Barack Obama sobre la cuestión nuclear se vio comprometida por el triunfo de los republicanos en las elecciones de noviembre, otorgándoles el control de la Cámara de Representantes y del Senado. La marcha del diálogo podría verse afectada por la posición de sectores republicanos que han amenazado en reiteradas ocasiones con la imposición de nuevas sanciones contra Irán, y que se mostraron beligerantes tras la difusión de ciertas informaciones (luego desmentidas) sobre la supuesta violación de ciertas disposiciones del acuerdo por parte de Irán. No obstante, trascendió que tras los comicios Obama envió una carta a Khamenei en la que le instaba a aprovechar la oportunidad histórica para un pacto que, además, facilitaría la aproximación de cara a otros temas de común preocupación para Teherán y Washington, como el ascenso y expansión del grupo armado Estado Islámico (ISIS) en Iraq y Siria. En cuanto a Israel, el Gobierno de Benjamin Netanyahu celebró que no se alcanzara un consenso sobre la cuestión nuclear iraní en noviembre, bajo el argumento de que la falta de acuerdo era mejor que un mal acuerdo. Israel mantuvo así su discurso crítico y escéptico hacia Irán, que en agosto informó que había derribado un avión no tripulado presuntamente israelí mientras sobrevolaba las instalaciones del complejo nuclear de Natanz. Rusia, en tanto, acordó con Irán la construcción de dos nuevos reactores en Busher, bajo supervisión de la AIEA.

Después de casi un año de negociaciones, Irán y las potencias del G5+1 decidieron ampliar el plazo para el diálogo y se fijaron mediados de 2015 como límite para un acuerdo definitivo

Yemen	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, fuerzas de seguridad, milicias progubernamentales, militares desertores, grupos tribales armados, sectores políticos y sociales

Síntesis:

En los últimos años la situación en Yemen se ha caracterizado por un clima de creciente inestabilidad determinado por la presencia de una insurgencia shíi en el norte (al-houthistas), un movimiento secesionista en el sur y por una creciente actividad de al-Qaeda en el territorio. El clima interno se agravó a partir de 2011, en el marco de las revueltas árabes, cuando la población se movilizó en rechazo a los intentos del presidente Alí Abdullah Saleh por perpetuarse en el poder tras cumplir más de tres décadas en el cargo. Las protestas

pacíficas, reprimidas con extrema violencia por el régimen, se vieron eclipsadas por crecientes enfrentamientos armados entre partidarios y detractores del régimen, involucrando a las fuerzas de seguridad, milicias tribales anti y progubernamentales y a unidades desertoras del Ejército. Tras la firma de un acuerdo de transición a finales de 2011 que determinó la salida de Saleh de la presidencia, el país inició un accidentado proceso de transición pleno de desafíos.

El proceso de transición en Yemen sufrió un grave deterioro a lo largo de 2014, en un contexto de creciente polarización y violencia en el país.³⁸ Se estima que los diversos conflictos que enfrenta Yemen causaron la muerte de más de un millar de personas, la cifra más alta desde la convulsión que acabó en la salida del poder de Alí Abdullah Saleh,³⁹ y hacia finales de año la situación política se caracterizaba por una extrema fragilidad. El año se inició con ciertas expectativas, debido a que en enero la Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) presentó sus conclusiones después de meses de conversaciones, que se iniciaron en marzo de 2013. Los más de 500 delegados que participaron en la iniciativa dieron a conocer cerca de 1.400 recomendaciones que debían convertirse en una especie de hoja de ruta y en la base de los debates sobre la nueva Constitución para el país. El trabajo

de las nueve comisiones de la CDN arrojó sugerencias como la abolición del matrimonio infantil, la promoción de los derechos de la mujer –incluyendo una cuota de representación de 30% en el ámbito público–, medidas para revertir la marginalización del sur o la creación de un sistema federal. Este último fue uno de los temas más espinosos, ya que la CDN no se pronunció sobre el número de entidades que compondrían la fórmula federal y descartó la opción de independencia del sur como reclamaban sectores secesionistas de la zona meridional. La CDN dio un mandato al presidente, Abdo Rabbo Mansour Hadi, para formar una comisión que definiera el número de regiones en las que debía subdividirse el país. Tras dos semanas de trabajo, este comité resolvió en febrero que el sistema federal yemení debía estar integrado por seis regiones, una fórmula que dejó descontentos a algunos sectores del país. Hadi también extendió un año más el proceso de transición fijado por el acuerdo promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la ONU a finales de 2011, con el fin de dar tiempo a la elaboración de la Constitución y a la celebración de un referéndum previo a la convocatoria de nuevas elecciones. La designación del comité responsable de redactar la nueva Carta Magna fue motivo de una nueva controversia, por diversas razones. Las críticas apuntaron al número de integrantes –la CDN había recomendado 30 personas y Hadi nombró a 17–; a problemas de representatividad –sectores como el Partido Socialista o grupos de jóvenes se sintieron ex-

38. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) y el resumen sobre Yemen (AQPA) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y el resumen sobre Yemen (sur) en este capítulo.

39. IRIN, “Yemen: What’s Next?”, *IRIN*, 22 de diciembre de 2014, <http://www.irinnews.org/report/100965/yemen-what-next>.

cluidos, y no se cumplió con la cuota mínima de 30% para mujeres, ya que sólo había cuatro participantes–; y a la experiencia del equipo, que no habría contado con elementos suficientes como para debatir temas complejos y relevantes como la fórmula federal aplicable en el país. Hadi también fue cuestionado por dar un año de plazo al comité –la CDN había sugerido seis meses–, en lo que fue interpretado como un intento del mandatario por ampliar su permanencia en el poder.

La situación del gobierno se vio afectada además por acusaciones de corrupción y por el rechazo a algunas de sus políticas. En conjunto, el malestar por estos diversos factores motivó multitudinarias manifestaciones que exigieron la dimisión del Ejecutivo y el fin de las operaciones estadounidenses con aviones no tripulados en el país.⁴⁰ En este contexto, surgieron rumores sobre intentos de desestabilización por parte de sectores del Ejército leales a Saleh, ante lo cual el Gobierno ordenó la retirada de la artillería pesada de los alrededores de la capital y dispuso el cierre de medios de comunicación de propiedad del ex presidente. **El escenario se complicó a mediados de año por las dificultades del Gobierno para pagar salarios, las acciones de sabotaje que dejaron a la capital sin electricidad durante días y, en especial, como consecuencia de la decisión de las autoridades de suspender los subsidios a los combustibles a fines de julio.** Las protestas se multiplicaron y subieron de tono, en especial en Sanaa, y, en paralelo, se organizaron contramanifestaciones, evidenciando el clima de polarización. En este contexto, se produjeron hechos de violencia que causaron numerosas muertes en la ciudad que, en septiembre, pasó a estar controlada por las fuerzas al-houthistas. Tras protagonizar una intensa campaña armada durante el primer semestre y ampliar sus áreas de influencia desde su feudo tradicional en el norte del país, los al-houthistas –que habían liderado también las protestas contra el Gobierno–, forzaron un cambio político que se materializó en la renuncia del primer ministro Mohamed Basindawa. A finales de septiembre, y bajo los auspicios de la ONU, se firmó un acuerdo de paz que contemplaba la implementación de los acuerdos alcanzados en el marco de la CDN, la formación de un gobierno inclusivo, la adopción de medidas anti-corrupción y el inicio del desarme de los actores no estatales.⁴¹

Pese a la formación de un nuevo Gobierno encabezado por el primer ministro Khalid Bahah, la situación a finales de año continuaba siendo de creciente violencia e inestabilidad política. **A pesar de que el acuerdo de paz llamaba a los al-houthistas a replegarse de la capital, a finales de 2014 el grupo mantenía sus posiciones en Sanaa y un discurso desafiante hacia las autoridades,** con acusaciones de corrupción contra Hadi quien, a su

vez, criticó la expansión territorial del grupo del norte. El mandatario también fue objeto de crecientes ataques desde el seno de su propio partido, que es también el de Saleh, el Congreso General del Pueblo (CGP). La formación decidió apartar a Hadi –ex vicepresidente de gobierno durante el último mandato de Saleh– del liderazgo del partido. La medida se produjo poco después de que el Consejo General de la ONU aprobara sanciones contra Saleh y dos comandantes al-houthistas por desestabilizar la transición yemení. A mediados de diciembre, menos de un mes después de asumir el poder, el Gobierno de Bahah amenazaba con renunciar, pero recibió un voto de confianza del Parlamento. Analistas advertían sobre la extrema vulnerabilidad del país, con la mitad de la población necesitada de ayuda humanitaria urgente y con la economía en vilo, tras la decisión de Arabia Saudita de suspender la ayuda ante los avances al-houthistas, por su proximidad ideológica con Irán.

El proceso de transición en Yemen se vio seriamente afectado durante 2014 por un contexto de convulsión y violencia que a finales de año amenazaba con llevar al país a un escenario de mayor inestabilidad y fragmentación

Yemen (sur)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Territorio Interna
Actores:	Gobierno, grupos de oposición autonomistas y secesionistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur/Al-Hiraak al-Janoubi)

Síntesis:

El Yemen actual es resultado de un problemático proceso de unificación que en 1990 fusionó la República Árabe de Yemen (RAY), en el norte, con la República Democrática Popular de Yemen (RPDY), en el sur. Desde entonces, la balanza de poder se inclinó hacia el norte y el presidente Ali Abdullah Saleh (mandatario de la ex RAY desde 1978 y del Yemen unificado desde 1990) gobernó sin alternancia hasta su salida forzada del poder en 2012. El frágil equilibrio político definido tras la instauración del nuevo Estado derivó en el estallido de una guerra civil en 1994, que culminó con la victoria de las fuerzas septentrionales. Las tensiones persisten desde entonces y en los últimos años se han intensificado las manifestaciones que denuncian una discriminación hacia el sur –en especial en lo que se refiere al control de los recursos–, así como los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El movimiento de contestación del sur no está articulado en una sola organización y reúne a grupos con diversas agendas, que exigen desde una mayor autonomía hasta la secesión y que presionan por una nueva relación norte-sur en el marco del proceso de transición iniciado en Yemen en 2011.

La disputa entre sectores secesionistas del sur y el Gobierno central de Yemen se vio directamente determinada por la evolución general de los acontecimientos en el

40. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

41. Véase el capítulo 3 (Procesos de paz).

país durante 2014, caracterizada por la expansión de la influencia y el dominio de los al-houhtistas –grupo insurgente del norte del país– y por una creciente inestabilidad política que a finales de año puso al país al borde del caos.⁴² Durante el primer semestre del año, y en línea con las dinámicas del conflicto en 2013, **las tensiones norte-sur se evidenciaron en las periódicas movilizaciones de sectores separatistas en diversas localidades del sur como Mukalla, al-Dhalia y Aden –algunas de las cuales derivaron en incidentes en los que murieron varias personas–, y en los desacuerdos respecto a las propuestas para definir el futuro político del país en el marco del proceso de transición.** En este sentido, varios grupos del sur manifestaron su rechazo a las conclusiones de la Conferencia de Diálogo Nacional (CDN), que dio a conocer sus resultados en enero tras meses de debates. En particular, algunos sectores meridionales cuestionaron la decisión de promover una fórmula federal para el país. Dado que la CDN no consiguió ponerse de acuerdo sobre el número de regiones, finalmente fue un comité designado por el presidente Abo Rabbo Mansour Hadi, que resolvió estructurar el país en torno a seis regiones, dos de ellas en el sur: Adén y Hadramawt. Esta decisión contó con la firme oposición de sectores del sur. En los meses siguientes continuaron produciéndose manifestaciones de grupos del sur que congregaron a miles de personas, algunas de ellas con ocasión de efemérides como el aniversario de la breve República Democrática de Yemen proclamada en 1994 –cuatro años después de la unificación entre el norte y sur de Yemen y que derivó en una guerra civil en la que se impusieron las fuerzas del norte. En este contexto, uno de los líderes del movimiento del sur, Ali Salem al-Baid, instó desde su exilio en Líbano a las autoridades yemeníes a iniciar conversaciones para facilitar la creación de un estado independiente en la zona meridional y evitar un derramamiento de sangre.

A partir del segundo semestre, la agudización de la crisis general en el país tras el desafío de los al-houthistas –que tomaron la capital del país, Sanaa, y forzaron un cambio de gobierno–, favoreció nuevas movilizaciones masivas a favor de la independencia del sur. Además, algunos representantes del movimiento del sur dieron un ultimátum a las autoridades del Gobierno central para retirar a sus funcionarios y a los efectivos de las fuerzas de seguridad de la región. Paralelamente, en septiembre, un grupo de ex soldados y antiguos altos mandos militares del Ejército del sur anunciaron el establecimiento de un consejo castrense. **Los miembros de este consejo militar hicieron llamamientos a la población a manifestarse de manera masiva y a organizar una campaña de desobediencia civil con el fin de tomar el control de las ciudades del sur y, finalmente, declarar la independencia.** A finales de noviembre, con motivo del 47º aniversario de la independencia del sur del dominio británico, miles de personas volvieron a salir a las calles y uno de los principales líderes de Hiraak (movimiento

del sur), Hassam Ba'oum, ratificó que la secesión del sur era cuestión de tiempo. En declaraciones a la prensa, el dirigente detalló que se habían puesto en marcha diversos procesos de consulta con el fin de asegurar que el movimiento hacia la independencia fuera pacífico y que ya se estaba discutiendo un calendario con miras a proclamar un Estado independiente en el sur. Fuentes del movimiento aseveraron que el proceso incluía medidas destinadas a tomar el control de las infraestructuras e instituciones estatales en el sur. Aun reconociendo que la situación en Yemen había abierto una ventana de oportunidad para la independencia de la zona meridional, algunos expertos alertaron que un proceso de este tipo debería sortear diversos obstáculos. Entre ellos, la fragmentación y divisiones que persisten entre los diversos grupos en la zona sur –un faccionalismo que es extensivo al resto de Yemen–, la falta de una figura carismática capaz de aglutinar a los diferentes sectores y guiar el proceso hacia la secesión, y las diferencias sobre una fórmula aceptable para el futuro del sur, ya que en el sur conviven grupos dispuestos a aceptar la solución federal de seis regiones, otros que creen en una federación de dos Estados y otros que no están dispuestos a aceptar otra vía que no sea la independencia.⁴³

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, Hermanos Musulmanes (HM) y su brazo político Partido Libertad y Justicia (PLJ), Fuerzas Armadas, coalición Frente de Salvación Nacional (FSN), partido salafista al-Nour, Movimiento Tamarod, Movimiento 6 de Abril, coalición islamista Alianza para el Apoyo de la Legitimidad

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación

42. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y sobre Yemen en este capítulo.

43. Saeed al-Batati, “Divided south Yemen separatists vow to achieve independence”, *Middle East Eye*, 30 de septiembre de 2014, <http://www.middleeasteye.net/news/divided-south-yemen-separatists-vow-achieve-independence-830553601>.

de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Egipto continuó siendo escenario de una gran convulsión interna, continuas manifestaciones, enfrentamientos entre sectores disidentes y las fuerzas gubernamentales, persecución a sectores de la oposición –islamistas y no islamistas–, además de una creciente influencia de los sectores militares en la vida política del país, intensificada tras el golpe castrense contra el Gobierno de los Hermanos Musulmanes (HM) a mediados de 2013. Los diversos hechos de violencia que se produjeron en el país a lo largo de 2014 provocaron la muerte de más de un centenar de personas. En paralelo a la creciente actividad insurgente de grupos armados con base en el Sinaí –que, en parte, justificaron sus acciones como respuesta a las políticas de acoso a los islamistas impulsadas por las autoridades egipcias–,⁴⁴ se produjeron numerosas muertes en el marco de manifestaciones contra el Gobierno. **Algunos de los incidentes más graves se produjeron a principios de año, coincidiendo con las protestas con motivo de un nuevo aniversario de la revuelta contra el régimen de Hosni Mubarak** –un total de 49 personas perdieron la vida el 25 de enero–, y en el marco de las movilizaciones que derivaron en choques con las fuerzas de seguridad en vísperas de la celebración de un referéndum sobre la nueva Constitución –una treintena de personas murió en estos hechos. La consulta se realizó en medio de los llamamientos al boicot por parte de sectores de la oposición, incluyendo los ilegalizados HM y la coalición Alianza de Apoyo a la Legitimidad, de órbita islamista. Según los datos oficiales, el texto constitucional fue aprobado por un 98% de los sufragios en una votación que concitó la participación de un 39% del electorado y que motivó denuncias de irregularidades. Diversos sectores cuestionaron algunos aspectos de la nueva Constitución, en particular las medidas que consagran una mayor influencia de los sectores castrenses, como la capacidad de las Fuerzas Armadas para enjuiciar civiles, la ascendencia de los militares a la hora de nombrar el ministro de Defensa y la continuidad de los presupuestos castrenses sin escrutinio civil. **El renovado y creciente protagonismo de los militares en la vida política egipcia se escenificó de una manera aún más explícita tras el triunfo en las elecciones presidenciales del general golpista y ex ministro de Defensa, Abdel Fattah al-Sisi.** Tras ser ascendido a mariscal de las Fuerzas Armadas en enero, al-Sisi renunció a la carrera militar para presentarse a los comicios celebrados en mayo, en los que tuvo como único compe-

tidor al político Hamdeen Sabahi. Las autoridades electorales extendieron un día más la jornada de votación en un intento por favorecer una mayor participación –que según cifras oficiales alcanzó un 46%– y así dotar de una mayor legitimidad a unos resultados previsibles, que arrojaron a al-Sisi como vencedor con un 96,9% de los sufragios.

El nuevo mandatario no dio señales de querer establecer puentes con sectores críticos y, por el contrario, mantuvo las políticas de persecución a la disidencia. A lo largo de 2014, la campaña de acoso a sectores vinculados a los HM continuó caracterizándose por la detención de numerosas personas –según estimaciones de prensa, más de 16.000 personas sospechosas de simpatizar con los HM habían sido arrestadas tras el golpe militar–, así como por juicios masivos y condenas a muerte contra cientos de personas por su presunta implicación en hechos de violencia en los últimos años, incluyendo al líder espiritual de los HM, Mohamed Badie. Otros dictámenes judiciales ordenaron la disolución del Partido Libertad y Justicia de los HM y de la Alianza de Apoyo a la Legitimidad que aglutinaba a sectores próximos a los HM y a otros sectores islamistas. La persecución a sectores de la oposición no islamista también se intensificó y afectó a grupos y personas emblemáticas en la revuelta contra Mubarak, entre ellos al Movimiento 6 de Abril –ilegalizado– y dirigentes como Alaa Abdelfatah, protagonista de las protestas en la Plaza Tahrir, condenado a 15 años de cárcel por participar en una protesta no autorizada. Asimismo, se informó de la detención de cientos de estudiantes tras incidentes en campus universitarios. En conjunto, esta situación llevó a diversas ONG internacionales de derechos humanos a denunciar las restricciones a las libertades en el país, el acoso a la oposición y el extensivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad egipcias en su campaña contra la disidencia. Amnistía Internacional denunció que el sistema judicial egipcio amenazaba con convertirse en una pieza más de la maquinaria represiva de las autoridades, mientras que Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que señaló a altos cargos del régimen, incluyendo a al-Sisi, por su responsabilidad en la muerte de manifestantes tras el golpe contra el Gobierno de los HM. **Egipto también fue objeto de duras críticas por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que exigió una investigación de los abusos de las fuerzas de seguridad y la liberación de presos políticos.** Cabe destacar que durante el último trimestre, tras un ataque que causó la muerte a 33 soldados en octubre en el Sinaí, el Gobierno amplió los poderes al Ejército, incluyendo la jurisdicción a las cortes castrenses para enjuiciar a civiles. En este contexto, al finalizar 2014 más de 800 personas habían sido referidas a cortes militares. Hacia finales de año el Gobierno también finalizó la redacción de una nueva ley electoral, que suscitó críticas por haber sido elaborada sin consulta a los partidos y por permitir el retorno de dirigentes vinculados al antiguo Partido Nacional Democrático (PND) de Mubarak. Previamente, un pronunciamiento judicial había levantado la prohibición a

44. Véase el resumen sobre Egipto Sinaí en el capítulo 1 (Conflictos armados).

miembros del PND para participar en elecciones locales y parlamentarias y otro, en noviembre, retiró los cargos contra Mubarak por las muertes de manifestantes durante la revuelta de 2011. Los comicios legislativos están previstos para marzo de 2015.

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno de la Región del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán

Síntesis:

Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno de la Región del Kurdistán (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados “territorios en disputa” y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

La situación en el Kurdistán iraquí se vio directamente influida por la convulsión general en el país y por el avance del grupo armado radical Estado Islámico (ISIS) hacia territorios próximos a los administrados por el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) a mediados de año.⁴⁵ Los acontecimientos incidieron en las dinámicas de relación entre Erbil y Bagdad, que en los primeros meses de 2014 continuaron caracterizándose por discrepancias en temas como la gestión de los recursos energéticos. **Ambas administraciones se enfrentaron en mayo por la decisión del KRG de poner en marcha la venta de crudo a través de un oleoducto que conecta el territorio kurdo con el puerto turco de Ceyhan, pese a la férrea oposición del Gobierno de Nouri al-Maliki.** Las autoridades de Bagdad se quejaron de Turquía e interpusie-

La situación en Egipto continuó caracterizándose por un elevado clima de tensión, periódicos hechos de violencia y por una creciente influencia de los sectores militares en la vida política del país

ron una reclamación formal ante la Cámara de Comercio Internacional con la intención de bloquear la venta de este petróleo. Adicionalmente, durante el primer semestre se produjeron algunos hechos de violencia relevantes que afectaron a intereses kurdos, como el ataque suicida contra la sede del partido Patriotic Union of Kurdistan (PUK) en Khanaqin (localidad de mayoría kurda al noreste de Bagdad) en el que murieron una treintena de personas en mayo. Semanas después, otro ataque explosivo contra oficinas de partidos kurdos también causó numerosas víctimas. Sin embargo, los hechos más desestabilizadores se produjeron en el marco de la ofensiva de ISIS sobre Mosul y otras localidades del norte del país en junio. **Ante el avance del grupo yihadista y el repliegue de las tropas iraquíes, las fuerzas de seguridad kurdas (peshmergas) se movilizaron para frenar a los combatientes de ISIS y asegurar el control de sitios emblemáticos próximos al área del KRG, entre ellos Kirkuk.** Las autoridades kurdas consolidaron su dominio de Kirkuk, una localidad rica en recursos petroleros y uno de los principales territorios en disputa entre Bagdad y Erbil. Las fuerzas kurdas fueron percibidas como mejor entrenadas y organizadas para enfrentar la amenaza de ISIS y se convirtieron en receptoras preferentes de la ayuda internacional en cuanto a recursos económicos, arsenales y entrenamiento. El cerco a la minoría yazidí y el riesgo de que ISIS avanzara hacia Erbil –sede de importantes empresas e intereses occidentales– motivó, a su vez, una nueva intervención militar de EEUU en la región en agosto. Con apoyo aéreo estadounidense, los peshmergas y unidades del Ejército iraquí recapturaron sitios estratégicos como la presa de Mosul y la localidad de Amerli. Las fuerzas de seguridad del KRG también jugaron un papel destacado en la lucha contra ISIS en áreas de mayoría kurda en Siria, como la emblemática ciudad de Kobane.⁴⁶

En este contexto de convulsión y, al mismo tiempo, de ampliación del dominio kurdo en el norte de Iraq, diversos dirigentes kurdos subrayaron que las fronteras, en la práctica, ya habían cambiado y el presidente del KRG, Massud Barzani, anunció su intención de celebrar un referéndum sobre la independencia del territorio kurdo iraquí. Esta aproximación motivó una dura respuesta del Gobierno de al-Maliki, que acusó al KRG de colaboración con ISIS. Tras el boicot de los ministros kurdos a las reuniones del Gobierno central, el mandatario destituyó al ministro de Exteriores, Hoshyar Zebari. Este escenario propició que diversas personas expertas analizaran las posibilidades de un Estado kurdo independiente, aunque subrayando los diversos obstáculos que debería enfrentar. Entre ellos, la resistencia de EEUU a una partición de Iraq, las dificultades para fijar los límites de una eventual entidad política kurda, los celos de Turquía y las habituales divisiones en el

45. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

46. Véase el resumen sobre Siria-Turquía en este capítulo.

seno de la dirigencia kurda.⁴⁷ Pese a los intensos debates sobre el tema a mediados de año, las autoridades kurdas optaron por colaborar con el proceso político a nivel federal, tras la salida del poder de al-Maliki en agosto, después de ocho años en el cargo. Zebari y otros dirigentes kurdos se sumaron al Gobierno de unidad nacional con el fin de centrar los esfuerzos en el combate a ISIS y la gestión de la crisis de seguridad, postergando sus anhelos de referéndum. Cabe destacar, en todo caso, que la participación kurda en el nuevo escenario político iraquí fue condicionada a una serie de requisitos, entre ellos abordar temas clave como el control de las reservas de petróleo y gas, la distribución de las ganancias de petróleo entre Erbil y Bagdad y el futuro de los “territorios en disputa”. Así, a finales de año se anunció un acuerdo entre el KRG y el Gobierno federal según el cual las autoridades kurdas se comprometían a entregar 250.000 barriles diarios para ser vendidos por Bagdad, mientras que otros 300.000 serían canalizados a través del oleoducto que conecta el KRG con Turquía. Adicionalmente, Bagdad retomaría la entrega del 17% de los ingresos del petróleo para el presupuesto del KRG. Cabe destacar que una de las consecuencias de la intensificación del conflicto en Iraq y los avances de ISIS fue la llegada de miles y miles de personas al territorio controlado por el KRG, tanto desplazadas internas provenientes de otras áreas de Iraq como refugiadas procedentes de Siria. Según datos del Ministerio de Planificación del KRG y de la OIM, casi un millón de iraquíes buscaron refugio en el territorio kurdo entre enero y diciembre de 2014.

Israel – Siria, Líbano

Intensidad: 3

Evolución: =

Tipología: Sistema, Recursos, Territorio Internacional

Actores principales: Israel, Siria, Líbano, grupo libanés Hezbollah y su brazo armado (Resistencia Islámica)

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de refugiados palestinos que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado shií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre

Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión internacional que involucra a Israel, Siria y Líbano continuó manifestándose en periódicos hechos de violencia que habrían causado más de una veintena de víctimas mortales y diversos heridos. A lo largo de 2014, informaciones de prensa alertaron sobre incidentes de fuego cruzado en la zona fronteriza entre Siria e Israel y sobre incursiones aéreas de las fuerzas israelíes en territorio sirio. En este sentido, a principios de año algunas fuentes señalaron que Israel había atacado una base militar en el puerto de Latakia –aunque los hechos no fueron confirmados oficialmente– y que también apuntó a objetivos de Hezbollah en la zona limítrofe, supuestamente con el objetivo de desbaratar una operación de transporte de armas. Cabe destacar que **la zona de los Altos del Golán fue escenario de diversos incidentes**, entre ellos la muerte de dos presuntos milicianos de la milicia shií libanesa a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en marzo; un ataque contra una patrulla israelí que semanas después dejó a varios soldados heridos –y que Israel respondió con una ofensiva en la que murió un soldado sirio–; y la muerte de un adolescente árabe-israelí a causa de proyectiles lanzados desde Siria en junio. Esta última acción motivó una respuesta militar por parte de Israel contra varios objetivos en Siria y que habría provocado la muerte de entre cuatro y diez personas, según diferentes recuentos. No estaba claro si los proyectiles habían sido lanzados por grupos armados de la insurgencia siria o por fuerzas gubernamentales, pero las autoridades de Damasco reaccionaron con una condena a los ataques aéreos israelíes. En el área de los Altos del Golán también se produjo el secuestro, a finales de agosto, de 45 miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, UNDOF (por sus siglas en inglés), desplegada en la zona para monitorear el cese el fuego suscrito entre Israel y Siria tras la guerra de 1973. El rapto fue reivindicado por el grupo yihadista Frente al-Nusra, considerado como filial de al-Qaeda en Siria. Los soldados, procedentes de Fiji, fueron liberados a mediados de septiembre. Tras el incidente, países que aportan tropas a la misión internacional expresaron su preocupación y algunos –como Filipinas– anunciaron la retirada de sus fuerzas de la región. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon subrayó que (tras más de cuatro décadas) el acuerdo de separación entre las fuerzas israelíes y sirias se mantiene, pero en un entorno de seguridad cada vez más inestable y precario debido a las dinámicas de la guerra en Siria.⁴⁸ El Consejo de Seguridad de la ONU también aprobó una resolución que condena a grupos armados sirios por el uso de artefactos explosivos en la zona bajo vigilancia de la UNDOF.

47. Véase Joost Hiltermann, “Kurdish Independence: Harder Than It Looks”, *The New York Times Review of Books*, 10 de julio de 2014, <http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/jul/10/kurdish-independence-harder-than-it-looks/>, y Serhun Al, “Debating a Kurdish State”, *Sada*, Carnegie Endowment for International Peace, 12 de Agosto de 2014, http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=56374&solr_hilite=

48. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación para el período comprendido entre el 4 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014*, S/2014/859, 1 de diciembre de 2014, <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/859>.

Durante el año también se produjeron escaramuzas en la zona fronteriza entre Israel y Líbano, incluyendo un ataque israelí con artillería en territorio libanés tras una explosión que alcanzó a una patrulla israelí en la zona de las granjas de Shebaa en marzo;⁴⁹ al menos nueve incidentes por disparos de proyectiles desde Líbano hacia Israel, que se intensificaron como resultado del incremento de la tensión en la zona tras el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en julio;⁵⁰ y nuevos intercambios de disparos entre militares israelíes y libaneses en las granjas de Shebaa que dejaron tres heridos en octubre.⁵¹ Además se produjeron incursiones aéreas casi a diario en el espacio aéreo libanés por parte de aviones y aparatos no tripulados israelíes, situación que fue denunciada por la ONU como una violación a la resolución 1701 (2006) y a la soberanía de Líbano. Paralelamente, cabe destacar que diversos análisis subrayaron que la implicación del grupo shií libanés Hezbollah en el conflicto armado en Siria, en apoyo al régimen de Bashar al-Assad, ha supuesto un cambio en sus objetivos estratégicos que está teniendo un impacto en la identidad y el reconocimiento del grupo a nivel regional. La alianza con Damasco, un alineamiento que expertos catalogan como inevitable dada la proximidad de Hezbollah con el régimen sirio, ha supuesto que el grupo está siendo crecientemente identificado con un perfil sectario –en un contexto de incremento de las tensiones entre sunnís y shiíes– y ha mermado la valoración del grupo, que hasta ahora también incluía a sectores sunnís, por su papel en la lucha contra Israel.⁵²

Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah, Coalición opositora 14 de marzo (liderada por el Movimiento Futuro), Amal, Movimiento Patriótico Libre, Partido Árabe Democrático (alauí), Hizb ul-Tahrir, milicias, Brigadas Abdullah Azzam (vinculadas a al-Qaeda)

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por

otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

La situación en Líbano continuó estando directamente influida por el conflicto armado en la vecina Siria, y se caracterizó por numerosos hechos de violencia que causaron decenas de víctimas mortales y que se intensificaron durante el segundo semestre de 2014. Estimaciones parciales a partir de informaciones de prensa apuntan a que **más de 200 personas habrían fallecido a lo largo del año en diversos incidentes, principalmente a causa de enfrentamientos de milicianos de Hezbollah y soldados libaneses con miembros de grupos armados yihadistas con base en Siria, ataques suicidas y atentados contra barrios shiíes o zonas consideradas como bastiones de Hezbollah** –en represalia por la participación del grupo en la guerra siria en apoyo al régimen de Damasco–, y ofensivas aéreas o con proyectiles desde Siria en zonas fronterizas, entre otros hechos. Como en años anteriores, los principales escenarios de la violencia fueron la capital libanesa, Beirut; la ciudad de Trípoli; y el Valle de Bekaa. Durante el primer semestre, uno de los hechos destacados fue el atentado contra el centro cultural iraní de Beirut en febrero, que se saldó con ocho víctimas mortales y fue reivindicado por las Brigadas Abdullah al-Azzam, grupo local presuntamente vinculado a al-Qaeda. Poco antes, el líder de la organización –que también perpetró un doble ataque suicida contra la embajada iraní en Líbano a finales de 2013– había muerto mientras permanecía bajo custodia militar. Paralelamente, otros ataques con bomba y atentados suicidas fueron reivindicados por grupos armados sunnís con base en Siria como el Frente al-Nusra y Estado Islámico (ISIS), que mostraron una creciente implicación en territorio libanés. Esta tendencia se hizo especialmente evidente en agosto, **cuando las Fuerzas Armadas libanesas y milicianos –incluyendo elementos del Frente al-Nusra e ISIS– libraron cruentos combates por el control de la localidad de Aarsal que provocaron la muerte a un centenar de personas**. Estos choques armados fueron considerados como los más graves en Líbano como consecuencia de la guerra en Siria. La disputa se habría iniciado tras la captura de un dirigente del Frente al-Nusra o ISIS, lo que motivó que los combatientes sirios atacaran puestos de control militares libaneses, instalaciones gubernamentales e intentaran tomar el control de la localidad. Las fuerzas libanesas respondieron con el apoyo de la Fuerza Aérea siria. Tras varios intentos frustrados de alto el fuego, las hostilidades cesaron tras una

49. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre la implementación de la resolución 1701 (2006)*, S/2014/438, 26 de junio de 2014, <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/438>.

50. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

51. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre la implementación de la resolución 1701 (2006)*, S/2014/784, 5 de noviembre de 2014, <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/784>.

52. International Crisis Group, *Lebanon's Hizbollah Turns Eastward to Syria*, Middle East Report no. 153, 27 de mayo de 2014, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/syria-lebanon/lebanon/153-lebanon-s-hizbollah-turns-eastward-to-syria.aspx>.

tregua facilitada por líderes religiosos sunníes de la Asociación de Clérigos Musulmanes, lo que derivó en el repliegue de las fuerzas yihadistas de la zona. En el marco de la lucha por Arsal, tanto ISIS como el Frente al-Nusra tomaron como prisioneros a una treintena de policías y soldados libaneses y exigieron la excarcelación de prisioneros islamistas como condición para su liberación. En las semanas siguientes, tres de los militares capturados fueron ejecutados y en diciembre otro fue asesinado en represalia por la detención de familiares de altos dirigentes del Frente al-Nusra e ISIS en Líbano.

Durante el último trimestre continuaron produciéndose enfrentamientos –incluyendo combates de presuntos milicianos del Frente al-Nusra con las fuerzas de seguridad libanesas y miembros de Hezbollah– y ataques en Arsal y otras localidades como Baalbek, Britel o Labweh, algunas de ellas en represalia por las operaciones militares en Trípoli. En esta ciudad, en octubre, tres días de duros combates entre el Ejército y presuntos milicianos yihadistas provocaron la muerte de más de 40 personas. Los incidentes se habrían iniciado tras la muerte de otros tres milicianos, supuestamente vinculados a ISIS, en una localidad cercana a Trípoli. Los enfrentamientos causaron el desplazamiento forzado de centenares de personas y causaron gran destrucción en el barrio de Bab-el-Tebbaneh, de mayoría sunní y usado como bastión por los milicianos insurgentes. Los hechos también intensificaron las críticas contra las fuerzas de seguridad libanesas, acusadas de actuar con discrecionalidad –dando margen de acción a algunas milicias y persiguiendo de manera más intensa e indiscriminada a sectores sunníes–, de alinearse con Hezbollah, y de favorecer con sus acciones el incremento de las tensiones sectarias. El Ejército libanés puso en marcha en abril un plan de seguridad, acordado con diversas fuerzas políticas, con el objetivo de contener las dinámicas de violencia en el país. El plan supuso un mayor despliegue militar en Beirut, Trípoli y en las áreas fronterizas con Siria, así como redadas, patrullajes, operaciones de rastreo, decomiso de armas y detenciones de sospechosos. En este contexto, y en especial tras los hechos de Arsal, también se incrementó la preocupación y las críticas por acciones de las fuerzas de seguridad libanesas hacia la población refugiada siria, entre ellas detenciones y agresiones a personas consideradas sospechosas de vínculos con ISIS o el Frente al-Nusra. Aunque en términos generales se mantuvieron las muestras de solidaridad y acogida, **los hechos de Arsal exacerbaron los sentimientos de hostilidad en sectores libaneses hacia la población refugiada siria, que a finales de 2014 superaba el 1,1 millón de personas.** Según informaciones de prensa, miles de sirios y sirias fueron expulsados de Arsal tras los incidentes de agosto, se produjeron actos de venganza, ataques a campamentos y un menor sirio murió tiroteado. ONG y diversas voces en Líbano advirtieron de

la intensificación de las tensiones y alertaron que estos y otros hechos no hacían más que alimentar los recelos sectarios y favorecer la radicalización de sectores sunníes. A finales de año, y ante la falta de apoyo internacional para enfrentar la crisis de desplazamiento forzado provocada por la guerra en Siria, las autoridades libanesas anunciaron restricciones al ingreso de nuevos refugiados y la exigencia de visados a partir de 2015.

Cabe destacar que el conflicto también tuvo un impacto en –y reflejó los problemas de– la política libanesa. Las autoridades fueron criticadas por no desarrollar una estrategia para enfrentar el problema de las personas refugiadas, por apostar por una aproximación meramente militar ante el incremento de la confrontación –sin abordar otros aspectos relevantes de la disputa– y por continuar enfrascados en pugnas intestinas que bloquearon la actividad política.⁵³ **Si bien a principios de 2014 el primer ministro Tamam Salam logró formar un nuevo gabinete –tras un año de gestiones–, hasta finales de año el país continuaba sin presidente tras el fin del mandato de Michel Suleimán en mayo.** El Parlamento pospuso a finales de enero la elección, tras 17 intentos infructuosos de escoger un nuevo jefe de Estado. En noviembre, mes en que debían celebrarse elecciones, el Legislativo también resolvió extender su propio mandato hasta 2017 argumentando preocupaciones de seguridad vinculadas con la guerra en Siria, en una medida que despertó críticas en diversos sectores de la población libanesa. Finalmente, cabe mencionar que diversos análisis llamaron la atención sobre las consecuencias de la implicación de Hezbollah en el conflicto armado en Siria, en términos de su identidad y de su legitimidad en la región.⁵⁴ Ello, porque el reconocimiento que mantenía entre algunos sectores, incluyendo sunníes, por su papel en la lucha contra Israel se ha visto afectado por su posicionamiento junto a Damasco, en un contexto de agravamiento de las tensiones sectarias.⁵⁵

Palestina	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	AP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedine al-Qassam
Síntesis:	La oposición entre los distintos sectores palestinos en las últimas décadas ha estado protagonizada principalmente por grupos nacionalistas laicos por una parte (Fatah y su brazo armado –las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa–, FPLP, FDLP) y grupos confesionales por otra (Hamas y su brazo

53. Carnegie Endowment for International Peace, *What's at the heart of Lebanon's Troubles?*, Sada Debates, Carnegie Endowment for International Peace, 3 de octubre de 2014, http://carnegieendowment.org/sada/index.cfm?fa=show&article=56830&solr_hilite=

54. Sahar Atrache, "How Hezbollah Is Changing the War in Syria - and Vice Versa", *Huffington Post*, 6 de junio de 2014, http://www.huffingtonpost.com/sahar-atrache/hezbollah-war-syria_b_5455850.html.

55. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en este capítulo.

armado –Brigadas Ezzedine-al-Qassam–, Yihad Islámica). El enfrentamiento responde a la voluntad de controlar el poder dentro de los territorios palestinos y se ha traducido, a su vez, en diferentes aproximaciones respecto a las relaciones con Israel. Tras años de dominio de Fatah en la política palestina, las acusaciones de corrupción y de no defender los intereses palestinos en el proceso de paz desencadenaron el triunfo de Hamas en las elecciones de enero de 2006. Este hecho precipitó una batalla dialéctica y armada entre ambas formaciones por el control de las instituciones políticas y, sobre todo, de las fuerzas de seguridad. En 2011 Hamas y Fatah anunciaron un acuerdo de reconciliación. Sin embargo, las discrepancias entre ambas formaciones han persistido, dificultando la formación de un gobierno de unidad nacional. Los cambios en la región en el marco de las revueltas árabes también han tenido una influencia relevante en los avances y retrocesos del proceso de reconciliación, al que Israel se opone abiertamente.

La evolución de la tensión entre las facciones palestinas en 2014 tuvo una trayectoria muy similar a la del año anterior, con un primer semestre marcado por hechos que alentaron las expectativas sobre una posible reconciliación entre Fatah y Hamas y un segundo semestre en el que se hicieron más visibles las diferencias entre ambos grupos, aunque las discrepancias estuvieron presentes durante todo el año. A principios de 2014, las señales sobre un nuevo acercamiento entre las dos principales organizaciones palestinas estuvieron determinadas por varios acontecimientos. Entre ellos, el anuncio del primer ministro palestino en Gaza, Ismail Haniyeh, de permitir el ingreso a la Franja de cientos de militantes de Fatah que tenían vetado el acceso al territorio desde las hostilidades de 2007, la excarcelación de siete militantes de Fatah en Gaza, las declaraciones de dirigentes de Fatah sobre la importancia de incluir a Gaza en el proceso hacia el Estado palestino, además de la celebración de varias reuniones entre representantes de alto nivel de ambos grupos en Gaza y Doha. Las diferencias persistieron en lo referente a la aproximación a Israel y Hamas mantuvo su postura crítica hacia las negociaciones iniciadas por la Autoridad Palestina (AP) en 2013. Dirigentes del grupo islamista cuestionaron abiertamente la legitimidad del presidente de la AP, Mahmoud Abbas, para negociar en nombre de toda la población palestina, en especial teniendo en cuenta que su mandato expiró en 2009 y se prohibieron las manifestaciones de apoyo a Abbas en Gaza en vísperas de su visita a Washington en marzo. En este contexto, el descarrilamiento de las negociaciones con Israel favoreció una vez más el acercamiento entre Fatah y Hamas.⁵⁶ **El grupo islamista y la OLP, liderada por Fatah, anunciaron un nuevo acuerdo de reconciliación el 23 de abril, con el propósito de formar un gobierno de unidad y de convocar las próximas elecciones en los territorios palestinos.** La noticia fue recibida con escepticismo, teniendo en consideración otros acuerdos similares adoptados en 2011 (en El Cairo) y 2012 (en Doha), que finalmente no prospe-

raron. No obstante, algunos analistas consideraron que algunos factores podrían favorecer la implementación de este acuerdo, entre ellas la necesidad de Hamas de sortear una situación de aislamiento y vulnerabilidad tras la caída del Gobierno de los Hermanos Musulmanes (HM) en Egipto, y la de Mahmoud Abbas de mejorar sus niveles de popularidad entre la población palestina. Israel, en tanto, reaccionó al anuncio de reconciliación con la ruptura de las negociaciones –ya estancadas– e insistió en que no reconocería a ningún Gobierno palestino que contara con el apoyo de Hamas. A principios de junio asumió el gobierno de unidad, encabezado por el primer ministro Rami Hamdallah e integrado por tecnócratas y políticos independientes comprometidos con el respeto a los principios exigidos por el Cuarteto para Oriente Medio (ONU, EEUU, Rusia y UE) –y no aceptados oficialmente por Hamas– referentes al rechazo a la violencia, el reconocimiento a Israel y el respeto a los acuerdos previos suscritos por la AP. En este contexto, la ONU, la UE y también EEUU se mostraron dispuestos a trabajar con el nuevo Ejecutivo palestino.

Tras la asunción del gabinete de consenso, el Gobierno de Gaza renunció. No obstante, ya en las semanas siguientes se hicieron patentes los conflictos entre Hamas y Fatah, principalmente en torno a dos cuestiones. En primer lugar, por el impago de salarios a unos 40.000 funcionarios contratados por Hamas desde que asumió el control del territorio en 2007 –la mitad de ellos para tareas de seguridad–, que no recibieron el pago bajo el argumento de que su situación sería revisada y aprobada por el nuevo Gobierno. Por el contrario, los funcionarios vinculados a Fatah –unos 70.000 que han continuado recibiendo sus sueldos a pesar de no haber trabajado durante años en la administración de Gaza– sí recibieron sus salarios, lo que causó irritación en Hamas y altercados entre simpatizantes de ambos grupos. Un segundo foco de conflicto estuvo determinado por el secuestro y posterior asesinato de tres jóvenes israelíes en Cisjordania, que fue atribuido por Israel a Hamas. El hecho de que la AP mantuviera su colaboración con las fuerzas israelíes durante la masiva campaña de arrestos que afectó principalmente a simpatizantes del grupo islamista en Cisjordania también fue motivo de distanciamiento entre las partes. Posteriormente, la ofensiva israelí sobre Gaza durante el verano bloqueó los acuerdos de reconciliación. La tregua suscrita por Israel y Hamas a finales de agosto dispuso que la administración de Gaza debía ser asumida por la AP, que tuvo un papel en el acuerdo para facilitar la entrada de bienes y materiales para la reconstrucción de la devastada Franja. Si bien Fatah y Hamas anunciaron un acuerdo para permitir el retorno de la AP a Gaza, continuaron haciéndose evidentes las tensiones entre ambas formaciones, Abbas insistió en acusar al grupo islamista de mantener un gobierno en la sombra en Gaza, y se mantuvieron las incertidumbres respecto a numerosos temas, como por ejemplo cómo se organizaría la cuestión de la seguridad en la Franja. **El**

56. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Gobierno de unidad se reunió por primera vez en Gaza en octubre, pero un mes después el primer ministro suspendió una visita al territorio tras una serie de ataques contra objetivos de Fatah en la Franja. A finales de año, ministros del Gobierno de unidad volvieron a Gaza, pero su visita también estuvo marcada por los incidentes, después de que las fuerzas de seguridad de Hamas impidieran la reunión prevista con los funcionarios contratados por la AP antes de la crisis de 2007. El tema de los funcionarios –que seguían sin cobrar, motivado numerosas protestas–, el de la seguridad –Hamas estaría dispuesto a ceder sólo los controles fronterizos de la Franja–, y el de las elecciones –que debían haberse celebrado a finales de 2014–, entre otros temas, seguían sin resolverse. Mientras, Fatah y Hamas continuaban intercambiando acusaciones por la incapacidad para abordar la severa crisis en Gaza y las disfuncionalidades del Gobierno de unidad.

Pese a un nuevo anuncio de reconciliación entre Fatah y Hamas y el establecimiento de un gobierno de unidad en abril de 2014, la relación entre los grupos palestinos continuó marcada por la hostilidad y la desconfianza

bién en Iraq.⁵⁷ Durante el primer semestre, algunos hechos destacados incluyeron el derribo de un avión militar sirio por parte de la Fuerza Aérea turca en marzo. Según la versión oficial turca, en el incidente se vieron implicados dos jets sirios que fueron advertidos de su intromisión en la zona aérea turca, pero que uno de ellos traspasó el límite fronterizo y sobrevoló el espacio aéreo turco a la altura de la provincia de Hatay. Damasco desmintió la versión de Ankara y acusó al Gobierno turco de colaborar con la oposición y, en concreto, de ser complaciente con las actividades de grupos yihadistas. Las autoridades turcas, en tanto, insistieron en negar una supuesta permisividad ante las acciones de grupos insurgentes radicales e informaron de la detención de

decenas de sospechosos por sus presuntos vínculos con al-Qaeda o ISIS. Según recuentos de prensa, en el primer trimestre de 2014 habían muerto al menos 70 personas a causa de hechos de violencia relacionados con la guerra en Siria, principalmente en la zona fronteriza, incluyendo civiles. Adicionalmente, a lo largo del año se informó de escaramuzas e incidentes que involucraron a la población siria refugiada en Turquía.

En este contexto, el avance de ISIS en Siria e Iraq constituyó un hecho revulsivo. **Las ofensivas de Estado Islámico en la localidad fronteriza de Kobane, de mayoría kurda, provocaron que cientos de combatientes del PKK cruzaran la frontera para auxiliar a los milicianos y las milicianas kurdas del YPG, considerada como la filial del PKK en Siria.** La intensificación de los controles fronterizos y la adopción de medidas para bloquear el flujo de combatientes alentaron diversas críticas contra el Gobierno turco, acusado por diversos sectores de actuar con impasibilidad –e incluso complicidad– ante la violencia de ISIS. La aproximación kurda a la crisis en Kobane motivó una escalada de violencia protagonizada por sectores kurdos en Turquía y las fuerzas de seguridad turcas.⁵⁸ Según algunos análisis, la posición turca estuvo condicionada por el secuestro por parte de ISIS de un grupo de 40 ciudadanos turcos en el norte de Iraq, que no fueron liberados hasta finales de septiembre. Tras este desenlace, no obstante, Turquía mantuvo su negativa a sumarse a la coalición internacional contra ISIS liderada por EEUU, pese a las presiones de Washington. La postura del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan insistió en la necesidad de establecer de una zona de exclusión aérea en el norte de Siria y en que la aproximación internacional al conflicto debía contemplar la amenaza del régimen de Bashar al-Assad. Las autoridades de Ankara se mostraron especialmente críticas y reacias a la entrega de armas a las fuerzas kurdas que combatían en Kobane, por temor a que los arsenales pasaran a ser controlados por el PKK y fortalecieran la posición del grupo. Tras impedir el paso de armas y combatientes a Kobane, en octubre Turquía dio

Siria – Turquía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores principales:	Siria, Turquía

Síntesis:

Las relaciones entre Siria y Turquía habían registrado una mejora en años recientes tras la firma del Acuerdo de Adana en 1998, que forzó la expulsión del grupo armado kurdo PKK y de su líder, Abdullah Ocalan, del territorio sirio. La puesta en marcha de la política exterior turca de “cero problemas con los vecinos” durante el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan había favorecido los acuerdos comerciales y fronterizos entre Damasco y Ankara. Este clima se vio enturbiado por el estallido de la revuelta en Siria en 2011, motivando un creciente distanciamiento entre las partes. Tras tomar la iniciativa para evitar el aislamiento del régimen de Damasco e instar sin éxito al Gobierno de Bashar al-Assad a impulsar reformas en el país, Turquía asumió una postura abiertamente crítica y de apoyo a la oposición siria. La posición turca también ha estado determinada por el intenso flujo de refugiados sirios que se ha visto obligada a gestionar y por el impacto de la crisis en la cuestión kurda. La tensión ha derivado en una serie de incidentes fronterizos que han hecho temer una posible escalada de violencia entre ambos países.

Siguiendo la tendencia del año anterior, la tensión entre Siria y Turquía **continuó caracterizándose por esporádicos incidentes fronterizos vinculados a la guerra en territorio sirio que propiciaron acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos**, aunque a partir de mediados de año esta situación quedó eclipsada por el impacto del avance del grupo armado Estado Islámico (ISIS) en Siria –y tam-

57. Véase el resumen sobre Iraq y el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).
58. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

luz verde al ingreso a la zona de 200 combatientes peshmergas procedentes del Kurdistán iraquí, dada su relación estratégica con el KRG.⁵⁹ En diciembre otro grupo de unos 150 peshmergas se sumaron al contingente destinado a Kobane para intensificar la lucha contra ISIS. Tras la expansión de las operaciones aéreas de la coalición internacional contra ISIS a Siria, Erdogan insistió en que su país no se sumaría a una plataforma anti-yihadista si no se

daba prioridad al fin del régimen de Assad y a la creación de una zona segura. A finales de año, sin embargo, las autoridades turcas afirmaron que colaborarían en el equipamiento y entrenamiento de sectores moderados de la oposición siria en colaboración con EEUU. Cabe destacar que Turquía continuó siendo uno de los principales receptores de personas refugiadas procedentes de Siria, más de un millón y medio según las estimaciones de ACNUR.

59. Véase el resumen sobre Iraq (Kurdistán) en este capítulo.